

lismo conservador católico); un pretorianismo agresivo y ambicioso, y una incipiente tecnocracia civil.

Una de las grandes preocupaciones del gobierno central, especialmente durante la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) fue el control y la cooptación de estas facciones rivales fisiparas. Para ello Calles hizo la guerra contra la Iglesia, en el campo de batalla y en el aula; redujo y profesionalizó el inflado ejército; favoreció al movimiento obrero, en especial a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), oficialista y encabezada por Luis N. Morones; y toleró —a veces estimuló tácticamente— la movilización de los campesinos. Si bien el control estatal de la sociedad civil aumentó así (dada la cuasi anarquía del período 1910-1920, difícilmente podía disminuir), el Estado que construyeron los líderes de Sonora (1920-1934) no era un leviatán autoritario. La tumultuosa sociedad civil de los años veinte desafió dicho control. Los cristeros combatieron a Calles hasta alcanzar un sangriento punto muerto; los caciques y caudillos locales se opusieron a la expansión del poder estatal; y el ejército se rebeló dos veces. Las elites regionales, tales como la poderosa plantocracia yucateca, se resistieron a las reformas de los que se proclamaban callistas. Los obreros y los campesinos organizados optaban frecuentemente por aliarse con el Estado, pero solía tratarse de una alianza condicional y táctica y había muchos ejemplos de disidencia popular.

El panorama político era muy diferente del que existía durante el porfiriato, con su control personalista y centralizado, su estrecha política de camarillas y su rotunda negativa a que las masas participasen en la política. En tiempos de Díaz se daban casos de disidencia y protesta populares, pero normalmente eran sofocados con rapidez; no adquirieron una forma institucional y, por supuesto, no se establecieron en el Estado porfiriano mismo. Es más, en el decenio de 1920 las exigencias y la retórica de los movimientos populares —y de los políticos que procuraban sacar provecho de los mismos— ya mostraban un radicalismo nuevo, una confianza inédita en sí mismos. La Revolución había socavado las antiguas certidumbres sociales y la deferencia que las acompañaba. La CROM, la confederación obrera oficial dominante, no era un simple cascarón del Estado callista: obligaba a los patronos a contar con los obreros como nunca antes. Los sindicatos independientes, tales como el de los ferroviarios y el de los petroleros (trabajadores del petróleo), se hallaban situados más a la izquierda, se resistían al abrazo de la CROM y se apoyaban en su propia fuerza industrial. De igual manera, el campesinado, que seguía constituyendo el grueso de la población, mostraba un talante diferente en comparación con la época prerrevolucionaria. Después de todo, los campesinos habían sido las fuerzas de choque de la Revolución. Es cierto que la reforma agraria oficial tardó en llegar y fue gradual: en 1930 sólo el 9 por 100 del valor de la tierra de México se había traspasado a propiedades ejidales (comunales). Pero estas cifras son engañosas y probablemente subestiman la escala del reparto de tierra; ciertamente no reflejan los cambios que la Revolución introdujo en las relaciones sociales y en la mentalidad. Los terratenientes conservaban en su poder el grueso de su tierra, pero en condiciones diferentes, más difíciles y onerosas. Puede que —en general— sus peones residentes siguieran siendo dóciles; pero los habitantes de los poblados vecinos, que tenían derecho a pedir tierra, presentaban una amenaza constante y enervadora. Por tanto, los terratenientes tenían que lidiar con un campesinado cada vez

más organizado y un Estado que, en sus manifestaciones regionales y nacionales, en modo alguno les era tan favorable y tan fiable como su predecesor porfiriano. Algunos terratenientes ya se habían arruinado durante la Revolución de 1910-1920; muchos tenían que soportar ahora impuestos más gravosos, mercados inestables y costes salariales más elevados. La clase terrateniente anhelaba la *belle époque* del porfiriato y lamentaba el surgimiento de agraristas problemáticos y de políticos advenedizos y demagógicos que les daban aliento. Algunos terratenientes actuaron con prudencia y desviaron su capital hacia la industria y el comercio urbanos, con lo cual aceleraron la muerte de la hacienda tradicional, acaparadora de tierras con su mano de obra barata. La clase terrateniente (que, huelga decirlo, variaba de una región a otra) no fue eliminada por la Revolución, pero resultó severamente desgastada, y en algunos estados, como Morelos profundamente debilitada. Así, mucho antes de la cirugía radical del decenio de 1930 el sistema de la hacienda mostraba los síntomas de una progresiva anemia debilitante, y sus futuros legatarios ya se estaban reuniendo alrededor del lecho del enfermo.

Mientras tanto, aunque la extrema violencia a escala nacional del período 1910-1920 había disminuido, la violencia local y la regional continuaban siendo endémicas. La masiva movilización campesina generada por la guerra de los cristeros en 1926-1929 asoló el México centrooccidental. En las localidades, el terrateniente luchaba contra el campesino, el agrarista contra el cristero. Los caciques combatían por el poder; las comunidades; por la tierra o por su independencia corporativa. La nave del Estado sonorense subía y bajaba empujada por las olas de una sociedad agitada. A veces —la perspectiva del tiempo transcurrido nos permite sugerirlo— México amenazaba con seguir el mismo camino que Colombia después de 1949: esto es, hacia un conflicto faccionalista, autónomo y endémico, por el estilo de la Violencia. Que no llegara a ocurrir se debió en cierta medida al arte de gobernar de que dio muestra la facción victoriosa: de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y, sobre todo, Calles, que nunca perdieron de vista la necesidad de integrar y reconstruir la nación. Más importante fue el hecho de que la violencia endémica de México era el resultado de una auténtica revolución social, no un sucedáneo de la misma. No era simplemente la violencia sin objeto, embrutecedora, de facciones recalcitrantes, tampoco la violencia que repetidamente perpetraba el antiguo régimen porfiriano. Y la acompañaba una serie de fenómenos importantes derivados de la Revolución: una movilidad social y espacial más marcada, la migración, así nacional como internacional; la ascensión de nuevos grupos y familias empresariales; la expansión de los programas de enseñanza; el indigenismo y el arte «revolucionario».

Por consiguiente, a finales del decenio de 1920 la Revolución ya había producido cambios importantes en la sociedad y la política mexicanas. A pesar de ello, el resultado de la Revolución seguía sin estar claro. Su curso seguía avanzando y había opiniones muy diferentes sobre adónde se dirigía. Clases, facciones y regiones disputaban unas con otras; creció el control que ejercía el Estado sobre la sociedad civil, pero incluso con el patrocinio por parte de Calles del nuevo partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, dicho control continuaba siendo desigual y a veces tenue. Se iba avanzando hacia la consecución de los amplios objetivos revolucionarios de construcción del Estado y desarrollo capitalista, pero el avance era lento y tropezaba con frecuentes obstáculos.

Y había serias discrepancias —incluso entre la elite gobernante— sobre los mejores métodos que debían adoptarse.

Por algún tiempo, durante la favorable coyuntura fiscal y económica de 1924-1926, pareció que el nuevo gobierno de Calles estaba imbuido de cierta confianza. La reforma de la banca y las obras públicas daban testimonio de los crecientes poderes del Estado. Con la intención de poner en práctica los controles constitucionales impuestos a la Iglesia y a la industria del petróleo, Calles desafió audazmente tanto a los católicos como a los gringos. Sin embargo, pronto tuvo que hacer frente a la revuelta cristera, al conflicto con Estados Unidos y al deterioro de la situación económica. El proyecto callista empezó a tambalearse y el presidente se desplazó hacia la derecha. En julio de 1928 el asesinato de Álvaro Obregón, ex presidente (1920-1924) y presidente electo en el momento de su muerte, sumó la crisis política a la recesión económica, que en México fue anterior a la crisis económica mundial de 1929. Calles respondió con habilidad, desplegando sus dotes de estadista. Rehusó prolongar su presidencia y prefirió ejercer el poder entre bastidores. Así, tres presidentes sucesivos (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez) gobernaron durante el sexenio siguiente mientras Calles, el «jefe máximo», ejercía el poder detrás del trono; de aquí viene el título convencional que se da a este período de transición: el maximato.

El maximato fue transicional en dos sentidos. En primer lugar, durante el mismo hubo un claro desplazamiento del gobierno personalista al institucional. Tras proclamar el fin de la política caudillesca, Calles convocó una asamblea del nuevo partido revolucionario oficial, el PNR, a principios de 1929. En el curso de aquel año agitado se aplastó una revuelta militar obregonista; se llegó a una conclusión negociada de la guerra cristera; y Ortiz Rubio, el insulso candidato del PNR, arrolló a la oposición liberal y antirreeleccionista de José Vasconcelos en las elecciones presidenciales de noviembre. Así pues, podemos situar en 1929 el comienzo de la hegemonía ininterrumpida del partido oficial.

No obstante, la institucionalización política del maximato fue acompañada del crecimiento de los conflictos sociales y la polarización ideológica. Aquí se encuentra la génesis del cardenismo, el movimiento político ligado al presidente Lázaro Cárdenas fue fruto de su tiempo; dio su nombre a un período que —a pesar de la supremacía presidencial mexicana— le moldeó a él antes que lo contrarior. No obstante, es válido ver la historia de México en el decenio de 1930 como la crónica de la ascensión y la dominación del cardenismo: proyecto nacionalista y radical que afectó fundamentalmente a la sociedad mexicana y que representó la última gran fase reformadora de la Revolución. No es menos cierto que el decenio de 1940 presenció el ocaso del cardenismo: el debilitamiento de su política, la eliminación de sus cuadros políticos, la ascensión de nuevos líderes entregados a otro proyecto.

Ningún historiador pone en duda la importancia del cardenismo, pero muchos discrepan en lo que concierne a su carácter. Tradicionalmente tanto los seguidores como los adversarios de la ortodoxia revolucionaria han considerado que en el cardenismo culminó la Revolución social. Otros lo han presentado como un intermedio dramático y radical dentro del proceso revolucionario, una desviación

casi bolchevique a ojos de algunos. En estudios recientes se ha vuelto a hacer hincapié en las continuidades, aunque de un tipo diferente: las de la construcción del Estado, el corporativismo y el desarrollo capitalista. Aquí el cardenismo encaja perfectamente en la Revolución, pero no se trata de la Revolución como vehículo de la redención nacional y del radicalismo popular, sino del estatismo y de la acumulación de capital.

Toda evaluación del cardenismo debe trascender los límites de la presidencia de Cárdenas. Su historia no es la de un único hombre, ni siquiera la de un solo sexenio. Tuvo sus orígenes en dos amplias tendencias socioeconómicas que se cruzaron con dos crisis políticas más específicas. En lo que se refiere a las alineaciones ideológicas, personales y de clase, es verdad que el cardenismo recuerda la Revolución de 1910. Pero también fue fruto de la depresión y de los conflictos sociales y replanteamientos ideológicos que ésta provocó. Si la primera fue una influencia autóctona, la segunda puede compararse con lo ocurrido en el conjunto de América Latina. El cardenismo también nació de sucesivas crisis políticas: la asociada con el asesinato de Obregón en 1928, que condujo a la formación del PNR; y otra más importante, a saber, la batalla por el control del partido y el gobierno que culminó con la lucha entre Calles, el jefe máximo, y Cárdenas, el presidente, en 1935-1936.

Esta lucha debe verse teniendo presente su trasfondo político inmediato: la creación del partido oficial, PNR, en 1929; la derrota de los militares obregonistas que se rebelaron aquel mismo año; y la manipulación, la humillación y, finalmente, la caída del maleable presidente Ortiz Rubio en 1932. Esta secuencia de acontecimientos demostró tanto la consolidación paulatina del régimen nacional como el omnipresente poder personal de Calles, que controló al nuevo presidente, Abelardo Rodríguez (1932-1934), de modo menos descarado pero no menos real. El logro de Calles —el mantenimiento del poder personal detrás y a pesar de la institucionalización formal de la política que él mismo había iniciado— fue más precario de lo que parecía a muchos. Le había granjeado numerosos y cordiales enemigos políticos; e hizo que cualquier presidente entrante (en especial el orgulloso y obstinado Cárdenas, que había presenciado desde muy cerca la destrucción de Ortiz Rubio) fuera muy consciente del dilema que se le planteaba en sus relaciones con el jefe máximo: ¿mostrarle deferencia o desafiarle?

Los enemigos y los críticos de Calles y el callismo crecieron en número a consecuencia de los efectos de la depresión. Su impacto en México fue más acumulativo que instantáneo, y menos serio y prolongado que en economías basadas en el monocultivo como la chilena o la cubana. El país ya había sufrido por causa de la caída de los precios de las exportaciones, la deflación y la contracción de la economía desde 1926. Entre 1929 y 1932 el comercio exterior descendió en unos dos tercios; la capacidad de importar quedó reducida a la mitad; el desempleo creció, inflado por la repatriación de unos trescientos mil mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos. Sin embargo, dentro de la gran «lotería de los productos» de la depresión, México fue relativamente afortunado. El oro, la plata y el petróleo, que representaban conjuntamente tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas, no sufrieron una caída tan extrema de la demanda y los precios como la que afectó a otras materias primas; asimismo, el empleo en

el sector de exportación era pequeño (sólo un 3 por 100 de los trabajadores no rurales generaba dos tercios de los ingresos de exportación de México), por lo que las repercusiones en los salarios, el empleo y los niveles de vida fueron menos acentuadas que en economías como la brasileña, por ejemplo, que vivían de la exportación agraria basada en una fuerza de trabajo masiva. Mientras tanto, el importante sector de la agricultura de subsistencia de México se recuperó de las malas cosechas de 1929-1930 (el clima resultó benignamente contracíclico), a la vez que la industria manufacturera —que satisfacía la demanda nacional— se veía afectada de forma menos severa que la industria extractiva y pudo beneficiarse de la imposibilidad de importar. La depresión estimuló de esta manera un proceso de industrialización de sustitución de importaciones.

Entre 1929 y 1932, por tanto, es posible que el producto interior bruto (PIB) de México disminuyera en alrededor del 16 por 100. Es difícil evaluar el efecto que esta recesión surtió en las masas. No hay duda de que los salarios reales descendieron (también, en este caso la tendencia ya se observa en 1927) y algunos historiadores identifican una fase de «movilización frecuente pero fragmentaria» —caracterizada por huelgas, ocupaciones de tierras, y marchas del hambre— que coincidió con la depresión económica.

Es más claro que la militancia popular, que siguió los patrones habituales, se hizo más acentuada a medida que la economía fue reactivándose lo cual se produjo con cierta rapidez, gracias en parte a la política reaccionaria keynesiana que adoptó Alberto Pani en su condición de secretario de Hacienda (1932-1933). Pani aumentó la oferta monetaria (31 por 100 en 1932, 15 por 100 en 1933), y sacrificó el peso en aras del crecimiento. Las exportaciones, el empleo y los salarios reales se recuperaron. En 1934 el PIB volvía a encontrarse ya en los niveles de 1929, el peso se estabilizó y la perspectiva económica era alentadora. Así pues, Cárdenas subió al poder en el momento en que los efectos de la depresión retrocedían, aun cuando sus repercusiones políticas seguían notándose. Para muchos el maximato (1928-1934) había sido un periodo difícil, y la sucesión presidencial ofrecía ahora una apertura política a través de la cual podían encauzarse los agravios populares acumulados.

La elite política respondió a la depresión de distintas maneras y ello produjo una polarización en el seno del naciente PNR. Para Calles y sus partidarios —los «veteranos»— los acontecimientos recientes en modo alguno invalidaban el modelo existente de desarrollo capitalista, el basado en la empresa privada, las exportaciones, las inversiones extranjeras, el control riguroso de los obreros y un Estado generalmente «pasivo». Al contrario, había que mejorar el modelo, y restringir anomalías como la agricultura ejidal no era la medida menos importante que podía tomarse para ello. En 1930 Calles declaró que la reforma agraria había sido un fracaso: el ejido fomentaba la pereza; el futuro estaba en la agricultura capitalista, de propiedad privada. Se hicieron esfuerzos por concluir rápidamente la reforma y la concesión de ejidos pasó a ser menos frecuente después del punto máximo de 1929. Otro factor que alarmó a Calles fue la agitación obrera: el capital necesitaba seguridad para sacar al país de la recesión, y era necesario tomar medidas severas para limitar las huelgas. Calles continuó machacando el viejo tema anticlerical, motivo principal de la política en el decenio de 1920, y el papel de la enseñanza como medio de transformación revo-

lucionaria. Los objetos adecuados para la ingeniería social sonorenses no fueron los medios de producción, sino las mentes. Se reavivó el anticlericalismo y el nuevo secretario de Educación, Narciso Bassols, dio nuevo estímulo a la política de laicismo (1931). Tres años después, en su célebre Grito de Guadalajara, Calles pidió una revolución «psicológica», una «nueva conquista espiritual» para ganar el corazón y el cerebro de los jóvenes para la Revolución. Calles y sus «veteranos» se aferraron a las normas y las panaceas del decenio de 1920 y, en medio del movimiento político y social de principios del de 1930, parecían de forma creciente una fuerza favorable al conservadurismo, admirada por la derecha. En verdad que los ejemplos fascistas influyeron en el pensamiento de Calles, que citaba a Italia y a Alemania (así como a la Unión Soviética) como casos de educación política coronada por el éxito.

Calles se daba cuenta de que una nueva generación estaba alcanzando la madurez política, una generación para la cual las heroicidades de 1910 eran mitos o historia y que cada vez se mostraba más desilusionada con la Revolución de tipo sonorenses. Rechazaba la ideología del decenio de 1920 —anticlerical, liberal en lo económico, conservadora en lo social— y abogaba por cambios socioeconómicos radicales. Participaba en el desplazamiento mundial desde el *laissez-faire* cosmopolita hacia el dirigismo nacionalista. Si, al igual que Calles, se inspiraba en modelos extranjeros, era el New Deal o la planificación económica de la Unión Soviética (mal interpretada, sin duda) lo que tenía importancia. Era imposible hacer caso omiso de los hombres y las nuevas ideas, ni siquiera mientras Calles y los callistas todavía gobernaban. A partir de 1930 se introdujeron de forma provisional normas reformistas e intervencionistas. Una Ley Federal del Trabajo (1931) ofreció concesiones en lo referente a los horarios, las vacaciones y los convenios colectivos, a cambio de que el Estado reglamentara más rigurosamente las relaciones industriales. La derecha consideró que la nueva ley era peligrosamente radical, la izquierda la criticó y la tachó de fascista, mientras que los más perspicaces se dieron cuenta de que los salarios mínimos podían reforzar la demanda interna y beneficiar con ello a la industria. En 1934 se creó un Departamento Agrario autónomo y un nuevo Código Agrario permitió por primera vez que los peones de las haciendas solicitaran concesiones de tierra. El Código también ofrecía garantías a las propiedades particulares; tal ambivalencia reflejaba divisiones profundas dentro del PNR. Del congreso que el partido celebró en 1933 salió un Plan Sexenal que, pese a su falta de detalles políticos, contenía elementos del nuevo planteamiento que exigía la nueva generación de tecnócratas, políticos e intelectuales. El plan, que criticaba implícitamente el modelo sonorenses, recalca el papel del Estado intervencionista y la necesidad de que fueran mexicanos quienes explotaran los recursos de México; prometía a los trabajadores salarios mínimos y el derecho a convenios colectivos; y subrayaba la importancia primordial de la cuestión agraria, que requería soluciones radicales, incluyendo la división de las grandes propiedades.

Por consiguiente, en vísperas de la presidencia de Cárdenas el clima ideológico estaba cambiando con rapidez. Pero las ideas nuevas coexistían con los viejos cuadros políticos, que impedían poner en práctica medidas radicales al mismo tiempo que toleraban el radicalismo retórico que dejaba intacta la sustancia de su poder. Tampoco la candidatura de Cárdenas pareció amenazar su posición. Al escoger a Lázaro Cárdenas como candidato oficial para las elecciones de 1934

el PNR se inclinó hacia la izquierda; pero la vieja guardia se consoló pensando que de esta forma podría controlarla mejor. Cárdenas había demostrado su radicalismo —sin salirse de los términos ortodoxos, institucionales— durante su época de gobernador de Michoacán (1928-1932); pero en todo lo demás era un político modelo que durante su carrera había pasado por las filas del ejército revolucionario (donde por primera vez sirvió a las órdenes de Calles), ocupado importantes puestos de mando en el decenio de 1920 y alcanzando la presidencia del partido y la Secretaría de Guerra. Lugarteniente leal —aunque no colaborador íntimo— de Calles, era un general clave en la jerarquía político-militar. Había ayudado a aplastar cuartelazos y se había encargado de desarmar a los agraristas de Veracruz en 1932. Aunque no fuese el primer elegido de Calles, era un candidato seguro; en parte porque carecía de una base local (su sucesor en Michoacán había desmantelado la maquinaria cardenista que hubiera allí) y en parte porque parecía leal, hasta insulso y obtuso (reputación que su vida personal, austera, honrada y puritana, reforzaba). Aunque la izquierda institucional del interior del PNR respaldaba su candidatura, su historial no le granjeaba el apoyo de los obreros ni de la izquierda independiente; los comunistas presentaron un candidato rival y declararon que no estaban «ni con Calles ni con Cárdenas, sino con las masas cardenistas».

Sin embargo, una vez le hubieron escogido candidato del partido, Cárdenas empezó a dar muestras de una discolia heterodoxia. El alcance y la actividad de su campaña electoral de 1934 superaron a los de todas las campañas anteriores (con la posible excepción de la de Madero en 1909-1910). Viajando unos treinta mil kilómetros, visitando ciudades, fábricas y pueblos, Cárdenas creó un estilo peripatético que continuaría durante su presidencia y que le llevaría a desplazarse a las provincias en repetidas ocasiones (pasó más de un año del sexenio fuera de Ciudad de México), a veces a comunidades remotas y lugares «casi inaccesibles» que, con gran consternación del séquito presidencial, hacían necesario viajar a caballo o incluso, según se decía, nadar hasta la playa desde el barco presidencial.¹ La campaña electoral y las giras posteriores dieron al presidente un conocimiento directo de las condiciones que existían en el país y se dice que contribuyeron a radicalizarle, lo cual parece verosímil. Unidos a su retórica reformista, especialmente agrarista, estos viajes suscitaron las expectativas y las exigencias populares; y demostraron a las comunidades remotas la realidad del poder presidencial. Sin duda Calles y los conservadores se dijeron que estos bríos del principio acabarían consumiéndose; que una vez se hubiera instalado cómodamente en el palacio presidencial, todavía se le podría aplicar la vieja canción que decía:

el que vive en esta casa
es el señor presidente
pero el señor que aquí manda
vive en la casa de enfrente.²

1. Rees, Ciudad de México, 19 de diciembre de 1939. FO (Foreign Office) 371/24217. A359, Public Records Office, Londres.

2. Luis González, *Historia de la Revolución mexicana, 1934-1940: Los días del presidente Cárdenas*, México, D.F., 1981, p. 44.

Después de la animada campaña electoral, las elecciones propiamente dichas resultaron aburridas, muy diferentes de las contiendas de 1929 o 1940, y el nuevo presidente, que obtuvo una victoria aplastante, asumió el poder en diciembre de 1934 «en medio de la mayor calma posible».³

Pareció que también la estabilidad y la continuidad se vieron atendidas en la composición del nuevo gabinete, en el que los callistas ocupaban algunos cargos clave y pesaban más que los partidarios de Cárdenas. Las esperanzas de Calles de que continuara el maximato se reflejaron en el disgusto de la opinión pública, que veía en Cárdenas a otro pelele, y en los temores del propio Cárdenas de seguir el mismo camino que Ortiz Rubio. Mientras Cárdenas iba familiarizándose con el aparato del poder, callistas recaitrantes como el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal —cuyos excesos anticlericales empezaban a aumentar—, se esforzaban por crear problemas y debilitar al nuevo ejecutivo.

Sin embargo, el control callista no era tan total como parecía; quizá nunca lo había sido. En las provincias, el callismo de muchos caciques locales era necesariamente provisional. Mientras la obediencia a Calles apuntalase el poder local, eran sus partidarios, pero una crisis nacional podía provocar una racha de defeciones. Así ocurrió en 1935-1936. A escala nacional, donde la política era más volátil, el callismo andaba de capa caída. Sus adeptos seguían controlando secretarías clave, puestos de mando del ejército y sindicatos, pero una nueva generación se agolpaba en la puerta, apartando a la generación «veterana» que había nacido en el decenio de 1880 y que había conquistado el poder durante la Revolución armada. (Hay que señalar, sin embargo, que el progreso de los recién llegados también hacía necesarias las alianzas con veteranos —Saturnino Cedillo, Juan Andrés Almazán, Cándido Aguilar— que tenían fuerza en San Luis, Nuevo León y Veracruz, respectivamente, y estaban dispuestos a renegar de Calles.) Esta generación nueva significaba un cambio de carácter y de acento político. Sus miembros tendían a ser más urbanos y cultos y menos obviamente nortños que sus predecesores; y, como toda generación que sube, se concentraba en los defectos de sus antepasados (sus pecados de comisión: el anticlericalismo, el militarismo, la corrupción; sus pecados de omisión: las reformas agraria y laboral), y en su lugar recañaba la nueva política que se exponía en el Plan Sexenal. Eran libres de hacer todo esto porque estaban menos ligados por los compromisos previos de la mediana edad y de una carrera ya asentada. Los viejos revolucionarios habían cumplido su «misión histórica», declararían más adelante Cárdenas; había llegado el momento de que una generación nueva diese un paso al frente «para que las masas puedan beneficiarse de perspectivas políticas diferentes, producidas por hombres que están frescos».⁴

Las luchas internas de la elite eran tanto más significativas cuanto que coincidían con las demandas y las presiones que se hacían evidentes en todo el país y que la administración entrante tuvo que afrontar en seguida. Las elites rivales manipulaban a las masas, pero hasta cierto punto también éstas manipulaban a aquéllas. Así, todo presidente que ofreciera resistencia al control del jefe máximo, o que buscara el apoyo de las masas que se oponían al conservadurismo ca-

3. Farquhar, Ciudad de México, 6 de diciembre de 1934. FO 371/18705. A706.

4. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 57.

llista, tenía que desplazarse hacia la izquierda, hacia los sindicatos, cada vez más combativos, y hacia el campesinado, cuya agitación iba en aumento. Porque ahora, al reactivarse la economía, proliferaban las huelgas. Las cifras oficiales, que muestran un incremento prodigioso (13 huelgas en 1933; 202 en 1934; 642 en 1935), son significativas, pero engañosas: reflejan un cambio de la política del gobierno ya que aumentó el número de huelgas reconocidas como legales. Aunque cuesta obtener cifras relativas a las huelgas *de facto*, la evidencia no cuantitativa es abrumadora: los paros laborales afectaron a los ferrocarriles (foco de activismo sindical desde hacía mucho tiempo), las minas y las fundiciones, los campos petrolíferos y las fábricas textiles. En el año 1934 hubo una oleada de huelgas sin precedentes en estos sectores y en otros menos importantes. Sólo en Ciudad de México había sesenta huelgas pendientes cuando Cárdenas asumió el poder en diciembre; y en los primeros meses de 1935 hubo huelgas importantes contra el Águila Oil Co., en los tranvías y los ferrocarriles, y en las haciendas comerciales, así como conatos de huelga general en Puebla y Veracruz. Se ha dicho que Cárdenas heredó una «explosión sindical».⁵ Las reivindicaciones eran básicamente económicas (algunos huelguistas pretendían recuperar lo que habían perdido a causa de las reducciones salariales de años recientes), pero se expresaban con una combatividad inusitada. Una elevada proporción de huelgas se declaraban por simpatía: los electricistas de Tampico fueron a la huelga para apoyar las reivindicaciones obreras contra la Huasteca Oil Co., y recibieron a su vez apoyo de lugares tan lejanos como San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Michoacán y Jalisco.

Este estado de cosas reflejaba tanto la radicalización de la política nacional como la creciente complejidad de la organización de la clase trabajadora. Desde su apogeo en el decenio de 1920 la CROM había perdido mucho apoyo. En 1929 Fidel Velázquez y los «cinco lobitos» se extinguieron, llevándose consigo treinta y siete sindicatos, incluido el grueso de los trabajadores organizados en la capital; las siguieron los electricistas y los ferroviarios —tradicionalmente bien organizados y combativos—, que formaron la Cámara de Trabajo. En 1933 la CROM se dividió otra vez cuando el ala radical de Vicente Lombardo Toledano rompió con el liderazgo de Morones. La CROM —debilitada políticamente desde el asesinato de Obregón— se encontró con que su número de afiliados quedaba muy reducido a la vez que perdía irrecuperablemente el monopolio de la representación obrera dentro del PNR y de las juntas de arbitraje laboral. Mientras tanto los disidentes —la Federación Sindical del Distrito Federal (FSTDF) de Velázquez, la CROM lombardista y otros grupos contrarios a la CROM, incluidos los electricistas— se unieron en octubre de 1933 para formar la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOOCM), que hizo suya una forma de sindicalismo más nacionalista y militante. También los comunistas, empujados a la clandestinidad después de 1929, formaron un nuevo frente obrero, la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), que reclutó muchos adeptos entre los maestros y los trabajadores rurales (especialmente en La Laguna y Michoacán), en la capital y en el bastión conservador de Nuevo León. Las diatribas que Calles y la CROM lanzaban contra el comunismo no eran exclusi-

vamente fruto de la paranoia: en 1935 la línea oficial del partido ya impulsaban a la CSUM y al Partido Comunista Mexicano (PCM) hacia la formación de un frente común con fuerzas progresistas, entre las que se encontrarían la CGOOCM de Lombardo y, finalmente, el gobierno de Cárdenas.

Entretanto resucitó el espectro del agrarismo. Después del gran cataclismo de 1910-1915 la protesta agraria había disminuido o se había visto encauzada hacia la reforma oficial —a menudo manipuladora— que alcanzó su apogeo en 1929. La CROM había hinchado su fuerza nominal con la incorporación de campesinos y se habían reclutado agraristas para combatir a los cristeros. Los antiguos puntos de conflicto agrario, tales como el Morelos de Zapata, el Valle del Maíz de Cedillo, habían experimentado el sedante de la reforma controlada; otros —La Laguna, Michoacán— la represión concertada, así física como ideológica, de gobernadores, generales, terratenientes y no pocos clérigos. Sin embargo, en el decenio de 1930 las corrientes represadas del agrarismo volvieron a crecer y amenazaron con desbordarse. Los gobernadores de algunos estados ya habían dado ejemplo: Adalberto Tejeda en Veracruz, Portes Gil en Tamaulipas, el propio Cárdenas en Michoacán. Aunque con frecuencia actuaban así pensando en su propio provecho político, seguía siendo necesaria la movilización, que a su vez ofrecía experiencia y oportunidades. Pero la movilización local era precaria y no tardó en fracasar, tanto en Veracruz como en Michoacán. No obstante, las elecciones y la nueva presidencia aumentaron las expectativas agrarias y avivaron los temores de los terratenientes. La lucha anónima que se libraba en gran parte de las zonas rurales pasó a ser explícita, perceptible y a relacionarse directamente con la lucha por el poder nacional. Los primeros años del decenio de 1930 fueron testigos de esporádicas ocupaciones de tierras, repetidas huelgas rurales y más agitación, así local como nacional, en pro del reparto de tierras. La administración Rodríguez se vio empujada hacia la reforma, muy a su pesar; la de Cárdenas la abrazó con entusiasmo.

La radicalización del régimen estuvo estrechamente ligada a la lucha por el poder que dominó el período 1934-1936 y en la cual la conducta de Calles no fue menos importante que la de Cárdenas. Conocido por su clerofobia, enemigo del agrarismo y de la agitación laboral, Calles resultó incapaz de adaptarse a los cambios del clima político. Cuando políticos obsequiosos acudieron a Cuernavaca para hacerle la corte, Calles les habló del peligro que la subversión industrial representaba para la economía y, aunque dedicó palabras amables a Cárdenas, puso como un trazo a Lombardo y a los líderes obreros radicales, denunciando tales «intereses bastardos» e insinuando la probabilidad de que se repitiera la destitución presidencial de 1930. Estas «declaraciones patrióticas», como las llamó la prensa callista, se difundieron rápida y ampliamente. A medida que el enfrentamiento se agudizaba, Calles empezó a llamar la atención sobre las flaquezas de Cárdenas, denunció las «tendencias comunistas» que veía detrás de todo ello y señaló el sano ejemplo que daban los estados fascistas de Europa.⁶ Habida cuenta de su carácter, así como de las presiones políticas que recibía, Cárdenas no podía por menos de responder; no estaba dispuesto a ser un Ortiz Rubio. Los líderes an-

5. Alicia Hernández Chávez, *Historia de la Revolución mexicana. Período 1934-1940: La mecánica cardenista*, México, 1979, p. 140.

6. John W. F. Dulles, *Yesterday in Mexico: A Chronicle of the Revolution, 1919-1936*, Austin, Texas, 1961, pp. 636-639 (hay trad. cast.: *Ayer en México: una crónica de la Revolución, 1919-1936*, FCE, México, D.F., 1977); González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 78.

ticallistas —radicales como Tejeda, oportunistas como Almazán— deseaban vivamente que el jefe máximo se llevara su merecido. Lo mismo querían la opinión pública y los trabajadores organizados. En la izquierda la amenaza de un nuevo maximato, de represión, incluso de un desplazamiento hacia el fascismo engendró un gran deseo de solidaridad que vino a complementar la línea oficial que en aquellos momentos dictaba Moscú. En el período 1934-1935 México fue tierra fértil para el frentepopulismo.

Al pasar al ataque, Cárdenas y sus aliados se enfrentaron a un adversario que todavía era formidable. Calles podía proclamar afablemente su retirada de la política (como hizo en junio de 1935, a raíz del furor que despertó la entrevista de Cuernavaca) y podía confesar pícaramente que prefería el golf a la política, como hizo en diciembre, al volver de Estados Unidos. Sin embargo, no podía disimular que continuaba albergando ambiciones y que no le gustaba el rumbo que seguía el nuevo régimen, a la vez que poderosos grupos le estaban empujando hacia un enfrentamiento. El sector empresarial temía al activismo de los trabajadores y esperaba que Calles le brindara tranquilidad, al tiempo que la clase media urbana estaba harta de la oleada de huelgas que trastornaba la vida en las ciudades. Había aún muchos políticos callistas en el Congreso, el partido, la CROM y los gobiernos de los estados, hombres cuyo futuro político estaba hipotecado con el del «jefe máximo». También en el ejército había elementos inquietos, mientras Estados Unidos veía con preocupación el giro que iba tomando la política y esperaba —quizá hacía algo concreto en este sentido— que hubiera un acuerdo en lugar de un enfrentamiento entre los dos. Políticos con experiencia, como el callista Juan de Dios Bojórquez, que en aquel momento era el secretario de Gobernación, también aconsejaban que se buscara una solución de compromiso, arguyendo que el enfrentamiento podía llevar a la guerra civil y destruir la preciosa estabilidad política conseguida por los sonorenses. Como sugiere este panorama, en los cálculos políticos había elementos de fanfaronería. Calles podía desestabilizar la nueva administración, pero ello representaría un grave riesgo para la obra de su vida. En cuanto a Cárdenas, si rechazaba una fórmula satisfactoria para ambas partes, tendría que buscar el apoyo de la izquierda, lo cual llevaría aparejados nuevos compromisos radicales.

En estas circunstancias, Cárdenas desenmascaró a Calles. Se cercioró de la lealtad de algunos hombres clave, así políticos como generales; y, a raíz de la entrevista de Cuernavaca, destituyó a varios ministros del gabinete que eran callistas y ascendió a varios de sus propios hombres, entre los cuales había algunos veteranos anticallistas (en esta crisis fue importantísimo el apoyo de figuras tales como Cedillo, Almazán y Portes Gil). Al observar el desplazamiento de los grandes electores, el bloque callista en el Congreso se desmoronó. Hubo entonces una leve purga en el PNR: se destituyó a los gobernadores indóciles, como el notorio Garrido Canabal, gobernador de Tabasco; y los caciques locales se apresuraron a cambiar de bandera. El ejército planteaba un problema más difícil, pero en este caso fueron una ayuda para Cárdenas sus largos años de servicio en las fuerzas armadas y la solicitud que mostraba para con los militares, así como la lealtad de Manuel Avila Camacho, que, en su puesto de subsecretario de la Guerra, había defendido constantemente la causa cardenista. Se efectuaron cambios en la estructura de mando del ejército, se distribuyeron hombres leales por todo el país y se tomaron medidas parecidas en el caso de la policía. Esta limpieza política, que ya estaba muy avanzada a mediados de 1933, permitió a Cárdenas hacer ta-

blas; durante el año siguiente el presidente pudo pasar a la ofensiva, seguro de la victoria. Mientras tanto, una de las consecuencias de esta lucha fue mucho movimiento de generales y políticos. En 1938 de los 350 generales que Cárdenas había heredado, 91 ya habían sido destituidos. Entre las bajas se contaban ahora antiguos aliados como Saturnino Cedillo, cacique del estado de San Luis, y Joaquín Amaro, el principal arquitecto del ejército profesional posrevolucionario. Incluso en el momento en que entraba en su fase institucional, radical, la Revolución conservaba un carácter darwiniano.

La lucha en el seno de la élite afectó de forma insólita la naturaleza de la política nacional. Cárdenas, por ejemplo, se propuso refrenar el anticlericalismo extremo que había caracterizado al callismo y que probablemente era su rasgo más odiado. Después de una breve tregua entre la Iglesia y el Estado en 1929, el anticlericalismo oficial revivió en 1931; cuando Cárdenas subió al poder los excesos anticlericales de Garrido seguían igual que antes mientras que unos siete mil cristeros continuaban luchando por una causa perdida en el norte y el oeste. Cárdenas obró con prudencia. Aunque había tratado a los cristeros más decentemente que la mayoría de los comandantes del ejército, estaba cortado por el patrón anticlerical. Seguía repitiendo la vieja canción de la opresión clerical; y su política educativa, que hacía hincapié en la educación socialista, estaba calculada para irritar la sensibilidad de los católicos. Pero la sabiduría política conspiró con la moderación personal para dictar cierto grado de acercamiento. El asunto del anticlericalismo marcó una distancia conveniente entre el nuevo régimen y el anterior; Calles continuaba atacando al clero, pero Cárdenas se mostraba más circunspecto; y Garrido, que trajo a sus esbirros de camisa roja de Tabasco a Ciudad de México (donde ocupó brevemente el puesto de secretario de Agricultura), atrajo sobre sí tanto las protestas de los católicos como el enojo presidencial, lo que condujo a su caída. Se dijo que los católicos gritaron «¡Viva Cárdenas!» por las calles de la capital. A partir de aquel momento se aflojaron progresivamente las ordenanzas anticlericales más rigurosas (que limitaban el número de sacerdotes y de iglesias, así como la difusión de literatura religiosa), lo cual alegró a los fieles y tranquilizó al devoto Josephus Daniels, embajador de Estados Unidos. El presidente puso especial empeño en señalar que la educación socialista combatía el fanatismo y no la religión por sí misma: incluso fue visto abrazando a un sacerdote en público. Si bien algunos *enragés* continuaron escribiendo folletos anticlericales y cometiendo actos de vandalismo en las iglesias, eran una minoría cada vez más reducida. Las famosas jeremiadas de Graham Greene ya estaban desfasadas cuando su autor las escribió.

El contrapunto de este cese de las hostilidades entre la Iglesia y el Estado fue el creciente conflicto entre las clases sociales. El presidente parecía alentarlo fomentando el apoyo de las masas y utilizando una retórica radical, pero su gobierno respondía a las demandas en la misma medida en que las iniciaba. El desmoronamiento de la CROM anunció un activismo político más militante por parte de la clase trabajadora, y sindicatos y políticos rivales competían unos con otros en sus intentos por captar afiliados. Los sindicatos se alinearon detrás de Cárdenas y organizaron manifestaciones para protestar por las declaraciones antiobreras de Calles, además de librar luchas callejeras con sus adversarios callistas y conservadores (como el movimiento fascista de los camisas doradas fascistas). Y, si bien la clase obrera urbana estaba en la vanguardia de esta movilización semioficial, el

campesinado no permaneció inmóvil. De nuevo unos movimientos espontáneos se mezclaron con la lucha en el seno de la elite y contribuyeron a formar una nueva coalición radical. A escala nacional, organizaciones agraristas como, por ejemplo, la Confederación de Campesinos Mexicanos (CCM) habían apoyado a Cárdenas en su campaña para llegar a la presidencia. A escala local, agraristas en apuros como los de Chiapas, que tenían enfrente a un gobernador hostil, se encontraron ahora con un que podían recurrir a un «centro» que simpatizaba con ellos y que a su vez podía movilizar a los agraristas contra el callismo. Al acelerarse el ritmo de la reforma agraria, pronto se contaron entre las víctimas algunos «veteranos» de la Revolución: Calles y su familia; los hermanos Riva Palacio, caciques del estado de México, sobre los que pesaban amenazas de expropiación y de expulsión del partido oficial; los gobernadores Villarreal, de Tamaulipas, y Osorio, de Querétaro, cuya posición se había visto socavada por la oposición agrarista; Manuel Pérez Treviño, cacique de Coahuila y rival derechista de Cárdenas para la candidatura presidencial en 1934, que, al igual que otros, sufrió a causa del gran reparto en La Laguna en 1936. El agrarismo oficial ya era un arma de probada eficacia cuando se empleó para desposeer a Cedillo en 1938, que fue quizá el caso más sonado.

Para entonces hacía ya mucho tiempo que se había resuelto el cisma nacional. Con su hábil combinación de alianzas tácticas y movilizaciones populares, Cárdenas había derribado al maximato y puesto fin a la era de dominación de los sonorenses. Después de pasar seis meses en Estados Unidos, Calles había sido recibido con un coro de censuras al volver a finales de 1935. Al reanudarse la polémica y la violencia callejera, el gobierno aprovechó un ataque terrorista contra un tren en Veracruz para tomar medidas contra sus enemigos. La policía detuvo a los callistas más destacados: Morones, Luis León y el mismísimo Calles, al que encontraron en cama en su finca, cerca de la capital, reponiéndose de una gripe y leyendo *Mein Kampf*. Se dijo que seguía inmerso en los delirios de Hitler cuando le metieron en el avión que le llevaría a Estados Unidos. Así pues, en la primavera de 1936 Cárdenas ya se había liberado de la tutela de Calles, además de afirmar su poder presidencial y demostrar una inesperada combinación de resistencia y perspicacia. Todo esto se había logrado con poca violencia. El conflicto institucional estaba desplazando la fuerza a un segundo término, al menos en el nivel superior de la política, donde los «sórdidos asesinatos, como forma de imponer la voluntad oficial... prácticamente desaparecieron» durante el sexenio.⁷ En el curso de este proceso había sido necesario estimular las exigencias y la movilización populares y el gobierno había «trazado una ruta hacia un destino desconocido» que no resultaría clara hasta que se llevaran a cabo las reformas radicales de 1936-1938.⁸

La reforma agraria fue la política clave del régimen en 1936-1937: Sirvió a la vez de arma política para abatir a los enemigos y de instrumento para promover la integración nacional y el desarrollo económico. Pero su papel instrumen-

7. Frank L. Kluckhohn, *The Mexican Challenge*, Nueva York, 1939, p. 3. En el nivel local el descenso de la violencia política fue más lento y desigual.

8. Nora Hamilton, *The Limits of State Autonomy: Post-revolutionary México*, Princeton, 1982, pp. 144-145 (hay trad. cast.: *Los límites de la autonomía del Estado*, Era, México, D.F., 1983).

tal) y manipulador, destacado por estudios recientes, no debe exagerarse. La reforma fue también una respuesta a las reivindicaciones populares, que a veces se sostenían ante la oposición oficial en los estados donde el agrarismo se consideraba sospechoso desde el punto de vista político: Sonora, Chiapas, Veracruz. Nada de esto era nuevo, pero ahora la reforma agraria iba más lejos y era más rápida, y sus objetivos nacionales eran más ambiciosos. Mientras que Calles había declarado que la reforma estaba terminada, Cárdenas, respaldado por el ruidoso sector agrarista, la consideraba el medio de transformar la sociedad rural y, con ella, la nación. De origen provinciano, michoacano, Cárdenas simpatizaba de verdad con el campesino, era aficionado a la vida rústica y sentía cierta antipatía puritana por la ciudad (lo cual le convertía en blanco de las burlas de los ingeniosos cosmopolitas). A diferencia de sus predecesores sonorenses, no concebía el ejido como una estación de paso hacia el capitalismo agrario y tampoco como un simple paliativo político, sino como la institución clave que regeneraría el campo, liberaría al campesino de la explotación y, si recibía el respaldo apropiado, fomentaría el desarrollo nacional. En este sentido, el nuevo recurso del ejido colectivo, que por primera vez hacía posible la expropiación general de grandes haciendas capitalistas, tenía que ser importantísimo. Finalmente, el ejido sería el campo de formación política de un campesinado culto y dotado de conciencia de clase. En el momento culminante de la campaña agrarista no se fijaron límites para el potencial del ejido. Cárdenas declaró: «Si se cuida la organización del ejido como hasta ahora se ha planeado, es posible que los ejidatarios logren absorber toda la tierra que hoy queda fuera de su jurisdicción».⁹

Un proyecto así podría calificarse de utópico, ingenuo y populista, pero es indudable que no puede verse como una estrategia dirigida al desarrollo industrial, favorable a la acumulación de capital. Y, por supuesto, tampoco lo veían en estos términos en aquel tiempo; al contrario, se granjeó la hostilidad unánime de los terratenientes y de la burguesía.

Esta supremacía agrarista —breve y anómala dentro de la historia de la Revolución— hay que verla en el contexto de la época. El antiguo proyecto de crecimiento basado en las exportaciones (en el que la agricultura era una fuente importante de divisas extranjeras) había fracasado de modo palpable, dejando deprimidas y subcultivadas a regiones que, como Yucatán y La Laguna, en otro tiempo habían sido dinámicas y comerciales. Las tensiones sociales que la Revolución había desatado en primer lugar, y que luego se habían agravado a causa de la recesión económica y el conflicto entre Calles y Cárdenas, exigían soluciones. Una generación nueva, impresionada por los ejemplos de dirigismo económico extranjeros y deseosa de distanciarse de su predecesora, que estaba sumida en la bancarrota política, buscaba ahora el poder. Los orígenes de esta generación eran más urbanos y menos plebeyos que en el caso de los veteranos de la Revolución, pero procedía del centro de México en lugar del norte —por esto mostraba mayor simpatía por los intereses de los campesinos— y estaba convencida de que era necesario tomar medidas radicales. Así, mientras que otros regímenes latinoamericanos recurrían a la reforma política, a la movilización proletaria y al nacionalismo económico para dar respuesta a las presiones del decenio de 1930, el gobierno

9. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 114.

mexicano fue el único que sumó a estas respuestas una amplia reforma agraria, prueba de la tradición agrarista que anidaba en el corazón de la Revolución popular y que ahora imbuía el pensamiento oficial. El agrarismo, que en otro tiempo muchos equipararon con el bolchevismo, era ahora respetable desde el punto de vista político, incluso necesario. La jerga del agrarismo impregnaba el discurso político; inspiraba el arte, la literatura y el cine (con efectos estéticos no siempre buenos); se ganaba partidarios a la vez ardientes y oportunistas, incluso dentro de la floreciente burocracia agraria y entre los caciques locales. Huelega decir que semejantes conversiones súbitas y superficiales no eran un buen augurio en lo que se refiere a la longevidad o la pureza de la campaña agrarista.

Mientras tanto, sus logros eran impresionantes. En 1940 Cárdenas ya había repartido alrededor de 18 millones de hectáreas de tierra entre unos 800.000 beneficiarios; los ejidos contenían ahora el 47 por 100 de la tierra cultivada, en comparación con el 15 por 100 en 1930; la población ejidal se había doblado con creces (de 668.000 a 1,6 millones de personas), y la población sin tierra había descendido de 2,5 millones a 1,9 millones. Al aumentar los ingresos del gobierno gracias a la recuperación económica, los recursos se encauzaron hacia la agricultura. Comparada con otras, esta administración «hizo milagros» en la provisión de créditos agrícolas, que representaron la importante cifra del 9,5 por 100 de los gastos totales en 1936; el recién creado Banco Nacional de Crédito Ejidal se llevó la parte del león.¹⁰ Otros recursos se destinaron a obras de regadío, carreteras y electrificación rural, aunque se probable que estas inversiones en infraestructura beneficiaran a la agricultura privada más que al sector ejidal. Paralelamente, los campesinos, al igual que los trabajadores urbanos, eran instados a organizarse, y sus organizaciones —que eran numerosas, dispares, pero cada vez mayores y más combativas— se vinculaban de modo creciente al aparato del Estado. En 1933 la CCM había respaldado la candidatura de Cárdenas y dos años después Ponies Gil asumió la tarea de formar una confederación central de campesinos, patrocinada por el PNR; así se creó el núcleo de la futura Confederación Nacional Campesina (CNC) (1938).

Sin embargo, la reforma agraria cardenista no se llevó a cabo de modo gradual, burocrático, como las anteriores y (generalmente) las que se efectuaron después. En vez de ello, se puso en marcha con «tremendo fervor» y la puntuaron dramáticas iniciativas presidenciales.¹¹ En regiones de conflicto agrario arraigado el clima cambió de la noche a la mañana; los asediados agraristas se encontraron de pronto respaldados por el «centro». Un caso clásico fue La Laguna. Centro importante de conflictos y rebeliones agrarias durante la Revolución, esta región había conocido una «agitación campesina constante» durante el decenio de 1920, a pesar de que el clima político era hostil.¹² Aunque el grueso de los trabajadores de La Laguna lo formaban proletarios empleados total o parcialmente en las plantaciones de algodón, en modo alguno eran inmunes a los atractivos del reparto de tierras, especialmente a causa del elevado desempleo estacional. Así, las clásicas

10. James W. Wilkie, *The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change Since 1910*, Berkeley, 1970, pp. 136-140 (hay trad. cast.: *La Revolución mexicana, 1910-1976: gasto federal y cambio social*, FCE, México, D.F., 1978).

11. R. H. K. Marett, *An Eye-witness of Mexico*, Londres, 1939, p. 142.

12. Clarence Senior, *Land Reform and Democracy*, Gainesville, Florida, 1958, p. 52.

reivindicaciones «proletarias» —de mejoras salariales y de horarios de trabajo— coexistían con reiteradas peticiones de tierras. Las malas condiciones (tan malas que «ningún orangután consciente de su propia dignidad las hubiera tolerado») se vieron exacerbadas por el descenso de la producción algodonera en 1931-1932. Cuando el comunista Dionisio Encina tomó la iniciativa y se puso a organizar a los peones, los terratenientes respondieron con sus métodos habituales: violencia, ruptura de huelgas y formación de sindicatos «blancos» (propatronales). También juzgaron prudente iniciar una reforma cosmética y se efectuaron dos pequeñas dotaciones de tierras a finales de 1934, pero durante el año siguiente los conflictos laborales se multiplicaron y en mayo de 1936 se convocó una huelga general. Como en el caso de las posteriores expropiaciones ferroviarias y petroleras, el gobierno intervino y resolvió la disputa de forma radical; los conflictos laborales condujeron de este modo a una reestructuración importante de las relaciones de propiedad. En octubre de 1936 Cárdenas intervino personalmente y decretó una amplia reforma en virtud de la cual tres cuartas partes de las valiosas tierras de regadío y una cuarta parte de las de secano se entregaron a unos treinta mil campesinos agrupados en trescientos ejidos. Entre los perjudicados había varias compañías extranjeras y, como mínimo, cinco generales revolucionarios: uno de ellos comentó filosóficamente que «la Revolución me dio la tierra y la Revolución me la quita».¹⁴

El alcance y el carácter de la expropiación que se llevó a cabo en La Laguna no tenía precedentes. Por primera vez se invocó la Ley de Expropiaciones de 1936, y las grandes haciendas comerciales se entregaron en bloque a sus empleados, es decir, a los peones en vez de a los habitantes de los pueblos. Esta nueva forma de expropiación exigía métodos igualmente nuevos. El régimen se opuso a la fragmentación de las grandes unidades productivas y los beneficiarios, siguiendo los consejos oficiales, votaron en proporción de cuatro a uno a favor de los ejidos colectivos en vez de parcelas individuales. Cada ejido compartiría la tierra, la maquinaria y el crédito, y sería dirigido por comités elegidos; la cosecha se repartiría entre los trabajadores en proporción a sus aportaciones de trabajo («a cada cual según su trabajo»: en el mejor de los casos, esto era socialismo y no, como decían los críticos, comunismo). El Banco Ejidal proporcionaría créditos, asesoramiento técnico y supervisión general; el propio ejido aportaría una serie de servicios educativos, médicos y recreativos. El funcionamiento de los ejidos de La Laguna —pieza clave del proyecto cardenista— merece analizarse y, lógicamente, el análisis debe llevarse más allá de 1940. Al principio los terratenientes y los hombres de negocios predijeron con confianza que serían un fracaso y que en dos años los trabajadores volverían anastrándose y suplicando que les dejaran trabajar de nuevo para sus antiguos patronos.¹⁵ No ocurrió así. La producción de algodón (que era ejidal en un 70 por 100 en 1940 comparada con el 1 por 100 de 1930) fue en aumento inmediatamente después de la expropiación, se estabilizó en las postrimerías de la década de 1930, descendió mucho al estallar la guerra y luego experimentó un auge después de 1941. Otros productos, tales como el trigo, mostraron un incremento todavía más rápido. La agricultura colectiva demostró así que era capaz de dar fruto, en el sentido material

13. Pegram, en Murray, Ciudad de México, 21 de abril de 1936, FO 371/19792, A3895.

14. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 103.

15. Senior, *Land Reform and Democracy*, p. 97.

de la palabra. Es cierto que, según los cálculos, la productividad era inferior en los ejidos colectivos comparados con las haciendas privadas; pero éstas, que representaban las mejores tierras de regadío que los terratenientes habían conservado, disfrutaban de niveles más altos de inversión de capital. De hecho, en La Laguna, como en otras partes de México y América Latina, uno de los efectos importantes de la reforma agraria fue estimular una agricultura más eficiente en el sector privado. Entretanto, con el apoyo activo del Banco Ejidal, el nivel de vida de los campesinos de La Laguna subió, tanto absoluta como relativamente, al menos hasta 1939. Los salarios rurales mínimos, que en 1934-1935 eran iguales al promedio nacional, los superaban en un tercio en 1939. También se registró un incremento perceptible de los gastos de consumo, de la alfabetización (que produjo un «tremendo incremento» de la circulación de los periódicos) y en los niveles de sanidad: en esto coincidían todos los observadores, tanto los simpatizantes como los críticos. Y estas mejoras cuantificables no lo eran todo. Se opinaba que con la alfabetización y la autogestión los campesinos demostraban poseer nuevas habilidades, una responsabilidad y una dignidad igualmente nuevas. A un viajero le dijeron: «Antes vivíamos como animales. Ahora, por lo menos somos hombres y a medida que aumenta la cosecha ganamos más».¹⁶ La mejora de la seguridad material y de la seguridad personal iban juntas: disminuyó la agitación política y ya no era de rigor llevar pistola en La Laguna.

No obstante, el éxito del experimento dependía de que las circunstancias fuesen favorables, de la demanda de algodón (que descendió en 1939-1941 y de nuevo en 1945-1947); del suministro de agua en cantidad suficiente (que ni siquiera podía garantizar la nueva presa Lázaro Cárdenas, que quedó terminada en 1946); y, sobre todo, del respaldo político. Aunque Cárdenas prestaba atención a los problemas de La Laguna, y aunque el Banco Ejidal era generoso, en 1941 subió al poder un nuevo gobierno y hubo un cambio inmediato en el orden de prioridades. El Banco Ejidal impuso ahora una política «económica» más rigurosa, se redujeron drásticamente los proyectos «no económicos», los créditos se concedieron con mayor parsimonia y el banco y sus acreedores tuvieron que recurrir a fuentes privadas, tales como la Anderson Clayton Co. Ejidos divididos en parcelas empezaron a sustituir a los colectivos y se introdujo en éstos un sistema de pagos basados en incentivos. El Sindicato Central, la combativa asociación de ejidatarios, estaba perdiendo el control de los recursos económicos (los centros de maquinaria, por ejemplo, fueron traspasados al Banco Ejidal en 1942) al mismo tiempo que tenía que hacer frente a una competencia política directa, toda vez que el gobierno recortó sus fondos, alegó que estaba bajo influencia de los comunistas (que indudablemente había crecido durante los primeros años del decenio de 1940) y promocionaba a la rival CNC. La unidad de los campesinos, la unidad que Cárdenas había defendido incansablemente y fomentado de manera activa, resultó destruida. Los antiguos dirigentes del decenio de 1930 perdieron terreno y La Laguna se convirtió en escenario de disputas entre facciones. Así se perdió la mejor defensa contra la esclerosis y la corrupción burocráticas, que, incipiente en los años treinta, alcanzó grandes proporciones en los años cuarenta.

16. Dutton, Torreón, 4 de enero de 1939, FO 371/22780, A1015; Fernando Benítez, *Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana*, vol. 3: *El cardenismo*, México, D.F., 1978, p. 66.

Estas nuevas circunstancias revelaron cruelmente los defectos del experimento. Al igual que muchas reformas cardenistas, fue fruto de una improvisación apresurada; necesitaba tiempo y cuidado para dar buen resultado. El reparto original, como otros de la época, se había efectuado en seis semanas y conservaba la pauta original de cultivo, la de «centón». Había dejado las mejores tierras en poder de los terratenientes y, sobre todo, había repartido la tierra disponible entre demasiados beneficiarios, entre los que había numerosos inmigrantes que no residían en La Laguna. Por supuesto, estos defectos tenían sus virtudes —rapidez, continuidad de la producción, generosidad de las asignaciones—, y, con tiempo y buena voluntad, podrían haberse corregido. Pero tal voluntad no existió a partir de 1940 y, debido al aumento de la población, los ejidos de La Laguna ya no podían dar sustento a las familias que se hacían en ellos. Aquí, como en otras partes, los ejidos colectivos sufrieron una acentuada estratificación entre ejidatarios de pleno derecho y proletarios *de facto*. El mercado fomentó esta división a la vez que el gobierno la permitía. Se propusieron políticas de signo igualitario —que implicaban movimientos de población y la drástica intervención oficial—; algunos sostuvieron que en vez de «distribuir tierras entre los hombres» de acuerdo con el clásico principio del reparto, el régimen «distribuyera hombres entre las tierras», es decir, que en cada unidad de producción colocara el número de hombres necesarios para llevar a cabo dicha producción sin destruir la unidad [de la empresa].¹⁷ Aunque completamente racional, semejante solución difícilmente habría sido muy popular, como, de hecho, tiende a confirmar el lema de sus defensores: «haciendas sin hacendados». El cardenismo no era estalinismo. Si se quería que la reforma fuese rápida, amplia y popular, los defectos eran inevitables y sólo podrían corregirse administraciones posteriores. Éstas optaron por no hacerlo.

En lo que se refiere a sus orígenes, alcance, rapidez y resultados, la reforma de La Laguna sentó precedentes que se siguieron en otras partes: en el valle de Mexicali, donde se expropió a la Colorado Land Co. a favor de ejidatarios, tanto individuales como colectivos, de pegujaleros y colonos; en Sonora, donde los indios yaquis y mayos lograron que les restituyesen parte de sus tierras; en Michoacán, donde las propiedades de la familia Cusi —empresarios, italianos progresistas y dotados de cierta conciencia social— fueron entregadas, intactas, a unos dos mil campesinos agrupados en nueve ejidos. También el sur, que desde hacía mucho tiempo era coto vedado de la oligarquía de plantadores, experimentó ahora una amplia reforma colectivista. La más espectacular —y menos afortunada— fue la gran reforma de Yucatán, que siguió con mucha fidelidad el precedente de La Laguna. Debido a que la industria del henequén había sufrido una decadencia ininterrumpida después del auge de la primera guerra mundial, el coste de oportunidad de la reforma fue bajo y las reivindicaciones de justicia social fueron tanto más irresistibles. Asimismo, la reforma ofreció al gobierno central el medio de introducirse en la política del sureste, que era tradicionalmente introvertida. Así, en agosto de 1937 el presidente llegó a la península a bordo de un barco cargado de generales, ingenieros, burócratas, periodistas y extranjeros curiosos. El

17. Iván Restrepo, y Salomón Eckstein, *La agricultura colectiva en México: la experiencia de La Laguna*, México, D.F., 1975, p. 35.

80 por 100 de las haciendas henequeneras fue entregado en seguida a treinta y cuatro mil peones mayas, que estaban agrupados en más de doscientos ejidos: fue el «mayor acontecimiento de reforma agraria jamás ocurrido en México». Yucatán compartiría con La Laguna el papel del «ejemplo» del ejido colectivo.¹⁸ Pero también en este caso pronto se hicieron visibles los problemas inherentes a esta reforma precipitada. La ruptura de las antiguas redes productivas dejó a algunos ejidos sin acceso a la imprescindible maquinaria raspadora y muchos poseían plantas de henequén que eran demasiado viejas o demasiado jóvenes. Se decía que muchos de los beneficiarios no eran campesinos y no tardaron en oírse las consabidas quejas de corrupción y de opresión burocrática. Pero el problema principal —que era más agudo en Yucatán que en La Laguna o incluso que en el vecino Chiapas— era la situación del mercado exterior. Yucatán, que en 1915 monopolizaba el 88 por 100 del comercio mundial del sisal, gozaba sólo del 39 por 100 en 1933 y del 17 por 100 en 1949. La socialización de una industria dependiente, en decadencia, fue desde el principio una muestra poco brillante de colectivización.

Incluso cuando la demanda permanecía en alza —como en el caso del café— los obstáculos internos que impedían el éxito de la colectivización eran formidables. La última reforma importante de los años de Cárdenas fue dirigida contra los plantadores de Chiapas, que también habían rechazado las reivindicaciones de los proletarios y los campesinos desde la Revolución y que, ante el resurgir del agrarismo en el decenio de 1930, echaron mano de sus antiguas armas: adelantarse dividiendo las propiedades, emplear «prestanombres», llevar a cabo reformas superficiales, cooptar o eliminar a los adversarios. Incluso cuando la reforma se estaba efectuando en 1939 los plantadores trataron de utilizar sus plantas de procesamiento y redes de comercialización para provocar la bancarrota de los nuevos ejidos. Aunque se amplió la reforma para que afectara también a las plantas procesadoras y con ello se conjuró esta amenaza, el cambio de gobierno en 1940 surtió inmediatamente un efecto desfavorable. La reforma quedó interrumpida: se dividieron los grandes ejidos colectivos; el Banco Ejidal y los caciques aliados a él pasaron a ejercer el control corrupto sobre el sector ejidal: «El banco se convirtió en un hacendado burocrático, el ejidatario, en un peón del Banco».¹⁹ En las elecciones de 1940 se consideró que los ejidatarios eran los únicos partidarios locales del candidato oficial. Así pues, instituciones creadas durante una fase de auténtica movilización campesina (hacia 1930-1940) pronto empezaron a hacer las veces de instrumentos para controlar —incluso «desmovilizar»— al mismo campesinado. Cuando llegó el auge de la posguerra (la producción cafetalera de Chiapas creció en dos tercios entre 1945 y 1950) la beneficiaria fue la agricultura privada, que ahora disfrutaba de un clima que volvía a ser benigno.

Estas reformas espectaculares, aunque problemáticas, corrieron parejas con numerosos ejemplos de menor escala, algunos de los cuales seguían el nuevo patrón colectivo (Atencingo, Zacatepec, El Mante), mientras que otros permane-

18. Véase G. M. Joseph, *Revolution from Without: Yucatán, Mexico and the United States, 1880-1924*, Cambridge, 1982, pp. 288-289 (hay trad. cast.: *Revolución desde afuera: Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924*, FCE, México, D.F., 1992).

19. Thomas Louis Benjamin, «Passages to Leviathan: Chiapas and the Mexican State, 1891-1947», tesis doctoral inédita, Michigan State University, 1981, pp. 247-250.

cían fieles al viejo principio del usufructo individual. Con el tiempo muchas veces el primer sistema dio paso al segundo, y hacia la década de 1940 las demandas de parcelación individual de las tierras comunales ya eran insistentes y en algunos lugares provocaban conflictos violentos. Además, incluso allí donde seguía existiendo el sistema colectivo (La Laguna, Chiapas, Atencingo), éste tendía a producir una estratificación interna entre, por una parte, los beneficiarios con plenos derechos y, por otra, los proletarios o semiproletarios. Fruto de un crecimiento forzado y efímero, los ejidos colectivos cardenistas no tardaron en marchitarse en el clima desfavorable de los años cuarenta. Los ejidos tradicionales resistieron más tenazmente. Con frecuencia eran fruto de antiguas luchas agrarias y la dotación cardenista fue la culminación de años de peticiones, politiquerías y protestas armadas. A veces, como ponen de relieve estudios recientes, la reforma servía a los intereses de elites locales oportunistas o era impuesta desde arriba, extraña y mal recibida; pero ni siquiera los ejidatarios que al principio fueron reacios a convertirse en tales mostraron deseos de volver a la condición de peones. Fueran cuales fuesen los motivos, el resultado fue un traspaso masivo de recursos que cambió profundamente el mapa sociopolítico de México. A corto plazo, la reforma no sólo mejoró el nivel de vida y el amor propio de los campesinos, sino que también provocó un desplazamiento del equilibrio político y dio a las organizaciones campesinas un breve momento de poder condicional. Fue condicional porque el régimen se aseguró de que la movilización de los campesinos estuviera ligada estrechamente al partido oficial, y breve, porque en el decenio de 1940 este vínculo, lejos de reforzar la organización y el activismo campesinos, sirvió para atarles a una estructura política cuyo carácter estaba cambiando con rapidez. Por consiguiente, la muerte del proyecto cardenista llevó aparejada «una desmovilización de la solidaridad de clase y la lucha independiente, en vez de una disolución de las organizaciones formales».²⁰ Las organizaciones cardenistas continuaron viviendo, pero al servicio de otros fines.

La reforma agraria y la movilización campesina estaban ligadas de modo inseparable a la política educativa de los años de Cárdenas, así como al compromiso con la educación «socialista». Sin embargo, en este apartado la administración dio muestra de mayor continuidad. Los sonorenses habían mostrado un compromiso más activo en este terreno que en el de la reforma agraria: aumentaron el presupuesto de educación de un 4 a un 14 por 100 del gasto público (1921-1931), construyeron seis mil escuelas rurales y dieron al maestro el papel de portador de valores seculares, nacionales. Así pues, en el campo de la educación el «estado activo» ya existía. Pero con los años treinta llegaron nuevas iniciativas que se adelantaron a la presidencia de Cárdenas y cuya señal fue el nombramiento de Narciso Bassols como titular de la Secretaría de Educación pública (1931). Joven, enérgico e impaciente, Bassols fue el primer marxista que desempeñó un cargo ministerial. Puso fin a un período (1928-1931) en que la Secretaría navegó a la deriva y dio comienzo a una fase de reformas agresivas que algunos interpretaron como la respuesta del Estado a la Cristiada. So capa de la educación «socialista», Bassols fomentó la laicización de la enseñanza, para lo cual hizo que se cumpliera el artículo 3 de la Constitución: se imponían multas y a veces se clausuraban las escuelas católicas que no respetaban los principios del

20. *Ibid.*, p. 251.

laicismo. Por otra parte, la hostilidad de los católicos aumentó a causa del osado compromiso de Bassols con el primer programa sistemático de educación sexual que hubo en México.

Ninguna de estas medidas respondía a caprichos individuales. Detrás de Bassols había una falange de grupos progresistas, prueba de los cambios que el clima ideológico estaba experimentando a principios del decenio de 1930. Las asociaciones de maestros abogaban ahora por un plan de estudios «francamente colectivistas»,²¹ y el más moderado (y no el más radical) de los sindicatos de maestros pidió la socialización de la enseñanza primaria y de la secundaria. Corrientes parecidas agitaban la Universidad Nacional. En un plano más amplio, el realismo socialista se puso de moda en los ambientes culturales. Y el Plan Sexenal incluía un compromiso deliberadamente ambiguo, pero significativo, con una educación que se basaba en «la doctrina socialista que sostenía la Revolución mexicana». En un terreno más práctico, el plan disponía un incremento anual del 1 por 100 en el presupuesto destinado a la educación, cifra que aumentaría del 15 al 20 por 100 del gasto total entre 1934 y 1940. Finalmente, el Congreso se inclinó ante la recomendación del PNR y aprobó una forma de educación federal de signo socialista que combatiría los prejuicios y el fanatismo (léase «clericalismo») e inculcaría un «concepto exacto, racional, del Universo y de la vida social».²² Por consiguiente, el compromiso con la educación «socialista» fue algo que la administración Cárdenas heredó.

Por supuesto, cada cual interpretaba a su modo el significado de la palabra «socialismo». Había dignificado el darwinismo social *étatiste* de sonorenses como Salvador Alvarado, el furibundo anticlericalismo de Garrido, el seudoso-cialismo de la CROM. Los debates sobre la educación en los años treinta revelaron (según los cálculos de una estudiosa atenta) que existían treinta y tres interpretaciones diferentes.²³ Más aún que la reforma agraria, la educación podía camuflarse bajo la retórica. Callistas que en 1930 ya habían vuelto la espalda a la reforma agraria todavía podían hacer comedia en el campo de la educación, lugar ideal para hacer demostraciones de radicalismo de mediana edad. Teniendo presentes los ejemplos fascistas, albergaban la esperanza de encandilar a la juventud y, quizá, desviar la atención de las penalidades de la recesión. Así, en su Guiso de Guadalajara, Calles podía parecer un radical joven y un jesuita viejo al mismo tiempo.

Para muchos el «socialismo» era simplemente una nueva etiqueta para el anticlericalismo, el antiguo tema central de la política sonorenses. Las palabras «socialismo» y «nacionalismo» se usaban de forma intercambiable. Otros se tomaban en serio el cambio semántico. Bassols hacía hincapié en el papel práctico de la educación, que estimularía una ética colectivista; los maestros no se limitarían a enseñar, sino que, además, «modificarían los sistemas de producción, distribución y consumo», estimulando la actividad económica en beneficio de los pobres.²⁴ Otros iban más lejos y hacían de la educación el tablero central de una

21. David L. Raby, *Educación y revolución social en México, 1921-1940*, México, D.F., 1974, p. 39.

22. *Ibid.*, pp. 40-41.

23. Victoria Lomax, *Historia de la Revolución mexicana. Período 1934-1940: La educación socialista*, México, D.F., 1979, p. 83.

24. John A. Burt Foster, *Educación y radicalismo en México. I: Los años de Bassols (1931-1939)*, México, D.F., 1976, p. 52.

amplia plataforma de reformas radicales. El secretario de Educación afirmó que la educación combatiría los valores capitalistas e individualistas e inculcaría, especialmente en la juventud, «el espíritu revolucionario, con miras a luchar contra el régimen capitalista».²⁵ La literatura y la retórica de la época inducen a pensar que «muchos maestros creían que era posible derrocar el capitalismo empleando la educación como único medio»; método que poseía el mérito de ser pacífico y exhortatorio antes que violento.²⁶ El arte y la poesía —de un tipo apropiadamente comprometido— trabajarían para alcanzar el mismo fin.

Era un antiguo sueño mexicano, un sueño acariciado tanto por los liberales del siglo XIX como por los revolucionarios del XX: que la educación cambiara el mundo social. Al mismo tiempo que los radicales de la educación de los años treinta repetían los consabidos temas del oscurantismo católico, así como de la alianza liberadora de la alfabetización, la higiene, la templanza y la productividad, reaparecieron conceptos antiguos, incluso positivistas, con disfraz «socialista». A decir verdad, algunos radicales socialistas hacían alarde de sus antecedentes comunistas. El «socialismo» absorbía así muchas de las obsesiones desarrollistas de una generación anterior (según afirmaba un burócrata de la educación en 1932, la necesidad más urgente era «enseñar al pueblo a producir más»; el «socialismo» de Bassols se ha interpretado como una ideología sustitutiva de la modernización).²⁷

También daba cuerpo a la tradicional búsqueda de cohesión cultural e integración nacional. Estas continuidades ayudaban a explicar la facilidad con que se convirtieron a la educación «socialista» incluso los miembros de la derecha oficial. Pero también había radicales auténticos que veían la educación como medio de subvertir las viejas costumbres, en lugar de sostenerlas. El modelo soviético volvía a influir. A juicio de viejos revolucionarios como Luis G. Monzón, ofrecía la única alternativa a un capitalismo en bancarrota. Se importaron métodos soviéticos —de modo no sistemático y sin que en gran parte dieran fruto— y circularon textos marxistas, incluso en el Colegio Militar. Aunque a primera vista este mimetismo concordaba con la importancia que daba el régimen a la conciencia y la lucha de clases, el ejemplo soviético lo invocaban con más lógica quienes defendían el desarrollo y la productividad. Más que portadores de la guerra entre las clases, se consideraba a los soviéticos como exitosos exponentes de la industrialización moderna en gran escala: más «fordistas» que Ford. Este atractivo dependía de las circunstancias económicas de la época y de la radicalización que las mismas fomentaban, y ambos factores repercutían directamente en la educación. La izquierda resurgente esgrimía sus propuestas educativas; una profesión docente más militante (muchos maestros, aunque en modo alguno todos, eran izquierdistas y una minoría significativa de ellos, comunistas) ejercía presión a favor de sus intereses políticos, pedagógicos y sindicales. La recesión y las consiguientes reducciones del gobierno habían afectado gravemente a los maestros, y Bassols, a pesar de su radicalismo, se había mostrado cicatero como pagador.

Aunque el número de maestros creció mucho en los años treinta, el desem-

25. Farquhar, Ciudad de México, 24 de enero de 1935, FO 371/18705, A1338.

26. Raby, *Educación y revolución social*, p. 60.

27. *Ibid.*, p. 38; Britton, *Los años de Bassols*, p. 17.

pleo persistía; grupos de maestros figuraban a menudo en el primer plano de la política local (organizaron el único desafío serio a Cédillo en su feudo de San Luis); y los sindicatos de maestros se unieron a otros impelidos por los intereses materiales tanto como por la solidaridad ideológica.

Estos factores se hallaban presentes en el compromiso oficial con la educación socialista, que poco debía a las exigencias populares. Cincuenta mil personas desfilaron por las calles de Ciudad de México y aplaudieron el nuevo programa (octubre de 1934), pero la manifestación fue uno de los últimos actos organizados por el aparato de la CROM. En general (pero en particular en el campo, al cual iba especialmente destinada la reforma), la respuesta popular fue tibia o declaradamente hostil. Si, como se ha sugerido, la educación socialista era un mecanismo clave para recuperar la simpatía y el apoyo de las masas, que se habían perdido²⁸ fue un fracaso; en realidad, sin embargo, tenía menos de populismo oportunista que de ingeniería social grandiosa y un tanto ingenua. En mayor medida que la reforma agraria, la educación socialista llegó como una revolución desde arriba, y a menudo como una imposición blasfema y no deseada.

Proliferaron los proyectos educativos: el importante programa para construir escuelas rurales se amplió mucho junto con programas secundarios —las Misiones Culturales, la Escuela Normal Rural, las escuelas especiales del ejército (proyecto muy querido del presidente) y las escuelas (de las compañías) del «artículo 123». Se hicieron esfuerzos especiales —basándose también en el precedente sonoreño— por llegar a la población indígena, la cual, definida como aquellas que hablaban alguna lengua indígena, constituía quizá una séptima parte de la población total de México. En esta empresa, el presidente, que se dijo que era nieto de un indio tarasco y que había concedido mucha importancia a la cuestión indígena durante la campaña de 1934, hizo uso de su energía y su autoridad personales. Pero se produjo un cambio de actitud y ahora el indigenismo figuraba menos como política autónoma, encaminada hacia la integración nacional, y más como parte de la amplia ofensiva cardenista contra la pobreza y la desigualdad. Aunque el Departamento de Asuntos Indígenas organizaba programas especiales de educación e investigación (que en Chiapas eran de grandes proporciones), su presupuesto era demasiado pequeño para soportar toda la carga de la política indigenista. En vez de ello, el régimen trató de integrar al indígena en la masa de trabajadores y campesinos haciendo hincapié en la clase social antes que en la etnicidad: el programa de la emancipación de los indios es, en esencia, el de la emancipación del proletariado de cualquier país, aunque tal vez había que tener en cuenta rasgos específicos de índole histórica y cultural.²⁹ El objetivo —optimista por no decir francamente utópico— consistía en alcanzar la emancipación social y económica sin destruir los elementos fundamentales de la cultura indígena. El principal efecto que el gobierno tuvo en el indígena no fue tanto a través de programas específicamente indigenistas como a través de medidas más generales que afectaban a los indígenas en tanto campesinos: el programa de educación rural y, sobre todo, la reforma agraria en Yucatán, Chiapas y la región de los yaquis (donde a Cárdenas todavía se le recordaba bien al cabo de mucho tiempo).

28. Arturo Anguiano, *El Estado y la política obrera del cardenismo*, México, 1975, p. 45.
29. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 120.

El indigenismo propiamente dicho únicamente surtió efectos limitados, a menudo pasajeros. Sin embargo, una de sus consecuencias permanentes fue el crecimiento del poder federal a medida que la cuestión indígena pasó a ser de la incumbencia exclusiva del gobierno nacional e incluso podía utilizarse para forzar la apertura de cacicazgos locales hostiles. Incluso bajo Cárdenas se hizo evidente que federalizar la cuestión indígena a menudo significaba sustituir a los patronos locales —terratinentes, caciques, sacerdotes, «enganchadores» (contratistas de mano de obra— por nuevos jefes, burocráticos, agentes de programas indigenistas o agrarios, algunos de los cuales eran indígenas ellos mismos. Estas tendencias se aceleraron después de 1940. La esperanza cardenista de alcanzar la integración con igualdad y supervivencia cultural forzosamente tenía que fracasar; se integró a los indígenas, pero como proletarios y campesinos, clientes oficiales y (de vez en cuando) caciques oficiales.

En el otro extremo del espectro, la educación superior se encontraba ahora ante el desafío del «socialismo», que denunciaba la posición de las universidades (en especial la Universidad Nacional, tradicionalmente conservadora, elitista y, desde 1929, formalmente autónoma) como bastiones de los privilegios de las clases medias. Al igual que otros conflictos en el campo de la enseñanza, éste fue anterior a la presidencia de Cárdenas. En 1933 se había suscitado una polémica entre facciones universitarias en la cual Lombardo Toledano —a quien se oponía Antonio Caso— abogaba por que la universidad se adhiriera a la nueva ideología materialista. A pesar de las luchas y huelgas estudiantiles, los liberales conservaron su precario control; pero el gobierno respondió, reduciendo a la mitad la subvención que pagaba a la universidad. También las universidades provinciales, temiendo la intimidación ideológica, exigieron que se les concediera una autonomía parecida y en Guadalajara el gobernador del estado recurrió a la fuerza para desalojar del recinto universitario a las autoridades insubordinadas. Muchos izquierdistas aplaudieron semejante humillación de los señores académicos (el propio Cárdenas, según decían, albergaba una sana antipatía por los hombres cultos, que con frecuencia era recíproca).

Mientras tanto en los recintos universitarios seguían resonando los rebatos políticos de 1935. En septiembre de dicho año una facción izquierdista integrada por profesores y estudiantes protagonizó un golpe interno y alineó la Universidad Nacional con la política oficial de signo «socialista». El gobierno pudo así regularizar sus relaciones con la universidad, reafirmando la autonomía de ésta y reanudando el pago de su subvención; a cambio de ello, la universidad tomó algunas iniciativas nuevas, aparentemente radicales (servicios jurídicos para los trabajadores, estudios sociales «relevantes») que probablemente representaban una conformidad externa más que una conversión auténtica. Además, el régimen creó nuevas instituciones de enseñanza superior que fueran más de su gusto. Algunas de ellas, como el Instituto Politécnico Nacional, sobrevivieron y prosperaron; otras, como la Universidad Obrera, fueron efímeras.

Mucha mayor fue la importancia de los esfuerzos y los conflictos en la esfera de la educación rural. Fue este el escenario de la principal innovación de los años de Cárdenas; no en el contenido formal o la estructura organizativa de la educación (de los cuales existían abundantes precedentes), sino más bien en el contexto social y político en el cual se emprendió la educación rural. El compromiso de la administración era inequívoco. Si bien no pudieron cumplirse los am-

hacerlos objetivos del Plan Sexenal, entre 1935 y 1940 los gastos en concepto de educación oscilaron entre el 12 y el 14 por 100 del gasto público total, niveles que no se alcanzaron ni antes ni después de dicho período. En términos reales fueron el doble de los gastos correspondientes al período callista. Así, continuó el crecimiento del número de escuelas rurales, que fue notable bajo Bassols, y de estas escuelas se esperaba que hicieran mucho más que enseñar los elementos básicos de las letras y los números. Cárdenas explicó que el maestro debía desempeñar un papel social, revolucionario: el maestro rural es el guía del campesino y del niño, y debe ocuparse del mejoramiento del poblado. El maestro debe ayudar al campesino en la lucha por la consecución de tierra y al trabajador en su demanda de los salarios que marca la ley.³⁹ Y no se trataba de retórica hueca; del mismo modo que los maestros sólo pueden enseñar a leer y a escribir cuando existe la demanda correspondiente, sólo pueden dedicarse a la ingeniería social cuando tienen a mano las piezas apropiadas, como ocurrió en México durante el decenio de 1930. El maestro rural pudo cumplir la misión que le habían asignado no porque los campesinos formaran una masa inerte, maleable, sino más bien porque respondió a demandas reales —o, a veces se percató de demandas latentes, especialmente en el campo de la reforma agraria. En el caso clásico de los ejidos colectivos de La Laguna los maestros rurales desempeñaron un papel clave en una serie de reformas integradas: reformas educativas, agrarias, técnicas, médicas. En otros casos el maestro se vio involucrado en conflictos locales que ya existían antes de que él llegara y su labor forzosamente se hizo muy política, polémica y arriesgada. Los maestros fueron aplaudidos (o condenados) por su agitación agraria en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa y otras partes. Ayudaron a organizar a los pueblos mixtecos de Oaxaca que pedían «Tierra y libertad» y una escuela en cada pueblo; en el estado de México se les acusó de incitar las ocupaciones de tierras; en Michoacán cabían encontrados explicando las leyes agrarias, redactando peticiones y siguiendo el paso de las mismas por los organismos pertinentes. Sus críticos alegaban que Azcárraga que hasta entonces habían vivido tranquilos veían cómo su paz se esfumaba a causa de la actuación de los demagógicos maestros socialistas; los radicales, aunque lo expresaran de otro modo, con frecuencia eran dados a pensar lo mismo. Es verdad que a veces los maestros estimulaban un agrarismo latente y de vez en cuando contribuían a imponerlo a comunidades que no lo deseaban; pero también hubo casos en que fueron los propios campesinos quienes ganaron a los maestros para la causa agraria. A los que «se acercaron al pueblo» como *ingenieros sociales* los echaron con cajas destempladas. Por el contrario, los que lograron cumplir sus objetivos no triunfaron gracias a una agitación espontánea, sino porque aportaron ayuda práctica y, con su misma presencia, pruebas vivientes del compromiso del régimen. Trabajaron en la agricultura, introduciendo productos y métodos nuevos; utilizaron sus conocimientos de letras en beneficio de las comunidades; y, sobre todo, facilitaron aquella organización espontánea que con frecuencia ha sido el factor clave del triunfo de los movimientos campesinos.

A cambio de todo ello pagaron un precio. No hay prueba más segura del efecto real de los maestros rurales que el historial de violencia que abarca el de-

cenio de 1930. El fenómeno debe verse teniendo en cuenta la fuerte polarización que provocó el programa de educación socialista. Aunque al principio algunos izquierdistas se mostraron críticos y señalaron que era ilusorio intentar la transición al socialismo por medio de la maquinaria superestructural de la educación, la mayoría de ellos cambiaron de parecer: Este fue especialmente el caso de los comunistas, que pronto abandonaron la postura crítica, que se ajustaba bastante bien al «tercer período» de la Komintern, y se adhirieron al programa con la misma vehemencia con que defendían el frentepopulismo. A lo sumo, era comunista una sexta parte de los maestros mexicanos, pero esta minoría activista fue suficiente para alimentar las sospechas y ayudar a la propaganda de los críticos: Éstos eran numerosos, enérgicos y a menudo violentos. La organización y la combatividad crecientes de la izquierda tenían sus equivalentes en la derecha católica y conservadora: en la jerarquía, el movimiento de estudiantes católicos y asociaciones laicas tales como la Unión Nacional de Padres de Familia. Los blancos principales de los críticos eran la educación socialista y la educación sexual. Los estudiantes católicos protestaban, organizaban huelgas y provocaban disturbios. Los padres expresaron su desacuerdo retirando a sus hijos de las escuelas y el absentismo fue en aumento, tanto en la ciudad como en el campo; las escuelas privadas (católicas) de San Luis, que eran protegidas por Cedillo, estaban llenas a reventar. En la medida en que «socialismo» significaba «anticlericalismo» y los excesos anticlericales continuaron bajo auspicios «socialistas», esta reacción de los católicos fue defensiva, incluso legítima. Pero, en general, la tendencia anticlerical iba perdiendo fuerza, y la oposición católica dirigió sus miradas hacia asuntos de mayor envergadura, tales como los servicios médicos, la educación mixta y la instrucción sexual, que fue denunciada y acusada de ser un complot comunista para introducir la pornografía en el aula. La prensa católica expresó horror porque a los niños campesinos —que estaban acostumbrados a ver cerdos en celo— les mostraban grabados con los órganos sexuales de las aves.

Los católicos también se opusieron al agrarismo tanto en general, defendiendo los derechos de la propiedad privada, como de forma específica, poniéndose del lado de los terratenientes contra los agraristas. Se decía que los sacerdotes lanzaban invectivas contra la reforma e incitaban a las chusmas a cometer actos de violencia (Contepec, Michoacán); decían misas por criminales que habían asesinado a un maestro (Huisco, Zacatecas). Se culpó a la influencia clerical de los repetidos ataques que se registraron en la región de Colotlán, estado de Jalisco, donde, según decían, cuarenta escuelas fueron incendiadas en un solo año. Por supuesto, a veces estas afirmaciones eran exageradas. Asimismo, el sacerdote, al igual que el maestro, no actuaba por su cuenta. Figuraba en conflictos locales que él no había provocado. Muchos actos de violencia rural se producían sin que en ellos interviniera el clero; era una violencia «espontánea» o nacida de la incitación por parte de terratenientes, caciques e incluso gobernadores de algún estado. Las víctimas —maestros como López Huitrón de San Andrés Tuxtla, asesinado en 1939, o los veinticinco maestros que fueron asesinados en Michoacán hasta 1943— nos recuerdan que, si bien los poderes del gobierno central iban aumentando, seguían siendo limitados y a veces vacilaban; no podían garantizar la seguridad, y mucho menos el éxito, de sus agentes desterrados en territorio hostil.

39. Lomas, *La educación socialista*, pp. 114-115.

Así pues, los maestros se encontraban con frecuencia ante una tarea solitaria y peligrosa. Muchos estaban mal preparados, lo estaban sin duda para el socialismo que debían impartir (a veces hasta para enseñar); un crítico se burló de ellos porque antes habían sido «ayudantes de camionero, vendedores de pan callejeros, [y] capataces de plantaciones de café».³¹ Estaban mal pagados y, excepto en casos de reforma integrada como La Laguna, normalmente carecían de aliados institucionales en su localidad. A menudo tenían que afrontar la indiferencia y la hostilidad del pueblo. Los conflictos asediaban sus organizaciones sindicales. Con la expansión de la enseñanza en los primeros años treinta se hizo posible la sindicación en gran escala; las reducciones salariales de aquellos años dieron a los maestros muchos motivos de queja. Una y otra vez pidieron mejoras salariales (y las recibieron en parte) y la federalización de la enseñanza, para que la toma de decisiones se concentrara en el gobierno central, que era favorable a la educación, a expensas de las caprichosas administraciones de los estados. Aunque en este campo, igual que en otros, la federalización se aceleró durante el decenio, no se alcanzó por completo. Entretanto la Secretaría de Educación insistía en que se formara un único sindicato de maestros, lo cual provocaba serias divisiones internas (hasta el 60 por 100 de los maestros, según se decía, eran católicos y, a pesar de las purgas y las medidas para reclutar adeptos, la profesión nunca se radicalizó del todo). Como también la izquierda estaba dividida, entre comunistas y lombardistas, la unidad resultó quimérica y los conflictos internos fueron endémicos, lo cual obró en detrimento de la moral.

Se obtuvieron algunas ganancias permanentes en la carrera entre el crecimiento demográfico y la oferta educativa: las tasas de alfabetización mejoraron y se intensificó el papel nacionalista e integrador de la escuela. Sin embargo, como sistema de proselitismo socialista e ingeniería social, el proyecto fracasó. Por muy afín o apropiada que fuese en las zonas de agrarismo y conflictos sociales, la educación socialista no podía revolucionar la sociedad capitalista en su totalidad. Al igual que muchas reformas cardenistas, fue un fenómeno circunstancial que dependía del clima oficial que fue brevemente benigno. El clima empezó a cambiar incluso antes de que Cárdenas dejara su cargo. En 1938 la austeridad económica y la redoblada oposición (que ahora se movilizó contra la propuesta de «regulación» del artículo 3) obligaron a emprender la retirada. El reglamento terminó con una fórmula conciliatoria, se retiraron los libros más radicales, se puso fin a las Misiones Culturales; la educación privada renació y se eliminaron gradualmente ambiciosos proyectos de educación, como los de La Laguna. El último mensaje de Año Nuevo de Cárdenas (enero de 1940) fue decididamente conciliador, como lo fueron también los discursos del candidato oficial a la presidencia, Ávila Camacho. Y una vez éste subió al poder, estos cambios se aceleraron. El «socialismo» siguió siendo la consigna oficial durante un tiempo; pero posteriormente —dada la flexibilidad casi infinita del término— se convirtió en sinónimo de conciliación social y equilibrio entre las clases. Volvió a oírse el discurso de los sonorenses. El socialismo educativo, al igual que gran parte del proyecto cardenista, resultó un intermedio en lugar de un milenio.

31. Murray, Ciudad de México, 31 de octubre de 1935, FO 371/18707, A9693.

MEJICU, C. 1930-1940

Durante la lucha contra Calles en 1935 se habían registrado numerosas huelgas y una movilización significativa del movimiento obrero. Ambas cosas continuaron después de la caída del jefe máximo: en el período 1935-1936 ocurrió el hecho insólito de que las huelgas fueron más numerosas en México que en Estados Unidos; y en 1937 (año de creciente inflación) se alcanzó un punto máximo, al menos en términos de huelgas oficiales. Durante este período las huelgas afectaron a todas las industrias básicas de México —minas, compañías petroleras, ferrocarriles, fábricas textiles—, así como a los servicios del gobierno y la agricultura comercial. Al igual que en La Laguna, la protesta de los trabajadores contra las compañías extranjeras podía presagiar la intervención y la expropiación por parte del gobierno; de acuerdo con la doctrina que en febrero de 1936 proclamó con audacia el presidente en su célebre viaje a Monterrey, la ciudadela de la libre empresa, a la sazón aquejada de huelgas y un cierre patronal: si los empresarios eran incapaces de evitar la parálisis industrial, el Estado intervendría. Los conflictos laborales proporcionaron un instrumento contra los enclaves extranjeros. Mientras tanto, la organización sindical hizo progresos que culminaron con la formación de la nueva central, la Confederación de Trabajadores de México (CTM); y la militancia de los trabajadores contribuyó a la tendencia alcista de los salarios reales. Esto no hubiera sucedido sin el respaldo oficial, que se hizo patente por primera vez durante la crisis política de 1935 y se mantuvo en lo sucesivo, aunque no de modo uniforme y sin críticas. No cabe duda de que el gobierno adoptó una actitud intervencionista ante las relaciones laborales («el gobierno —según declaró Cárdenas en Monterrey— es el árbitro y el regulador de los problemas sociales»); el arbitraje pasó a ser sistemático (aunque no automático) y generalmente era favorable a los trabajadores. Con todo, hubo casos en que huelgas importantes encontraron oposición (destaca entre ellos la de ferroviarios en mayo de 1936) y, especialmente después de 1938, el gobierno dirigió sus esfuerzos a evitar huelgas, por el bien de la economía. No obstante, sería un error valerse de estos casos para afirmar la importancia suprema de la producción y la conciliación de las clases, y por ende la continuidad de una política de masas manipuladora entre Calles y Cárdenas. El significado de la intervención, el arbitraje y la política de masas fue diferente según la época. Y bajo Cárdenas, en especial antes de 1938, llevaban aparejado el apoyo activo a los sindicatos contra las empresas, tanto como el apaciguamiento del conflicto industrial, y rumbos nuevos y radicales en el campo del control obrero. Una vez más, por consiguiente, el «populismo» cardenista difiere en aspectos importantes de algunos de sus supuestos parientes políticos.

El régimen nunca perdió de vista las realidades económicas. Combatió lo que consideraba sindicalismo irresponsable, por ejemplo, el de los petroleros. Se dio cuenta de que subir los salarios profundizaría el mercado nacional en beneficio de algunos sectores de la industria. Sin embargo, este enfoque keynesiano no puede verse como la razón de ser de la política laboral cardenista. Algunos hombres de negocios y banqueros inteligentes compartían este punto de vista, pero la empresa privada —sobre todo, el núcleo de la burguesía nacional que tenía su base en Monterrey— era abrumadoramente hostil al cardenismo y nunca dejó de criticarlo. Y esta situación no varió después de 1938. En 1940 portavoces del mundo empresarial todavía criticaban al gobierno por su «fantástica política de mejora unilateral en cumplimiento de promesas hechas al proletaria-

do». El nuevo impuesto sobre beneficios extraordinarios era un ejemplo de «totalitarismo burocrático». Si Cárdenas salvó a la burguesía mexicana de la revolución o del desmantelamiento (lo cual parece dudoso), la burguesía no mostró mucha gratitud.

También es cierto que la política laboral de Cárdenas, al igual que su agrarismo, incluía un aspecto educativo o escolar, una faceta del llamado «Estado papá». El presidente contaba con la mediatización gradual de la clase trabajadora como entidad organizativa, unificada, responsable, organizada, con el fin de que su importancia aumentara con el tiempo, unificada, para que su fuerza no se disipase en luchas frías y desorganizadas, y responsable, para que no exigiese demasiado a una economía subdesarrollada que acababa de salir de la recesión (porque, en caso contrario, los propios trabajadores serían los principales perjudicados). Desde la campaña electoral de 1934 hasta la alborotada despedida de 1940, por tanto, el tema constante de Cárdenas fue «organizar», igual que el de Lenin. La organización requería el apoyo activo del Estado, pero sería un error ver en ello una manipulación cínica, una prueba de continuidad ininterrumpida de Calles y la CROM a Miguel Alemán y los «caudillos» del decenio de 1940. Calificado hoy en día de estatista antidemocrático, en realidad Cárdenas concebía los bloques y clases organizados en el campo obrero como las bases de la política. Así, la mejor garantía de la continuación de su proyecto radical era una clase trabajadora poderosa, organizada. La financiación de la CTM, los experimentos con el control obrero y la educación socialista y la exhortación constante servían a una visión lejana y optimista: una democracia obrera que diese cuerpo a las virtudes cardenistas del trabajo árduo, el igualitarismo, la soberanía, la responsabilidad y el patriotismo. Esta era gran parte de la marca «socialista» a largo plazo de Cárdenas.

Cierta grado de tutela estatal era necesario porque la creación de una confederación laboral única representaba una tarea formidable y era improbable que se produjera espontáneamente. Tras el caso de la CROM el proletariado se mostraba combativo pero fragmentado. Sin embargo, la coincidencia de la campaña contra Calles con una rápida recuperación económica brindó la oportunidad de reagruparse. El Comité Nacional para la Defensa del Proletariado, que Lombardo utilizó para convencer a Calles y la CROM, hizo las veces de núcleo de la naciente CTM, que, al fundarse en febrero de 1936, reunió a varios sindicatos industriales clave que se habían destacado durante las huelgas recientes (ferroviarios, mineros y metalúrgicos, electricistas, tipógrafos y tranviarios), así como a las antiguas confederaciones rivales de la CROM, la CGOCM de Lombardo y la CSUM comunista. La CTM, que afirmaba tener 3.594 sindicatos afiliados y 946.000 miembros, empujaba tanto a la residual Confederación General de Trabajadores (CGT), de signo anarcosindicalista, como a la CROM, aunque ésta sobrevivió (algunos de sus afiliados en calidad de sindicatos blancos) y todavía pudo luchar contra la hegemonía de la CTM, a veces empleando la violencia, en ciertas regiones e industrias (por ejemplo, la textil). Otras dos barreras que impidieron la hegemonía de la CTM las erigió el Estado: el sindicato de funcionarios, la Federación de Sindicatos de Trabajadores en el Servicio del Estado (FSTSE), al que

se le impidió afiliarse (el asunto de los derechos sindicales de los funcionarios dio origen a intensos debates que culminaron con leyes especiales); y, factor más importante, se protegió al campesinado del abrazo de la CTM, a pesar de que ya se había efectuado una significativa labor de captación, principalmente en regiones de agricultura comercial. La organización de los campesinos siguió siendo prerrogativa del PNR. Aunque la CTM conservó cierta influencia residual en el campo, sus líderes no pudieron hacer nada contra la decisión oficial.

La ideología de la CTM experimentó una rápida mutación. Durante la lucha contra Calles las partes que la constituían habían recalado su independencia de los partidos o las facciones. Este compromiso —radical, nacionalista, autónomo— pasó a la nueva CTM, que vino al mundo lanzando sonoros gritos que hacían pensar en el sindicalismo revolucionario. Pero del mismo modo que Calles había hecho callar a la CROM, cuyos gritos infantiles habían sido parecidos, Cárdenas se atrajo a la CTM. En esta tarea fue una ayuda para él la presencia en la CTM de antiguos miembros de la CROM como Fidel Velázquez y los «cinco lobitos», cuya escuela había sido el activismo obrero en Ciudad de México durante el decenio de 1920. A medida que la CTM fue obteniendo subvenciones y locales oficiales, así como puestos en las juntas de conciliación y arbitraje, sus dirigentes se percataron de las virtudes de la colaboración. Alegaron tres razones para colaborar: la necesidad de derrotar a los restos del callismo, de organizar un frente común contra el imperialismo (al que pronto se identificaría con las compañías petroleras angloamericanas), y de construir un frente popular contra el fascismo, tanto el internacional como, al decir de algunos, el nacional («el fascismo criollo», como lo llamó Lombardo).

A decir verdad, Lombardo Toledano se erigió ahora en figura fundamental de la política del período, superada únicamente por el propio Cárdenas. Hijo de una familia de empresarios que en otro tiempo fue rica pero luego se arruinó, Lombardo había evolucionado del idealismo filosófico del Ateneo de la Juventud al marxismo (aunque nunca se afilió al PCM). A principios del decenio de 1930 ya era una figura destacada de la intelectualidad de Ciudad de México —«el marxista mexicano»—³³ que participaba activamente en la política obrera y universitaria; y con su secesión de la CROM y la creación de la CGOCM, echó los cimientos de su futura dirección de la CTM. Elocuente, autocrático y narcisista, Lombardo carecía de una base institucional, ya fuera regional o sindical. Su poder dependía de la burocracia de la CTM y del apoyo del gobierno (de ahí los malabarismos ideológicos que hizo en los años cuarenta para conservar ambas cosas). Después de respaldar tácticamente a Cárdenas en 1935, ahora quería reforzar la alianza, haciendo hincapié, en primer lugar, en un viejo tema —la responsabilidad nacional de la clase trabajadora— y, en segundo lugar, en un tema nuevo: la amenaza del fascismo. En este contexto, la política que seguían los comunistas era importantísima. Empujados a la clandestinidad en 1929, los comunistas seguían mostrándose activos en las luchas agrarias locales, y en sindicatos clave, tales como los de los ferroviarios, los tipógrafos y los maestros. Aunque se habían opuesto a la candidatura presidencial de Cárdenas, fueron atraídos

33. Véase Enrique Krausz, *Caudillos culturales en la Revolución mexicana*, México, D.F., 1976, pp. 291-329.

hacia la coalición contra Calles y respaldaron a la CTM; y, providencialmente, en 1935 la Komintern efectuó un viraje que legitimó —que requirió— la plena colaboración con las fuerzas antifascistas y progresistas. La delegación mexicana volvió del Séptimo Congreso de la Komintern tras prometer su apoyo al frentepopulismo y, por ende, al PNR, al Plan Sexenal y al gobierno Cárdenas, al que ahora se consideraba un régimen nacionalista-reformista, de todo punto diferente de su predecesor callista. Así pues, la CSUM se fundió con la CTM y se instó a los trabajadores a participar en las elecciones. En 1937 el PCM y la CTM se unieron para formar un frente electoral común, en el año siguiente los comunistas apoyaron a la CTM al asumir ésta un papel central en el nuevo partido oficial corporativo, el PRM. La colaboración de la CTM había llegado hasta el extremo de que ceteristas desempeñaban ahora cargos políticos locales y nacionales, incluidos treinta escaños en la cámara.

Era inevitable que hubiese divisiones en el seno de un conglomerado tan grande. Lombardo y sus lugartenientes no profesaban ningún amor a los comunistas. A las diferencias históricas e ideológicas se sumó la rivalidad de sus bases institucionales: los lombardistas dependían de gran número de pequeños sindicatos y federaciones, especialmente en la capital, y su falta de fuerza industrial hacía que la colaboración con el gobierno resultase atractiva; la fuerza de los comunistas residía en los grandes sindicatos industriales —ferroviarios, tipógrafos, electricistas— que se inclinaban hacia el sindicalismo apolítico. Cada bando luchaba por controlar tanto sindicatos individuales, tales como el de maestros, como la propia CTM, donde los lombardistas se apoyaban en su superioridad numérica —aunque fuese una superioridad nominal, dispersa entre una legión de sindicatos afiliados— para compensar la fuerza industrial de los comunistas. En abril de 1937 se produjo un cisma importante y los comunistas, al encontrarse excluidos de puestos clave, abandonaron la CTM, llevándose entre la mitad y una cuarta parte de los sindicatos afiliados, incluidos algunos tan importantes como los ferroviarios y los electricistas. Las esperanzas cardenistas de formar un frente obrero unido, al parecer defraudadas, resucitaron cuando la Komintern acudió en su ayuda. Earl Browder llegó a toda prisa de Estados Unidos, Moscú ejerció presión y tras dos meses de extravío, los comunistas volvieron al redil. Algunos se resistieron: los mineros y los ferroviarios, tradicionalmente independientes, permanecieron fuera. Pero el grueso de los comunistas cumplió y volvió a una CTM aún más controlada por Lombardo; asimismo, acordaron apoyar a los candidatos del PNR en las elecciones internas del partido y acallar sus críticas, que ya eran moderadas, al régimen. Fue el primero de varios «sacrificios necesarios» que el PCM, entregado al frentepopulismo y azuzado por Moscú, haría entre 1935 y 1946, y que contribuirían a formar y mantener la coalición cardenista.

El fomento por parte de Cárdenas de la organización de la clase obrera bajo la tutela del Estado afectó a dos casos claves —los ferrocarriles y el petróleo— en los cuales se expropió y reorganizó de forma fundamental a empresas que eran total o parcialmente de propiedad extranjera y se encontraban agobiadas por disputas laborales. Así pues, de modo análogo a la colectivización de La Laguna las disputas laborales dieron pie a la intervención del gobierno y a experimentos con nuevas formas de organización económica (y, en el caso del petróleo, a un serio altercado internacional). Hay diversas interpretaciones: ¿eran estas audaces,

generosas y radicales medidas acaso indicativas de la existencia de un sindicalismo residual en el pensamiento oficial? ¿O eran nuevos ejemplos de *Realpolitik* disfrazada de radicalismo, por medio de la cual un régimen maquiavélico que hacía gala de su nacionalismo se quitaba de encima las industrias conflictivas pasándolas a los trabajadores, que entonces tenían que someterse a la severa disciplina del mercado?

Las dos industrias eran distintas: Mientras que la producción de petróleo registró un modesto incremento durante el decenio de 1930, la situación de los ferrocarriles era pésima: descapitalizados, con un exceso de personal, perjudicados por la competencia que les hacían los transportes por carretera (y que el vigoroso programa de construcción de carreteras del gobierno exacerbó) y muy endeudados con acreedores extranjeros. A decir verdad, se reconocía de forma general que era necesaria alguna reorganización radical que posiblemente llevaría aparejada la nacionalización. Los ferroviarios, que tradicionalmente eran activistas y en 1933 se organizaron en el nuevo Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), se resistieron tenazmente a la pérdida de empleos, con la que estaban harto familiarizados (en el período 1930-1931 se habían perdido 10.000 puestos de trabajo). Hubo convocatorias de huelga en 1935 y de nuevo en mayo de 1936, momento en que los trabajadores vieron con desagrado cómo el gobierno se negaba a reconocer una huelga nacional en apoyo de un nuevo convenio colectivo. Se respondió a las exigencias de los ferroviarios, pero los problemas económicos básicos no desaparecieron. Al cabo de un año la administración decidió abordarlos como en La Laguna, es decir, por medio de una impresionante reforma estructural. En junio de 1937 los ferrocarriles fueron nacionalizados a la vez que la deuda en bonos se consolidaba con la deuda pública. Después de un año de administración directa por parte del gobierno y de prolongadas negociaciones con el sindicato, la empresa quedó bajo el control de los trabajadores el día 1 de mayo de 1938. No fue este un caso único. Tal como prometiera Cárdenas, se habían pasado otras empresas —minas, fundiciones, fábricas— a los trabajadores cuando los conflictos laborales resultaban insuperables. Pero los ferrocarriles, que seguían transportando el 95 por 100 de la carga de México, fueron, con mucho, el ejemplo más importante.

La expropiación inicial, en la que se dio muestra de patriotismo y de machismo político, fue bien recibida incluso por los grupos derechistas de clase media que acostumbraban a quejarse de lo que hacía Cárdenas. Después de todo, José Yves Limantour, decano de los «científicos», había empezado el proceso de nacionalización treinta años antes; y al crear un sistema ferroviario propiedad del Estado, México no hacía nada que no se hubiera hecho ya en varios países latinoamericanos. Mejor esto que la educación socialista o la confiscación de propiedades privadas mexicanas por medio de la reforma agraria. Hasta los acreedores extranjeros se alegraron de que los librasen de un activo menguante. Un grupo que contempló con recelo la nacionalización fue el de los propios ferroviarios. Aunque eran partidarios de ella en abstracto (para algunos, como su combativo líder, Juan Gutiérrez, era un paso hacia una economía socializada), temían que sus derechos sindicales y el convenio que acababan de conseguir corrieran peligro al transformarse súbitamente en empleados federales. Así pues, en la decisión del sindicato de asumir la gestión de los ferrocarriles influyó mucho el deseo de conservar lo que tanto les había costado ganar, aun cuando, durante las largas

conversaciones entre el sindicato y el gobierno en 1937-1938, se dijo claramente que la gestión de los obreros estaría sometida a rigurosas condiciones económicas (entre ellas el veto del gobierno a los incrementos del costo de los fletes) y que una administración obrera no representaría una opción fácil.

El sindicato asumió el control de acuerdo con estas condiciones y afrontó valientemente los tremendos problemas que se le planteaban. Reformó la administración, reparó las vías y el material rodante viejos, redujo los costes y cumplió con sus primeras obligaciones financieras; hasta el agregado comercial de Estados Unidos quedó favorablemente impresionado. Sin embargo, la falta de inversiones y el tener que trabajar con unos niveles de demanda y precios en los que el sindicato no podía influir pronto hicieron que los ferrocarriles incurrieran en déficit. Además, la nueva administración, que desempeñaba el anómalo papel de sindicato y patrono al mismo tiempo, se encontró ante serios problemas en el capítulo de las diferencias salariales y en el de la disciplina laboral. Una serie de enfrentamientos indicó la gravedad de estos problemas, que la administración reconoció con franqueza; también proporcionó a la prensa conservadora (que, por muy bien que hubiera acogido la nacionalización, veía con malos ojos el control obrero) municiones abundantes para disparar contra este ejemplo de comportamiento irresponsable, «antipatriótico». Durante su último año en el poder Cárdenas se preocupó mucho por la cuestión ferroviaria y, de acuerdo con la tendencia predominante hacia la «moderación», recortó tanto la nómina como la autonomía del sindicato, convirtiendo la administración de los ferrocarriles en «un simple apéndice del aparato estatal».³⁴ Estas medidas anunciaron la terminación total del control de los trabajadores y la imposición de la plena administración estatal durante la presidencia de Ávila Camacho. Los ferroviarios, ahora «totalmente desilusionados», figuraron de forma destacada en la oposición almazaniasta de 1940.³⁵

Comparada con los ferrocarriles, la industria del petróleo era de propiedad extranjera: en su totalidad (98 por 100), más pequeña (empleaba a unas 14.000 personas frente a las 47.000 de los ferrocarriles) y rentable. Después de la cifra máxima registrada en 1921 (193 millones de barriles) la producción había descendido hasta quedar en 32 millones en 1932, subiendo luego hasta los 47 millones en 1937, gracias en parte al gran yacimiento de Poza Rica. Para entonces la industria había experimentado una gran introversión después de los prósperos días del auge de las exportaciones. Ahora tenía un papel importante en la economía nacional (casi la mitad de la producción de 1937 se consumió en el país) y, como es lógico, figuraba en la estrategia desarrollista del gobierno. El Plan Sexenal preveía la creación de una compañía petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la explotación de nuevos campos, ya que las compañías petroleras parecían reacias a emprenderla porque estaban más interesadas en la bonanza venezolana. Estas intenciones moderadamente dirigistas eran de todo punto conformes a la política posrevolucionaria, que había provocado sucesivos enfrentamientos —y compromisos— entre el gobierno y las compañías petroleras. La más reciente, que culminó con el acuerdo Calles-Morrow de 1928, pro-

tegia eficazmente la posición de las compañías; pero después de 1934, con el Plan Sexenal y PEMEX, este estado de cosas parecía deshacerse. El propio Cárdenas adoptó una actitud típicamente dura. Como comandante militar en la Huasteca (1925-1928) había tenido ocasión de conocer directamente la industria del petróleo, su carácter de enclave, su afición a echar mano del soborno y el pistolero. Había desdeñado un «hermoso sedán Packard» que le ofreciera una compañía como «prueba de gran estima y respeto»: diez años más tarde mostró la misma resistencia a los chanchullos, que les parecía increíble a las compañías petroleras y sus amigos, condicionados por las costumbres políticas del callismo. Se quejaron de que el nuevo presidente era «curiosamente ingenuo en estas cuestiones y no apreciaba las convenciones comerciales tal como se entendían en México».³⁶

Así pues, Cárdenas no simpatizaba con las compañías petroleras. Expuso claramente su intención de obligarlas a ajustarse a las necesidades nacionales tal como se formulaban en el Plan Sexenal y más adelante se comprometió a elevar los derechos de explotación. Pero ninguna de estas medidas hacía pensar en una futura expropiación. Las inversiones extranjeras —en el sector petrolero y otros— todavía figuraban en los planes del gobierno; no se buscaba la expropiación per se. En ningún momento se consideró que las minas de propiedad extranjera (que colectivamente eran más importantes que la industria del petróleo) estuvieran maduras para la nacionalización a pesar de que el sindicato minero ejercía cierta presión para que se llevara a cabo; se estimulaban activamente las inversiones extranjeras en la industria eléctrica y otras. Así pues, mientras que la política cardenista relativa a las inversiones extranjeras en general era pragmática, el petróleo era un caso especial. Era un «símbolo sagrado» de identidad e independencia de la nación; en cambio, las compañías petroleras representaban un imperialismo perverso, parasitario. De manera que la expropiación tendría en su momento menos de ejemplo típico o de política económica nacionalista consecuente que de excepción espectacular, provocada por la intransigencia de las compañías (algunas de las cuales persistían en «concebir México como... un gobierno colonial al que sencillamente se le dictaban órdenes»).³⁷ Además, se llevó a cabo después de años de crecientes conflictos industriales en los cuales la lucha entre capitalistas y trabajadores era un importantísimo factor autónomo que contribuía a que los resultados fuesen imprevistos.

Al igual que los ferroviarios, los petroleros tenían reputación de ser independientes y combativos, reputación que se intensificó al fundarse el unificado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en agosto de 1935. En las repetidas huelgas del período 1934-1935 se presentaron a las compañías unas exigencias que ellas consideraron «absurdas»; en noviembre de 1936 los trabajadores las amenazaron con ir a la huelga si no se les concedía un nuevo convenio colectivo de alcance nacional. Las reivindicaciones de los

36. William Cameron Townsend, *Lázaro Cárdenas, Mexican Democrat*, Ann Arbor, Michigan, 1952, pp. 43-51 (hay trad. cast.: *Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano*, Gaudesa México, D.F., 1956); Murray, *Ciudad de México*, 15 de julio de 1935, FO 371/18737, A686.

37. La actitud de sir Henry Deierding, de la Royal Dutch Shell, descrita por el director de la filial mexicana de la Shell, El Águila, en Murray, *Ciudad de México*, 17 de noviembre de 1935, FO 371/18708, 8386.

34. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 289.

35. Davidson, *Ciudad de México*, 15 de agosto de 1940, FO 371/24217, 3818.

obreros —que llegaban a 240 cláusulas— incluían la rápida mexicanización del personal, la sustitución de empleados «de confianza» (no sindicados) por miembros del sindicato en todos los puestos excepto un puñado, una gran mejora de los salarios y de los beneficios sociales y una semana laboral de cuarenta horas. Según las compañías, tales demandas amenazaban tanto las prerrogativas gerenciales como la viabilidad económica; estimaron sus costes en un 500 por 100 de la nómina existente en aquel momento (el sindicato prefirió la cifra del 130 por 100, que, según dijo, estaba justificada por los niveles de beneficios; durante todo el conflicto se intercambiaron cifras como si fueran puñetazos en un combate de boxeo). Las contrapropuestas de las compañías sirvieron sólo para revelar el enorme abismo que había entre las dos partes y que la profusa propaganda de las compañías (denunciando la codicia de los petroleros —los «niños mimados» de la industria mexicana) no contribuyó a acortar. Después del fracaso de largas conversaciones, los trabajadores se declararon en huelga (mayo de 1937), alegando un «conflicto económico» ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.³⁸ Era claro que el arbitraje gozaba del favor tanto de la CTM como del gobierno, que ejercieron presión para que se llegase a un acuerdo y se evitaran más trastornos económicos (la idea de que el gobierno incitó el conflicto con el fin de justificar la expropiación que pensaba llevar a cabo no es convincente). En agosto una numerosa comisión federal ya había dado a conocer su dictamen y recomendado un modesto incremento de lo que ofrecían las compañías, a la vez que, de modo parecido, modificaba las demandas «sociales»; pero también criticó severamente a las compañías por su condición de enclaves monopolísticos, por su largo historial de injerencias en política, sus privilegios fiscales y sus beneficios excesivos. Por consiguiente, el conflicto laboral del principio dio paso a cuestiones económicas mucho más amplias.

Las compañías persistieron en su actitud intransigente, impugnaron la corrección del informe y se negaron a aumentar su oferta. Cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje aceptó «casi en su totalidad» las recomendaciones de la comisión, las compañías recurrieron a la Corte Suprema y cuando ésta falló contra ellas, volvieron a hacer caso omiso de la sentencia. Mientras tanto hicieron propaganda y ejercieron presiones tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, ellas mismas se habían colocado entre la espada y la pared. Seguras de que su papel económico era esencial —y, por ende, convencidas de que tanto el sindicato como el gobierno tendrían que transigir, igual que en 1923 y 1928—, las compañías resistieron hasta el final, rechazando una solución que era financieramente factible (la diferencia en términos económicos no era tan grande), temerosas de sus posibles repercusiones en otras naciones productoras de petróleo. El conflicto, que había empezado como un conflicto laboral, se centró ahora en grandes cuestiones de prestigio y principio. Porque a comienzos de 1938 también las opciones del gobierno eran limitadas: una rendición humillante, una intervención temporal de las propiedades de las compañías, o la expropiación pura y simple. Aunque la tercera opción fue el resultado final, no era el objetivo en que insistía el gobierno, como alegaron las compañías ante las negociaciones oficiales. La nacionalización de este recurso básico era, para algunos, un objetivo a largo plazo.

38. Véase Joe C. Ashby, *Organized Labor and the Mexican Revolution Under Lázaro Cárdenas*, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1963, pp. 197-212.

pero no hay ninguna prueba de que se eligiera de antemano 1938 como el *annus mirabilis*. Al contrario, el pragmatismo oficial se hizo evidente en la concesión de nuevas concesiones petroleras en 1937, así como en las conversaciones que se sostuvieron después de la expropiación con vistas a posibles inversiones extranjeras en la industria del petróleo. Es más, el gabinete estuvo dividido durante las críticas semanas iniciales de 1938 y pocos ponían en duda los riesgos —económicos, financieros, políticos— que la expropiación llevaría consigo. Pero ni siquiera estos riesgos podían justificar una rendición humillante. «Incendiaríamos y arrasáramos los campos petrolíferos —como dijo Cárdenas— antes que sacrificar nuestro honor.»³⁹ Cuando, en el último momento, vieron claramente que iban a ponerlas en evidencia, las compañías buscaron una solución negociada. Ya era demasiado tarde. El gobierno estaba decidido, la opinión pública, exaltada. El 18 de marzo de 1938 Cárdenas habló por radio a la nación, enumerando los pecados de las compañías y anunciando su expropiación total. Los trabajadores ya estaban entrando en las plantas para hacerse con el control físico de las mismas. Como declaró uno de ellos, impidiendo que los empleados británicos entrasen en la refinería de Minajitlán: «La ambición del extranjero ha tocado a su fin».⁴⁰

En términos de drama político y prestigio presidencial, la expropiación del petróleo fue el apogeo del período de Cárdenas. Las compañías quedaron «estupefactas».⁴¹ Desde los obispos hasta los estudiantes de la Universidad Nacional, los mexicanos acudieron en defensa de la causa nacional, aprobando la postura patriótica del presidente y admirando, probablemente por primera vez, su machismo personal. Hubo grandes manifestaciones: alrededor de un cuarto de millón de personas desfilaron por las calles de la capital portando ataúdes de mentirijillas en los que aparecían los nombres de los gigantes caídos: Standard, Huasteca, El Águila. Impulsada por la euforia patriótica, la gente se lanzó sobre los bonos del Estado que el gobierno emitió para cubrir la futura indemnización, y mujeres de todas las clases sociales hacían cola para donar dinero en efectivo, joyas, máquinas de coser, incluso anillos de boda. Nunca, ni antes ni después, desplegó la nación una solidaridad comparable. Durante un breve período el frentepopulismo de la CTM pareció abarcar a toda la población. En este ambiente propicio el PNR se reunió para celebrar su tercera asamblea nacional y se convirtió en el nuevo Partido de la Revolución Mexicana (PRM), estructurado corporativamente.

La euforia popular no podía extraer petróleo, pero ayudó: los petroleros —expertos «de salón» colaborando con perforadores veteranos— dieron muestras de gran energía e ingenio al hacerse con el control de una industria descapitalizada. Un joven de veintiocho años se encontró al frente del rico campo de petróleo que El Águila Company tenía en Poza Rica. Tal como sugería el lejano precedente de 1914, los mexicanos eran totalmente capaces de dirigir la industria. Se demostró el error de las compañías que, al igual que los terratenientes de La Laguna, predijeron que su retirada provocaría el caos. Sin embargo, las compañías tenían más poder que los terratenientes para hacer que su predicción se con-

39. *Ibid.*, p. 180.

40. Marett, *An Eye-witness of Mexico*, p. 227, donde el autor hace hincapié en la espontaneidad del comentario.

41. Ashby, *Organized Labor*, p. 237.

169

virtiese en realidad. Cuando los gobiernos norteamericano y británico presentaron sus protestas oficiales —los norteamericanos de forma circunspecta, los británicos con aspereza— las compañías pasaron inmediatamente al ataque y sacaron fondos de México, boicotearon las ventas de petróleo mexicano, presionaron a terceros para que secundasen el boicot y se negaron a vender maquinaria. Al coincidir con otros problemas económicos (inflación, crecimiento del déficit público, descenso del superávit de la balanza comercial), estas medidas tuvieron consecuencias serias. La confianza del mundo empresarial vaciló, se agotaron los créditos y bajó el peso, puesto que Estados Unidos suspendió temporalmente las compras de plata mexicana. Por una vez, decía la gente, hasta el flemático presidente pasó una noche de insomnio. En lo que se refiere a la industria petrolera misma, las exportaciones quedaron reducidas a la mitad y la producción disminuyó en alrededor de un tercio. El estallido de la segunda guerra mundial agravó los problemas de la industria, cuyo déficit era muy grande a finales de 1939. Vemos, pues, que una vez más una reforma económica cardenista se llevó a cabo en circunstancias extremas. Se hicieron evidentes las analogías con el caso de los ferrocarriles. Los petroleros —que tradicionalmente eran sindicalistas y estaban convencidos de la viabilidad de la industria— se mostraban favorables a una administración a cargo de ellos mismos, aunque también, como los ferroviarios, recelaban en lo que se refería a asumir la condición de trabajadores «federales». Sin embargo, el gobierno no quería renunciar al control de un recurso tan valioso y se constituyó la PEMEX basándose en la colaboración conjunta del gobierno y del sindicato. Esto dio un grado considerable de poder y autonomía a secciones locales del sindicato, mientras el gobierno conservaba en sus manos el control final de la gestión y las finanzas. Los líderes sindicales, entre la espada y la pared, se encontraban ante un dilema recurrente: traicionarían a su país si obstaculizaban la buena marcha del nuevo activo nacional, y a su clase si seguían escrupulosamente la dirección del gobierno. Y abundaban los motivos para que surgiesen conflictos: el tamaño de la nómina, la organización del sindicato, la política de ascensos y las prerrogativas gerenciales. En éste sentido, la expropiación no resolvió nada y, en cambio, exacerbó muchas cosas. La industria era sana en potencia, pero el boicot y la guerra anulaban los pronósticos optimistas que se habían hecho anteriormente. Por otra parte, al aumentar el número de trabajadores (de unos 15.000 a 20.000) y subir los salarios, la nómina de la industria se disparó (alrededor del 89 por 100 a finales de 1939). Con la PEMEX deficitaria, el gobierno se encontraba ahora ante un problema difícil. Cárdenas y la CTM pedían reorganización y despidos. Se decía que la disciplina laboral había sufrido: los trabajadores se habían arrogado unos derechos excesivos, en detrimento de la dirección; las nóminas eran demasiado largas; los salarios, demasiado elevados; los subsidios sociales, generosos en exceso. A decir verdad, con la expropiación había cambiado el estatus fundamental de la industria, invalidando el leudo de 1937; al igual que los ferroviarios, ahora se instó a los petroleros a apretarse el cinturón por el bien de la nación y —según recalcó la CTM— de su propia clase. Por su parte, los trabajadores echaban la culpa a los problemas heredados y a la mala gestión, y pedían más, en vez de menos, autonomía obrera. En 1940 hubo huelgas y se produjo una escisión entre los líderes del sindicato y las secciones más militantes. Como en el caso de los ferrocarriles, Cárdenas pasó gran parte de su último año en la presidencia ocupado con la reorganización de esta

nueva empresa nacionalizada (se le encontraba a menudo trabajando en las antiguas oficinas de El Águila Company). Respaldo el plan de austeridad de la dirección, recomendando reducciones salariales y de puestos de trabajo, mayor esfuerzo y mayor disciplina, en todo lo cual fue secundado fielmente por la CTM. Hubo una modesta mejoría en la situación comercial de la PEMEX en 1940, pero siguieron existiendo problemas básicos, lo cual despertó en algunos círculos la esperanza de que las propiedades fueran devueltas a sus anteriores dueños. El siguiente gobierno, que en 1943 tuvo que hacer frente a una seria amenaza de huelga, respondió con evasivas; el enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato quedó aplazado hasta después de la guerra.

Con la expropiación del petróleo, el furor diplomático y las repercusiones económicas que provocó y el comienzo de la guerra, por primera vez las relaciones exteriores adquirieron importancia central para el régimen. Hasta entonces su política exterior —aunque llevada con un fervor moral y una coherencia poco comunes— siguió las consabidas tradiciones «revolucionarias»: respeto por la soberanía nacional, no intervención, autodeterminación. Estos principios fueron sustentados vigorosamente en la Sociedad de Naciones y en sucesivas conferencias panamericanas, donde los portavoces mexicanos abogaron por la resolución pacífica de las disputas internacionales y denunciaron las agresiones, con imparcialidad, ya se tratara del apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado de Somoza; la invasión de Abisinia por los italianos; el imperialismo japonés en China; el Anschluss y el ataque nazi contra Polonia; y —con gran disgusto del PCM— la campaña soviética contra Finlandia, que dadas las analogías geopolíticas, despertó un sincero sentimiento de condena. Pero fue la guerra civil española la que atrajo más atención, así oficial como popular. Al principio Cárdenas accedió a suministrar a los republicanos las armas que le pidieron, y el suministro —a ritmo modesto— continuó durante la contienda. La condena oficial de los nacionalistas fue secundada por la CTM; y, al fracasar la causa republicana, México se convirtió en un asilo para refugiados españoles (unos treinta mil en total), entre los que había distinguidos intelectuales y el equipo de fútbol vasco; ambos dejaron huella en el país que los acogió.⁴² Al igual que la llegada fortuita a México de León Trotski (otro ejemplo de la imparcialidad de Cárdenas), la guerra afectó directamente a la política nacional. Debido a las obvias analogías, no fue extraño que la opinión mexicana se polarizase y que los grupos derechistas, católicos y fascistas fuesen partidarios de Franco. De hecho, algunos de ellos esperaban con ansia la aparición de algún generalísimo mexicano; condenaban al gobierno por apoyar al comunismo ateo, y deploraban la llegada a México de sus derrotados agentes. En 1938 carteles jubilosos proclamaban la derrota de Cárdenas en Teruel. Así pues, la guerra civil española ayudó a definir las alineaciones políticas durante el período anterior a las elecciones de 1940.

Mientras tanto, con la expropiación del petróleo, empeoraron las relaciones de México con Estados Unidos, que siempre fueron el punto cardinal del com-

42. La Casa de España, compuesta de intelectuales refugiados, se metamorfosó más adelante en el ilustre Colegio de México; los futbolistas vascos ayudaron a convertir a México del «estilo toscano, sin gracia» impartido originalmente por los ingleses a uno más en armonía con la «personalidad mexicana»: González, *Los días del presidente Cárdenas*, pp. 229-235 y 276.

pás diplomático. Hasta entonces había parecido que mejoraban progresivamente, y el acercamiento Calles-Morrow se había visto reforzado por la supuesta (aunque fácilmente exagerada) correspondencia entre el cardenismo y el New Deal, por la «política del buen vecino» de Roosevelt y por la feliz elección de Josephus Daniels para el cargo de embajador de Estados Unidos. Si durante la lucha entre Calles y Cárdenas las simpatías estadounidenses, tanto privadas como oficiales, habían estado divididas, y los estadounidenses habían ejercido influencia a favor de una solución negociada, era claro que Estados Unidos no quería tener nada que ver con rebeliones, decisión que, por supuesto, favorecía al ocupante legal de la presidencia. Daniels prestó apoyo incondicional al régimen a despecho del Departamento de Estado y de la opinión de los católicos estadounidenses, a la vez que su progresismo puritano y su entusiasmo juvenil le granjearon las simpatías de Cárdenas en la medida en que horrorizaban a los diplomáticos de carrera europeos. Con la formulación de la política del buen vecino los delegados mexicanos y estadounidenses en sucesivas conferencias panamericanas se encontraban con que estaban de acuerdo, insólitamente.

Acontecimientos nacionales pronto empezaron a enfriar esta relación más cálida que de costumbre. La expropiación de tierras de propiedad estadounidense dio motivo a enérgicas protestas; y si la nacionalización de los ferrocarriles alivió más dolores de cabeza de los que causó, la de la industria petrolera fue impugnada inmediatamente. El gobierno estadounidense respaldó el boicot de las compañías, exigió una indemnización (cuando no la devolución de las propiedades), interrumpió las conversaciones relativas a un tratado comercial y suspendió las compras de plata. La respuesta de Gran Bretaña —menos eficaz y más ofensiva— provocó una ruptura diplomática. La opinión oficial norteamericana estaba dividida e intereses económicos antagónicos (propietarios de minas de plata, fabricantes cuyas inversiones en México habían crecido recientemente y exportadores que pretendían expulsar a los alemanes de los mercados de México) se mostraban favorables a la conciliación antes que al enfrentamiento. Roosevelt, alentado por Daniels, estaba dispuesto a hacer caso omiso de los consejos belicosos de las compañías petroleras, del Departamento de Estado y de la prensa financiera. Reconoció que México tenía derecho a expropiar, descartó el recurso a la fuerza y procuró mitigar el daño que habían sufrido las relaciones entre Estados Unidos y México. Se reanudaron las compras de plata y se entablaron conversaciones sobre la indemnización de las compañías (cuyo principio no discutía el gobierno mexicano). Sin embargo, las compañías, que andaban ocupadas ejerciendo presiones en Europa y Estados Unidos, insistían en la total devolución de sus propiedades y, al ver los efectos del boicot y los apuros de la industria petrolera y de la economía mexicana, estaban completamente convencidos de que lograrían sus propósitos.

Factor importantísimo en la formulación de la política estadounidense fueron las percepciones de la creciente amenaza del Eje. Estas percepciones, que ya se manifestaban en el cultivo del panamericanismo, dominaban ahora la política de Estados Unidos en el exterior, como había previsto el gobierno Cárdenas. Por otra parte, el boicot obligó a México a firmar acuerdos de venta con las potencias del Eje, lo cual (aunque estos acuerdos no eran ni económicamente favorables ni ideológicamente afines a México, tampoco eran estratégicamente esenciales para el Eje) exacerbó los temores norteamericanos ante una posible

penetración política y económica de los alemanes en México. Al crecer con rapidez el espectro del quintacolumnismo nazi, el gobierno de Estados Unidos decidió que el acercamiento con México era tan esencial como lo había sido veinticinco años antes. Hasta el belicoso secretario de Estado, Cordell Hull, se impacientó a causa de la intransigencia de las compañías petroleras y deseaba vivamente que se llegara a un acuerdo, aunque fuese a expensas de dichas compañías. La intransigencia parecía tanto más anómala cuanto que la Sinclair Co. se desmarcó de las demás compañías y llegó a un acuerdo unilateral (mayo de 1940), a la vez que las presiones de la guerra obligaban a resolver otras diferencias pendientes entre Estados Unidos y México. En noviembre de 1941 se firmó un acuerdo general para indemnizar a los norteamericanos que habían perdido sus propiedades a causa de la Revolución; a cambio de ello, Estados Unidos accedió a incrementar las compras de plata, a facilitar créditos para apoyar el peso y a empezar conversaciones con vistas a la firma de un tratado comercial. Finalmente, en abril de 1942 las compañías petroleras aceptaron una compensación por valor de 23,8 millones de dólares, que equivalían al 4 por 100 de la petición inicial.

El acercamiento estadounidense-mexicano abarcaba asuntos más amplios y surtió un efecto notable en la política interior. A medida que iba acercándose la guerra, Estados Unidos estrechó sus relaciones con América Latina y, en sucesivas conferencias panamericanas (Panamá, 1939; La Habana, 1940), firmaron acuerdos prometiendo defender la seguridad del hemisferio y advirtiendo a las potencias beligerantes que permanecieran alejadas del Nuevo Mundo. Brasil y México se erigieron en los actores clave de esta alineación hemisférica y durante el período 1940-1941, mientras los temores estadounidenses a Japón se aceleraban hasta que finalmente quedaron justificados, México pasó a ser el eje político y estratégico de la política estadounidense en el continente. El decidido antifascismo de Cárdenas aportó ahora las bases para un acercamiento a Estados Unidos que su sucesor incrementaría y que, a su vez, favoreció la moderación del «proyecto cardenista» en los años posteriores a 1938. El presidente condenó con energía la agresión nazi y expresó resueltamente su apoyo a las democracias; promovió la plena cooperación contra cualquier ataque del Eje dirigido al continente americano y, para subrayar su compromiso, autorizó que se celebraran conversaciones militares entre Estados Unidos y México. Se puso freno a la propaganda alemana en México. Además, se empezó una reorganización de las fuerzas armadas; los gastos militares, que en 1939 habían alcanzado su punto más bajo desde la Revolución, un 15,8 por 100 de los gastos totales, ascendieron hasta situarse en un 19,7 por 100 en 1940. Una nueva Ley del Servicio Militar decretó que todos los jóvenes de dieciocho años sirvieran durante un año, con lo cual se esperaba, no sólo preparar a los mexicanos «para que cooperasen en la defensa de nuestro continente» (como dijo Ezequiel Padilla), sino también inculcar «una educación disciplinada que beneficiaría a la juventud de nuestro país en todas las tareas de la vida» (según Ávila Camacho).⁴³ Simultáneamente, y de que ahora la retórica nacional tenía prioridad frente a la clase, fue el hecho de que la escuela rural (ahora amenazada) se viese suplantada por el otro instrumento clásico de integración nacional, el cuartel.

43. *Ibid.*, p. 308; *Hoy*, 20 de septiembre de 1940.

En este caso, sin embargo, la actuación oficial corrió más que la opinión pública. La CTM, sirena de la izquierda oficial, sonó en apoyo de la cruzada democrática contra el fascismo, previendo que México acabaría participando en ella, con lo que la corrección ideológica se combinaría con las ventajas económicas. Pero la beligerancia lombardista se enfrió al empezar la «guerra de mentiras», y las consignas de la CTM se hicieron entonces eco de las del PCM: la contienda era una «guerra imperialista en pos de mercados» y México debía permanecer estrictamente neutral. Pero al cabo de un tiempo, en el mismo 1940, la CTM volvió a adoptar su anterior postura a favor de la guerra y contra el fascismo, lo cual se ajustaba mejor a su actitud en la política interior, y a comienzos de 1941 Lombardo ya prometía toda la ayuda material y moral contra el fascismo y expresaba su esperanza de que los estadounidenses participaran.⁴⁴ Al producirse el ataque nazi contra la Unión Soviética, el PCM se unió al frente democrático patriótico, cuyo número de miembros se completó gracias a Pearl Harbor. Si la izquierda, oficial y comunista, al principio se inclinaba y luego se volcó hacia el bando aliado, la derecha, naturalmente, disintió. Grupos conservadores y fascistas, tales como la Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista (UNS), se decantaron por la causa del Eje y criticaron la colaboración militar con Estados Unidos, al menos al principio. Con ello se adhirieron a una causa popular. Para la mayoría de los mexicanos la guerra era un conflicto que nada tenía que ver con ellos, que se desarrollaba en tierras remotas, y muy pocas personas se interesaban realmente por su marcha. Los incentivos para luchar eran pocos y el nuevo servicio militar tenía recuerdos de la odiada leva (el reclutamiento forzoso de los tiempos de Porfirio Díaz y la Revolución) y provocó protestas violentas al entrar en vigor después de 1941. En la medida en que la guerra despertó simpatías populares, éstas se inclinaron hacia Alemania, que para algunos había sido una víctima internacional en 1918, mientras otros la veían como la «antítesis del comunismo» o la fuente del antisemitismo, que a la sazón crecía en México.⁴⁵ Haría falta el estímulo activo del gobierno para que México se comprometiera con la causa aliada.

Mientras los asuntos exteriores absorbían cada vez más atención, en el interior se produjeron importantes cambios de alineamiento político. En medio de la euforia despertada por la expropiación del petróleo se alcanzó un objetivo básico del cardenismo: la reestructuración del partido oficial (que ahora se llamaba PRM) siguiendo patrones corporativos. Cárdenas albergaba la esperanza de que con ello se garantizara la continuación de la reforma y se superase el faccionalismo que seguían royendo las partes vitales del PNR, especialmente porque la izquierda (Francisco Múgica, Gonzalo Vázquez Vela, Ernesto Soto Reyes) se peleaba con el «centro», capitaneado de forma extraoficial por aquel gran amañador y superviviente que era Portes Gil. Éste, al que se había nombrado presidente del partido por la ayuda que prestara para desplazar a Calles (julio de 1935), se propuso «purificar» el PNR (esto es, eliminar todo vestigio de callismo) y hacerlo más atractivo por medio del uso frecuente del cine, la radio, la prensa y las con-

ferencias. Se instó a los comités de los estados a propiciar la afiliación y la participación de la clase trabajadora; el PNR (y no la CTM) emprendió la organización del campesinado a escala nacional. Sin embargo, al igual que algún inquisidor de la Edad Media, Portes Gil chocó con su propia campaña de «purificación» y fue sustituido por el cardenista radical Barba González (agosto de 1936). Mientras tanto continuó el proceso de organización del partido y de integración de los sectores: con la unión del PNR, la CTM, la CCM y el PCM en un pacto electoral (febrero de 1937); con la génesis, al cabo de un año, del PRM, que agrupaba a los militares, los trabajadores (CTM), los campesinos (representados al principio por la CCM, a la que pronto suplantaría la CNC, que lo abarcaba todo), y el sector «popular», cajón de sastre en el que había cooperativas, funcionarios y elementos no organizados (en gran parte de clase media), que no adquiriría una existencia corporativa oficial hasta 1943. También en esta nueva organización de masas un aspecto tutelar se combinaba con un compromiso a largo plazo con el cambio radical: el partido emprendería la preparación del pueblo para la creación de una democracia obrera y la consecución de un régimen socialista.⁴⁶

Irónicamente, la creación del PRM, que prometió trabajar en pos de estos grandes objetivos, tuvo lugar justo en el momento en que el régimen comenzaba a tambalearse; cuando, debido a la presión conjunta de las fuerzas internas y las externas, el presidente optó por consolidar, por evitar nuevos compromisos radicales y preparar una sucesión afín desde el punto de vista político, democrática y pacífica. El año 1938, que empezó en medio de la exaltación patriótica, terminó con los radicales batiéndose en retirada: si hubo un temidor cardenista —un momento en que la Revolución interrumpió su avance y echó a andar en dirección contraria—, fue en 1938 y no en 1940. Por supuesto, los críticos izquierdistas ven el cardenismo como un temidor prolongado; mientras que para los partidarios leales no hubo ninguna retirada, sólo repliegues tácticos. Pero las cosas que tales partidarios citan como pruebas de que el radicalismo continuó existiendo después de 1938 (la continuación de la enseñanza socialista, el impuesto sobre beneficios extraordinarios, las leyes relativas a la industria de la electricidad) apenas pueden compararse con las amplias reformas de años anteriores. Si no hubo ninguna retirada en gran escala, no puede negarse que hubo un «notable cambio de dirección»,⁴⁷ el cual, sin embargo, fue fruto de las circunstancias más que de una decisión autónoma. Se registró un descenso espectacular del poder presidencial en 1938-1940, resultado de nuevas presiones políticas, del fin del sexenio, y del hecho sin precedentes de que Cárdenas rehusó apoyar a un sucesor. Las rencillas en el seno del PRM y, finalmente, el desastre electoral de 1940 revelaron esta erosión del poder, que a su vez socavó la totalidad de la coalición cardenista y afectó principalmente a la CTM. Al igual que en los comienzos del decenio de 1930, el clima ideológico experimentó un cambio repentino; en 1940 los conservadores ya decían con confianza que «la gran mayoría de las personas que piensan... ya están hartas de socialismo»; y que «a lo largo de los próximos años la tendencia será a la derecha».⁴⁸

44. Ibáñez Torres Ramírez, *Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: México en la segunda guerra mundial*, México, 1979, pp. 66-67.

45. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 256; Davidson, Ciudad de México, 4 de enero de 1940, FO 371/24217, A813.

46. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 183.

47. *Ibid.*, p. 272; cf. Tzvi Medin, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*, México, 1972, pp. 204-206.

48. Davidson, Ciudad de México, 4 de enero de 1940, FO 371/24217, A813.

Tanto la guerra como las presiones internas fomentaban la cautela y la consolidación. La principal de estas presiones era el estado de la economía. Cárdenas había heredado una economía que iba recuperándose de la depresión y en la que la industria manufacturera y ciertas exportaciones (la de plata, por ejemplo) aparecían boyantes. Incluso sin efectuar cambios radicales en la estructura fiscal, los ingresos del gobierno aumentaron (casi el doble entre 1932 y 1936). Pero lo mismo hizo el gasto público: modestamente en 1934-1935, período en que la batalla contra Calles gozó de prioridad, con rapidez después de 1936, al ponerse en práctica las reformas importantes. Así, el gasto creció, en términos reales, de 265 millones de pesos (1934) a 406 millones (1936), 504 millones (1938) y 604 millones (1940), con los gastos «sociales» y «económicos» en vanguardia. Las exportaciones, sin embargo, alcanzaron un punto máximo en 1937 y el gobierno sufrió déficits presupuestarios que del 5,5 por 100 de la renta en 1936 pasaron al 15,1 por 100 en 1938. Para entonces la financiación mediante déficit se había convertido en un instrumento efectivo por medio del cual el gobierno —que poseía una voluntad política y unos poderes de intervención monetaria igualmente sin precedentes— contrarrestaba los efectos de la renovada recesión, transmitida desde Estados Unidos en 1937-1938. Comparado con un decenio antes, México se encontraba ahora mejor situado para soportar estas sacudidas externas.

Pero las presiones inflacionarias que ello engendró se vieron agravadas por el crecimiento de los costes tanto de las importaciones como de los alimentos. Se culpaba apresurada, aunque injustificadamente, a la ineficiencia ejidal del coste de los alimentos. De hecho, aunque la producción agrícola resultó afectada por la conmoción de la reforma agraria y por la consiguiente desgana de los terratenientes, en lo que a invertir se refiere, en 1935-1939 la producción total de maíz fue más o menos igual que la de diez años antes; dado el aumento tanto de la población como de la extensión de tierra cultivada, estas cifras (oficiales) sugieren un descenso del 17 por 100 del consumo per cápita y otro del 6 por 100 de los rendimientos por hectárea. No obstante, es muy probable que estas cifras (que otros datos contradicen) subestimen tanto la producción como el consumo de los campesinos, que, por supuesto, estaban más descentralizados y eran más escurridizos que los equivalentes anteriores en las haciendas.⁴⁹ De todos modos, aunque los ejidatarios comieran mejor, el suministro de alimentos a las ciudades se vio limitado y los precios empezaron a subir poco a poco. Al igual que Alemania, México tenía experiencia reciente de hiperinflación y la opinión era sensible a este amenazador —aunque modesto— aumento de los precios. Ya en 1936 se oían comentarios adversos; hasta Lombardo reconoció que había problemas. Entre 1934 y 1940 el índice de precios al por menor subió un 38 por 100, pero entre 1936 y 1938 —años de espectaculares reformas sociales— aumentó un 26 por 100, y los alimentos fueron los más afectados. Sin embargo, los análisis apocalípticos que proponen una caída sostenida de los salarios reales durante la depresión, los inflacionarios años a fines de los treinta y los todavía más inflacionarios años cuarenta son poco convincentes. Bajo Cárdenas el salario mínimo superó a la inflación y el poder adquisitivo total de los salarios fue en aumento,

49. E. Alanís Patiño y E. Vargas Torres, «Observaciones sobre algunas estadísticas agrícolas», *Trimestre Económico*, 12 (1945-1946), pp. 573-615.

lo cual benefició al mercado nacional. Los principales beneficiarios fueron los ejidatarios, las organizaciones obreras y los trabajadores (como la «gente decente» empleada por la General Motors) que aprovecharon los cambios que se produjeron en la estructura de la ocupación a medida que los puestos de trabajo agrícolas dieron paso a los industriales. Los proletarios rurales (en especial los que trabajaban en haciendas sobre las que pesaba la expropiación) fueron menos afortunados, mientras que fue la clase media urbana —la que más criticaba a Cárdenas— el sector relativamente más perjudicado por la inflación.

No obstante, la inflación hizo peligrar conquistas recientes de la clase obrera y, con ello, el apoyo de ésta al régimen. También frenó la inversión privada y estimuló la fuga de capitales. La respuesta del gobierno fue contradictoria, lo que tal vez representó una prueba más de las limitaciones estructurales bajo las cuales actuaba el cardenismo. Se hizo un intento serio de regular los precios de los alimentos: tal como sugirió la reacción hostil de la empresa privada, el intento no fue un simple paliativo, y durante el último trimestre de 1938 el índice general de precios registró un modesto descenso (4 por 100), y el de los alimentos, un descenso significativo (8 por 100). Buscando soluciones más fundamentales, el gobierno elevó los aranceles (diciembre de 1937) y, tras la devaluación de 1938, cobró nuevos impuestos a las exportaciones y recortó los proyectos de inversión (los gastos per cápita en obras públicas bajaron un 38 por 100 entre 1937 y 1938; la construcción de carreteras quedó «prácticamente interrumpida»). Los trabajadores del sector público —tales como los ferroviarios y los petroleros— tuvieron que apretarse el cinturón. Al disminuir también los créditos agrícolas que concedía el gobierno, los ejidatarios pasaron estrecheces o, como los laguneros, acudieron a fuentes privadas. Y después de los embriagadores días de 1936-1937 el ritmo de la reforma agraria se hizo más lento (algunos decían que por deferencia a los intereses norteamericanos). Desde luego, el gobierno albergaba la esperanza de obtener un préstamo norteamericano y el gobierno de Estados Unidos, aunque prefería un «programa de ayuda económica» más amplio, no era del todo contrario a ello. Pero la expropiación del petróleo descartó todo acuerdo en este sentido.⁵⁰

Al acumularse los problemas económicos, la administración perdió ímpetu a la vez que crecía la oposición política. Por una parte, al producirse fisuras en la coalición cardenista, antiguos partidarios de ella (principalmente grupos de la clase obrera) desertaron; por otra, los adversarios conservadores y católicos, que venían batiéndose en retirada desde la caída de Calles, cuando no desde la derrota de la Cristiada, experimentaron una recuperación decisiva. Aunque las cifras oficiales de huelgas descendieron después de 1937 (lo cual reflejó la poca disposición oficial a reconocer la legalidad de las huelgas), los conflictos industriales *de facto* crecieron y hubo importantes huelgas de panaderos, maestros, electricistas, mineros y trabajadores del azúcar, los textiles y los tranvías, así como conflictos en los ferrocarriles y en la industria del petróleo. En 1940 ya abandonaban los indicios de apoyo obrero al candidato presidencial de la oposición; incluso hubo abusos contra el gobierno en la manifestación del 1 de Mayo en Ciudad de México. Tampoco el mundo empresarial sintió crecer su amor al régimen a causa de

50. Hamilton, *Limits of State Autonomy*, p. 224.

la nueva moderación que éste desplegaba. Se denunciaron la regulación de los precios y los aumentos de los impuestos; los ataques contra los sindicatos activistas se hicieron más ruidosos, y al mismo tiempo que la exportación de capital debilitaba a la economía, la oposición política se reorganizó y adquirió nuevos fondos. Siguiendo el ejemplo del régimen, el mundo empresarial demostraba ahora una mayor organización corporativa, y lo mismo puede decirse de la oposición conservadora y fascista. En el año 1937 tuvo lugar el nacimiento de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), movimiento (contrario al concepto de «partido») integrista católico de masas que rechazaba rotundamente la Revolución, el liberalismo, el socialismo, la lucha de clases y el materialismo gringo, ofreciendo en su lugar los valores de la religión, la familia, la propiedad privada, la jerarquía y la solidaridad social. Los sinarquistas, que posiblemente recibían ayuda económica de las empresas, aunque dependían sobre todo del apoyo sincero de los campesinos, especialmente en las antiguas regiones cristeras del oeste y el centro de México, crecieron con rapidez desde el punto de vista numérico (en 1943 ya afirmaban ser medio millón) y organizaron manifestaciones masivas de resurgimiento religioso en las poblaciones del Bajío. La Acción Nacional, que en sus primeros tiempos compartía una ideología parecida pero que usaba métodos más tradicionales para hacer adeptos entre la clase media, fue fundada en 1939 bajo la jefatura de Manuel Gómez Morín, con el apoyo de católicos seculares y el respaldo económico de la burguesía de Monterrey.

La derecha «secular» era menos numerosa pero igualmente ruidosa.⁵¹ Al acercarse 1940 apareció una serie de partidos de menor importancia, algunos de los cuales seguían a revolucionarios veteranos que, al envejecer, enriquecerse y lamentarse de la decadencia de la Revolución, se convirtieron al conservadurismo o incluso al fascismo declarado (Marcelo Caraveo, Ramón F. Iturbe, Cedillo, Joaquín Amaro). Algunos, como el Partido Social Demócrata (PSD) de Jorge Prieto Laurens, atraían a la clase media anticardenista y explotaban la tradición liberal que se había manifestado en 1929; pero la mayoría, con su denuncia del comunismo, de la llegada de subversivos españoles y de la influencia omnipresente de los judíos, revelaba cómo un nutrido sector de la clase media se había visto empujada hacia la extrema derecha por la polarización política del decenio de 1930. Ejemplo típico de este fenómeno era José Vasconcelos, modelo de la oposición antirreeleccionista en 1929 que ahora coqueteaba con el fascismo en las páginas de *Timón* y sostenía que el Eje ganaría la guerra, que Hitler constituía una figura hegeliana, una figura histórica mundial (había que ser una de ellas para reconocer a otra) y que México tendría que ajustarse a tales imperativos historicistas y someterse al gobierno autoritario. Tanto el anticomunismo como el antisemitismo estaban ya de moda. Bernardino Mena Brito obsequiaba a los veteranos como él con denuncias del papel del «judaísmo universal», denuncias que también propagaban los sinarquistas. El Partido Revolucionario Anti-Comunista (PRAC), que en 1938 fundó Manuel Pérez Treviño, antiguo jefe del PNR y latifundista, proclamaba con nombre la razón de su existencia. Se fundaron muchas organizaciones de esta índole en los años 1938-1940; eran organizaciones débi-

les y efímeras que a menudo dependían de los caprichos y la ambición de un caudillo envejecido. Pero eran indicio de un cambio real en el clima ideológico: resurgir de la derecha (una derecha liberal que iba a menos y una derecha autoritaria y agresiva que era cada vez mayor y que seguía modelos extranjeros); una nueva añoranza del porfiriato que se hacía evidente en la afectuosa evocación de la vida ranchera en el cine, y la correspondiente pérdida de iniciativa política por parte de la izquierda.

La derecha imitaba de forma creciente los métodos de la izquierda. Formaba organizaciones de masas o incluso birlaba las de sus contrarios (como Almazán hizo con los sindicatos disidentes en 1940), con lo cual participaba en el proceso gradual de institucionalización y «masificación» de la política que fue característico del decenio de 1930. Incluso en regiones donde actuaban los sinarquistas, la política de finales de los años treinta fue relativamente pacífica en comparación con la tremenda violencia de la Cristiada; tanto más cuanto que la jerarquía católica se esforzó por refrenar a los fanáticos radicales del movimiento. En esto el líder del Partido Acción Nacional (PAN) —el hábil y elocuente intelectual Gómez Morín, versión derechista de Lombardo— fue más típico y efectivo que viejos veteranos como Amaro, cuyo sangriento historial y mentalidad autodidacta le descalificaban para ocupar el cargo presidencial que él codiciaba. Es posible que Amaro ardiese en deseos de hacerse con el poder por medio de un cuartelazo, pero los tiempos ya no eran propicios. Almazán habló de rebelión en 1940, pero no pasó de ahí. Sin embargo, un veterano permanecía aferrado a las viejas costumbres, incapaz de comprender las nuevas. Durante años Saturnino Cedillo había dirigido el estado de San Luis Potosí como gran «patriarca de pueblo» más que como el cacique nuevo, líder de masas organizadas que se estaba convirtiendo rápidamente en la norma.⁵² Contaba con el apoyo de sus colonos agrarios (que habían luchado por él en las guerras de la Revolución y los cristeros), con la simpatía de los católicos, a quienes protegía, y con una red de pequeños caciques municipales. Patrocinador de una extensa reforma agraria de tipo personal y popular, Cedillo toleraba ahora a los terratenientes y hombres de negocios que huían del radicalismo cardenista. Sus relaciones con el movimiento obrero eran generalmente hostiles, y como secretario de Agricultura (cargo con el que Cárdenas había recompensado el respaldo que Cedillo le diera contra Calles) promovía el clientelismo y fomentaba la colonización con preferencia a la colectivización y se ganaba el odio de radicales como Múgica. En San Luis, donde su poder perduró, los sindicatos independientes adquirieron fuerza con el apoyo de la CTM, que aprovechó las huelgas que hubo en las plantas de Atlas y Asarco para debilitar el control local de Cedillo, alegando que éste era amigo del fascismo internacional (lo cual era dudoso) y enemigo del movimiento obrero (lo cual era cierto). En 1937 el PNR se incorporó a la partida y discutió el control de las elecciones al Congreso por parte de Cedillo, y, según los cedillistas, Múgica, Lombardo y la izquierda forzaron su salida de la Secretaría de Agricultura. En las postrimerías de 1937 Cedillo se encontraba en San Luis, resentido, acariciando pensamien-

51. Hugh G. Campbell, *La derecha radical en México, 1929-1949*, México, 1976, pp. 47 y ss.

52. Dudley Ankerson, *Agrarian Warlord: Saturnino Cedillo and the Mexican Revolution in San Luis Potosí*, De Kalb, Illinois, 1984, cap. 6 (hay trad. cast.: *El caudillo agrarista. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México, D.F., s.f.*).

tos de rebelión, alentado por consejeros ambiciosos y por el palpable crecimiento del descontento conservador.

Convertir el descontento general en una oposición política efectiva no fue tarea fácil, especialmente si se tiene en cuenta que las ideas de Cedillo eran primitivas y sus aliados en potencia eran tan dispares. Aunque planeaba una campaña política, puede que presidencial, también preveía, probablemente con satisfacción, la perspectiva de una revuelta armada. Sin embargo, las propuestas a posibles aliados fueron en su mayor parte un fracaso. Las empresas de Monterrey aportaron un poco de dinero; hubo conversaciones con las compañías petroleras, pero no se llegó a ningún acuerdo (la idea de que la revuelta de Cedillo no sólo la financiaron, sino que también la maquinaron dichas compañías está muy extendida, pero es falsa); y conservadores prominentes como el general Almazán, que mandaba en el noreste, o Román Yocupicio, el gobernador de Sonora, preferían el obstruccionismo político a la rebelión declarada. Cedillo tuvo que apoyarse en sus recursos locales, especialmente sus quince mil veteranos agrarios. Pero también aquí se vio obligado a ponerse a la defensiva. Enterado de las intenciones de Cedillo, el gobierno hizo cambios en los mandos militares, fomentó el reclutamiento de la CTM en San Luis y, la más espectacular de todas las medidas, puso en marcha una importante reforma agraria que repartió hasta un millón de hectáreas de tierra potosina, creando con ello una clientela rival, agrarista, en casa del propio Cedillo. Era claro que el cacicazgo de Cedillo iba a correr la misma suerte que el de Garrido en Tabasco o el de Saturnino Osornio en Querétaro. Pero Cárdenas ofreció a su viejo aliado una salida honorable nombrándole comandante militar en Michoacán. Durante la primavera de 1938 Cedillo debatió, planeó y negoció. Finalmente, se negó a abandonar San Luis y Cárdenas, temeroso de que su desafío fuera contagioso, fue por él. En otra de sus dramáticas iniciativas, Cárdenas llegó a San Luis (mayo de 1938), dirigió la palabra al pueblo y pidió a Cedillo que se retirara. En vez de ello, Cedillo se rebeló; o, como dijo un partidario suyo: «No se levantó, lo levantaron». Fue una rebelión poco entusiasta, una demostración de disgusto más que un pronunciamiento serio. A decir verdad, Cedillo tuvo el gesto humanitario de aconsejar a la mayoría de sus seguidores que se quedarán en casa y prefirió echarse al monte con la esperanza de que hubiera alguna apertura favorable en 1940 (exactamente como había hecho en 1915). Pero en 1938 los tiempos habían cambiado. Apenas si hubo revueltas de simpatía en Jalisco, Puebla y Oaxaca; incluso en el propio San Luis los cedillistas estaban divididos y muchos tomaron partido por Cárdenas, que seguía en el estado, viajando, haciendo propaganda y revelando a todos la falta de sustancia de las pretensiones de Cedillo. Muchos de los rebeldes fueron amañados; unos cuantos, entre ellos el mismísimo Cedillo, fueron perseguidos y muertos. Se dijo que Cárdenas lo lamentó sinceramente.

Así concluyó la última rebelión militar al viejo estilo del largo ciclo revolucionario. Todavía andaban persiguiendo a Cedillo por las montañas de San Luis cuando la oposición conservadora ya empezaba a reunir sus fuerzas para participar pacíficamente en las elecciones de 1940. Alarmado por la revuelta de Cedillo y por el empeoramiento de la situación económica, el gobierno se propuso buscar la conciliación. Restringió la reforma y suavizó la retórica. Durante su extensa gira de 1939 por el territorio de Almazán en el norte, Cárdenas se esforzó por negar la acusación de «comunista»; en Saltillo alabó al mundo empresarial del

noreste, afirmando que era parte constituyente de las fuerzas vivas y respetables del país (términos que contrastaban con las censuras que había expresado tres años antes en Monterrey). A estas alturas la negación del «comunismo» y el énfasis en el consenso constitucional ya formaban parte del repertorio habitual.⁵³ El Congreso se hallaba entregado a la tarea de diluir el programa de educación socialista; la CTM demostraba su preocupación por la unidad nacional y el equilibrio social presionando a los sindicatos para que evitaran las huelgas (muchas de las cuales estaban pendientes) al mismo tiempo que aspirase a la abolición de la propiedad o a la dictadura del proletariado. Que se juzgara necesario negar estas cosas es un comentario elocuente de la labor alarmista llevada a cabo por los conservadores. Pero había una lógica bien fundada detrás de las afirmaciones conciliatorias de Cárdenas, que la derecha, en cierto sentido, aceptó. En lugar de comprometer y desplegar sus abundantes recursos en el espacioso ruedo de la política oficial, la derecha prefirió permanecer fuera de él, agrupada en una coalición de partidos conservadores y fascistoïdes, con la esperanza de la continuación del radicalismo provocara el derrumbamiento total del cardenismo, del cual la derecha se beneficiaría inmensa y permanentemente. Por consiguiente, la derecha «prefiere [preferir] ver [una] aceleración de [el] programa radical, alegando que alguna reacción sería más probable bajo una administración nueva».⁵⁴ De hecho, no podía descartarse un golpe de Estado de signo conservador, que posiblemente uniría a militares y sinarquistas, si Cárdenas imponía un sucesor radical que defendiera un programa igualmente radical. En semejante clima —que los críticos «de salón» no tenían en cuenta— la conciliación poseía una lógica clara.

Fue en este clima que se abordó el asunto de la sucesión presidencial en el verano de 1938. Dentro y fuera del PRM empezaron a formarse grupos rivales que eran conscientes de que las elecciones de 1940 serían decisivas desde el punto de vista político. Los comicios ofrecían una oportunidad de detener el cardenismo (vehículo que ya estaba perdiendo velocidad); de colocar en el poder un régimen moderado o francamente conservador; o, por el contrario, de continuar la reforma a buen ritmo. El papel del propio Cárdenas, que ha sido debatido a menudo, fue importante, pero no decisivo. Su poder personal iba disminuyendo y el presidente no pudo impedir las especulaciones en torno a su sucesión. Aun en el caso de haberlo deseado, él solo no podía determinar el resultado electoral; tampoco podía el PRM, que, aunque fuese en levitación, era un monstruo enorme, carente de coordinación y de un cerebro rector que guardase proporción con su volumen corporativo. Dividido internamente, el partido no podía garantizar una sucesión sin problemas; a decir verdad, el hombre que destacaba como heredero forzoso, Ávila Camacho, se valió de organizaciones paralelas ajenas al partido, para preparar su campaña con vistas a obtener la candidatura, que el PRM confirmó una vez fue un hecho consumado. El conflicto se vio agravado por

53. Véase José Contreras, *México 1940: industrialización y crisis política. Economía y sociedad civil en las elecciones presidenciales*, México, D.F., 1977, pp. 154-155; y José Medina, *Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: Del cardenismo al avilismo*, México, D.F., 1978, p. 93.

54. Davidson, Ciudad de México, 9 de enero de 1940, FO 371/24217 A1301.

negación política de Cárdenas. Descartó su propia reelección y abogó por una selección auténticamente libre en el seno del PRM. Lo que determinaría la sucesión serían las nuevas organizaciones de masas creadas durante el decenio de 1930. Por audaz e inteligente que fuera, esta insólita negativa de un presidente saliente a elegir su sucesión —o, como mínimo, a influir mucho en ella— constituyó una invitación al faccionalismo, una automutilación del poder presidencial y una sentencia de muerte para la izquierda oficial. Ésta, que apoyaba a Francisco Múgica, amigo íntimo y consejero de Cárdenas, se llevó una decepción al no recibir el respaldo del presidente. Sus rivales del centro-derecha, que apoyaban a Ávila Camacho, el secretario de Guerra, les ganaron por la mano contraviniendo los deseos presidenciales y empezando su campaña en 1938, tras lo cual la izquierda estuvo a la defensiva. Asimismo, Ávila Camacho había preparado bien el terreno. Miembro de una poderosa familia política de Puebla, astuto aliado de Cárdenas durante los años treinta, era un político de carrera más que un caudillo, a pesar de sus estrellas de general. Sin embargo, en su cargo de secretario de Guerra (y Guerra era todavía la antesala de la presidencia, como más adelante lo sería Gobernación), se había ganado el amplio, aunque no abrumador, apoyo de los militares, lo cual era una consideración importantísima en vista de los temores a un cuartelazo que existían en aquel momento y que por última vez afectarían seriamente el asunto de la sucesión. También contaba con la mayoría de los gobernadores de los estados, alineados por su diestro director de campaña, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán; y con ellos llegaron numerosos caciques locales que, con el fin de conservar sus feudos pese al creciente poder federal, convirtieron un cardenismo oportunista en un avilacamachismo igualmente oportunista. El Congreso, en especial el Senado, se convirtió en un nido de avilacamachistas.

Los sectores organizados del partido detectaron el rumbo que tomaban los acontecimientos y, dirigidos por sus líderes, no tardaron en someterse. La CNC, a la que Cárdenas dejó que tomara su propia decisión, fue presa de manipuladores de menor importancia y su voto abrumador a favor de Ávila Camacho fue denunciado inmediatamente por los muguquistas, que afirmaron que era una parodia de la opinión de los campesinos: prueba de que la CNC se había transformado rápidamente en un simple «fantasma» controlado por burócratas que no representaban a nadie.⁵⁵ Más importante fue el hecho de que la CTM se declarase a favor de Ávila Camacho, para lo cual sus líderes aportaron unos argumentos ya consabidos: que la unidad era importantísima, que ante las amenazas fascistas, así internas como externas, 1940 era un momento para la consolidación y no para el avance (el PCM rechazó las propuestas muguquistas y adoptó la misma postura). La CTM sublimó su radicalismo compilando un extenso segundo Plan Sexenal que preveía más dirigismo económico, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y una forma de democracia «funcional». Vilipendiado por la derecha, que lo tildó a la vez de comunista y fascista, el plan mostraba una fe ingenua en las propuestas sobre el papel y en la capacidad de la CTM para hacerlas realidad. En cuanto al candidato al que la CTM esperaba ligar de esta manera, Ávila Camacho confirmó amablemente las propuestas. Pero resultó que el programa definitivo del PRM fue un documento previsiblemente moderado.

Favorecido por las circunstancias, Ávila Camacho pudo contar con el apoyo tanto del centro como de la izquierda. También hizo un llamamiento a la derecha: como candidato y presidente electo, cultivó la retórica «moderada» de la época, haciéndose eco de las negaciones de comunismo de Cárdenas e ingenándose las para hacer suyo el creciente sentimiento anticomunista, a pesar del apoyo del PCM a su candidatura. Se previno a los trabajadores contra la militancia y se les aconsejó que protegieran lo que ya habían conquistado; se tranquilizó a los pequeños propietarios; se alabó a los hombres de negocios de Monterrey diciéndoles de ellos que eran los que sueñan y trazan planes para la prosperidad y la grandeza de México.⁵⁶ También en lo referente a la educación (que seguía siendo un asunto palpitante) se mostró Ávila Camacho partidario de la moderación y la reconciliación; rechazó las teorías doctrinarias y abogó por el respeto a la familia, la religión y la cultura nacional; se observó que era «recibido cordialmente» en Los Altos, el viejo núcleo de los cristeros.⁵⁷ Y en septiembre de 1940, ya elegido, declaró en tono vibrante su fe: «Yo soy creyente». Durante toda la campaña su retórica —que hacía hincapié en la libertad, la democracia (que ahora se contraponía con frecuencia al comunismo) y, sobre todo, la *unidad*— contrastó con el pugnaz radicalismo de Cárdenas seis años antes. Pronto se vio claramente que Ávila Camacho estaba «poco a poco negando la continuidad cardenista expresada en el Plan Sexenal».⁵⁸ A pesar de ello, la CTM, la principal progenitora de dicho plan, continuó respaldando al candidato e incluso haciéndose eco de sus soporíferos sofismas.

Así pues, Ávila Camacho tenía algo que ofrecer a todo el mundo y apoyaba a los de la CTM y a los cristeros, a los trabajadores y a los capitalistas; más que en el caso de Cárdenas seis años antes, había aquí un atractivo totalmente populista en el cual las diferencias de credo y de clase social quedaban inmersas en una glutinosa unidad nacional. Las circunstancias de 1940 eran propicias y la estrategia dio buenos resultados, hasta cierto punto. La burguesía de Monterrey hizo apuestas compensatorias, conforme al procedimiento clásico de los grandes empresarios: respondió positivamente a las propuestas de Ávila Camacho, lo cual le proporcionó cierta influencia en el seno del partido oficial; pero también patrocinó a su principal rival católico, el PAN (y quizá también a la JNS). El PAN vivió momentos de angustia tratando de decidir si debía respaldar a la oposición o —como probablemente preferían sus amos de Monterrey— adoptar una actitud más prudente y abstenerse. Finalmente, el partido resolvió apoyar a la oposición «de forma muy condicional», lo cual representaba lo peor de ambas opciones. Los líderes sinarquistas también orientaron sus velas al viento; rechazaron a Alemán y, persuadidos por Alemán, recomendaron la abstención: una prueba más de la creciente división entre ellos y sus seguidores radicales que la destitución del líder populista Salvador Abascal en 1941 acentuó.

Los titubeos del PAN y de la UNS dividieron todavía más a una oposición ya dividida. La pléthora de partidos, grupos y posibles candidatos conservadores daba testimonio de la amplitud de los sentimientos contra el gobierno, pero tam-

56. *Ibid.*, pp. 155-156.

57. Rees, Ciudad de México, 9 de febrero de 1940, FO 371/24217, A1654.

58. Medina, *Del cardenismo al avilacamachismo*, pp. 92-93.

bién dificultaba la cooperación contra el enemigo común. El PAN y la UNS —el cerebro intelectual y el músculo popular de la derecha católica— fueron manipulados y marginados. Otros grupos servían los intereses personalistas de caudillos envejecidos: el Frente Constitucional Democrático Mexicano (FCDM) apoyaba al siempre oportunista y optimista general Rafael Sánchez Tapia; el PRAC, capitaneado por viejos jefes calistas como Manuel Pérez Treviño, respaldó a Amaro, pero cuando la candidatura de éste empezó a ir mal (su imagen de superviviente violento de una época pretoriana ya periclitada no era ninguna ayuda y se vio intensificada por el agresivo manifiesto con que abrió su campaña), el PRAC se negó de mala manera a trasladar su apoyo al principal contrincante, Almazán.⁵⁹ Porque fue Almazán, respaldado por una coalición variopinta, quien se erigió ahora en principal adversario de Ávila Camacho. Dotado de experiencia política, rico (se le calculaba una fortuna de cinco millones de pesos) y más listo que Amaro (había demostrado poseer «un talento notable para el engaño y las tretas» durante su accidentada trayectoria revolucionaria, y era «demasiado astuto» para respaldar a Cedillo en 1938), Almazán poseía extensos intereses en Nuevo León, donde tenía su mando militar y donde gozaba de buenas relaciones con el grupo de Monterrey.⁶⁰ Al negársele la oportunidad de encauzar sus conocidas ambiciones por medio del PRM —como Cárdenas esperaba que hiciese—, Almazán se benefició de los errores y las flaquezas del resto de la oposición; y, al negársele el apoyo total de los grupos derechistas organizados (PRAC, PAN, UNS), dependía más de grupos de electores numerosos y difusos —los católicos, la clase media, los pequeños propietarios— cuya integración en el partido almazanista, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), era poco firme. Aunque fuera débil desde el punto de vista de la organización, el almazanismo era poderoso en potencia, especialmente porque el candidato poseía un atractivo superior al de un caudillo rechazado y despreciado como Amaro. Movilizó a los liberales de clase media, que volvieron a vivir la protesta constitucional de 1929; a los campesinos, que estaban desencantados de las triquiñuelas de la CNC y de la lentitud o pura y simple corrupción de la reforma agraria; a los militares jóvenes (a sus jefes los había conquistado el PRM); y a muchos grupos de la clase obrera, en especial a los grandes sindicatos industriales, los ferroviarios y los petroleros, que se oponían al clientelismo lombardista y a la coacción cardenista, así como a los electricistas y los tranviarios, a secciones de los mineros y al fisiparo sindical de maestros, a los sindicatos de Guadalajara y a los trabajadores del azúcar de Los Mochis, víctimas recientes de un golpe interno maquinado por la CTM. En el espacioso seno del almazanismo cabía también el trotskista Partido Revolucionario Obrero Campesino (PROC), encabezado por Diego Rivera, cuyo enlace ilícito con la derecha fue el resultado lógico del apenas más lícito enlace del PCM con el centro.

El almazanismo constituía, pues, una cueva de Adulam en la cual se reunían todos los grupos que eran hostiles a la manipulación oficial y criticaban a un ré-

59. *Ibid.*, pp. 100-105; Virginia Prewett, *Reportage on Mexico*, Nueva York, 1941, pp. 184-188.

60. John Wotnick, Jr., *Zapata and the Mexican Revolution*, Nueva York, 1969, p. 80 (hay trad. cast.: *Zapata y la Revolución mexicana*, Siglo XXI, México, D.F., 1969); Davidson, *Ciudad de México*, 9 de enero de 1940, FO 371/24217, A1301.

gimen que, según su candidato, lejos de hacer realidad las promesas de la Revolución, había desorganizado la economía y traído carestía y pobreza al pueblo.⁶¹ Este fue el tono del llamamiento de Almazán: amplio, ecléctico, crítico con el régimen, pero con unas propuestas que no eran demasiado específicas ni demasiado radicales. Almazán censuraba el fracaso económico, la corrupción oficial y la nociva influencia extranjera, fuese nazi o comunista; ponía a la izquierda como un trazo (especialmente a Lombardo) y recurría a otra clase de populismo, conchuyendo los discursos con gritos de «Viva la Virgen de Guadalupe» y «Mueran los gachupines» (los «gachupines» ya no eran los españoles que calzaban espuelas de la época colonial, sino los odiados refugiados republicanos). El propio Ávila Camacho hacía hincapié en los valores nacionales y el rechazo al comunismo, por lo que había un gran parecido entre la retórica de los candidatos; Luis González sólo exagera un poco cuando dice que Almazán hubiese podido ser el candidato del PRM y Ávila Camacho, el del PRUN.⁶²

Cárdenas esperaba que se celebrara un debate abierto y que las elecciones fuesen libres. No quería imponer un sucesor al partido ni al país. «Si el pueblo quiere a Almazán —dijo a un colega—, lo tendrán.»⁶³ Aunque característica, esta actitud era nueva y arriesgada. El presidente mismo podía permanecer imperturbable mientras prosperaba la candidatura de Almazán, respaldada por concentraciones enormes como no se habían vuelto a ver desde los tiempos de Madero; incluso pudo reconocer, en la noche de las elecciones, que la oposición había ganado y que Almazán debía subir al poder. Pero otros, al ver que peligraban su posición y su política, mostraron menos ecuanimidad democrática; la *révolution en danger* justificó que se tomaran medidas duras. La CTM entró en acción y presionó a los sindicatos que la constituían, organizó manifestaciones, atacó físicamente las sedes de la oposición, maquinó golpes internos en las organizaciones recalcitrantes (tales como la CGT y el STFRM). Los almazanistas se quejaban de despidos y palizas; hubo ataques contra trenes y mítines, a veces con consecuencias mortales. La administración también demoró las leyes relativas al sufragio femenino, temiendo con razón que las mujeres darían su voto a la oposición. Una campaña sucia culminó con unas elecciones también sucias (julio de 1940), que se celebraron bajo leyes electorales que eran una invitación al fraude y a la violencia. A lo largo y ancho del país facciones del PRM y del PRUN se disputaban el control de las casillas electorales y la CTM utilizó la fuerza para apoderarse de muchas de ellas. Hubo robo de urnas, se registraron numerosos heridos (y treinta víctimas mortales sólo en la capital) e incontables quejas de abusos oficiales. Se dijo que en Monterrey, la capital del feudo de Almazán, obligaron a los trabajadores de correos, e incluso a los presos, a votar a favor de la candidatura oficial, que triunfó por 53.000 votos contra 13.000 (el PRUN dijo que había obtenido 63.000). La prensa comentó que todo ello era una nueva demostración de la «incapacidad democrática» del pueblo mexicano. Es posible que Cárdenas pensara lo mismo. Pero si la fuerza y el fraude eran evidentes, también lo fue la participación generalizada. Poble-

61. González, *Los días del presidente Cárdenas*, p. 227.

62. *Ibid.*, p. 259.

63. Según Luis Montes de Oca, en un memorándum de E. D. Ruiz, 5 de agosto de 1940, FO 371/24217, A3818.

177

ciones como Tampico registraron la mayor afluencia de votantes de todos los tiempos.⁶⁴

El resultado final dio a Ávila Camacho 2,26 millones de votos comparados con los 129.000 de Almazán. El PRUN afirmó que había obtenido 2,5 millones y su afirmación no carecía de fundamento. Desde luego, Almazán ganó en las ciudades principales, donde el control oficial era más difícil y la movilización de la CTM no fue lo que se esperaba; pero en México, como en otras partes de América Latina, el voto cabreste fue favorable al gobierno, justificando así el tranquilizador informe que el secretario de Gobernación dio al presidente la noche de las elecciones de que el voto de los campesinos dirige el resultado de las elecciones a favor de Ávila Camacho.⁶⁵ Al igual que Madero en 1910, Almazán se retiró a Estados Unidos profiriendo acusaciones de fraude y desafíos. La analogía no se pasó por alto: al mártir almazanista general Zarzosa, que resultó muerto cuando la policía intentó detenerle, le asignaron el papel de Aquiles. Serdán de 1940. Pero la analogía no era justa. Los tiempos habían cambiado y Almazán era demasiado astuto. —además de demasiado «gordo, enfermo y rico»— para arriesgarse a una rebelión.⁶⁶ Estados Unidos (como confirmó Alemán en una visita rápida) no ayudaría ni alentaría a Almazán. Y la coalición almazanista, aunque amplia, era demasiado dispar para lanzar un desafío concertado (Lombardo temía a los militares, pero Ávila Camacho y sus partidarios habían tomado las medidas oportunas y Cárdenas tuvo la precaución de hacer cambios en los puestos de mando clave y de visitar personalmente al almazanista norte; a estas alturas los temores de Lombardo al militarismo y al fascismo estaban adquiriendo cierta artificialidad teatral). En un «país organizado» la rebelión tenía que ser un asunto profesional y no una quijotesca repetición de 1910; el régimen del PRM no era el régimen de Porfirio. Sobre todo, el descontento político no entrañaba compromiso revolucionario. Mucha gente de la derecha (sobre todo el grupo de Monterrey) se dio por satisfecha con asestarle un sopapo en las narices al régimen, para que en lo sucesivo fuera más prudente. De igual modo, los sindicatos industriales, al finitar con Almazán, no se comprometieron más con la rebelión armada que con el populismo conservador, aunque se convirtieron en blanco de la administración entrante, que no olvidó su desertión. Así pues, más que una revolución *manqué*, 1940 fue un réquiem por el cardenismo: reveló que las esperanzas de una sucesión democrática eran ilusorias; que el respaldo electoral del régimen tenía que fabricarse; y que las reformas cardenistas, si bien creaban ciertas clientelas leales (algunas eran leales por convicción; otras por cooptación), también habían dado origen a adversarios formidables que ahora esperaban pasar a la ofensiva.

Ávila Camacho se presentó candidato a la presidencia recalcando la conciliación y la unidad nacional, y rechazando el comunismo y la lucha de clases.⁶⁷ Y así continuó después de 1940, con la retórica reforzada por el trauma electo-

ral de aquel año, por la creciente participación de México en la guerra y por la dependencia económica y militar de Estados Unidos fomentada por la contienda. El «presidente caballero» hizo llamamientos sistemáticos a la unidad con el fin de producir, exportar e industrializar el país, así como ofrecer resistencia al fascismo, la inflación y el comunismo. Durante este proceso gran parte de la derecha disidente de 1940 se incorporó a la política oficial (aunque no colonizara al PRM, aceptó las reglas del juego, como también las aceptaron los líderes del PAN e incluso los de la UNS). La izquierda, mientras tanto, se encontraba haciendo de instrumento —o de víctima— en lugar de dirigir la política. No pudo o no quiso detener el movimiento hacia la derecha que la retórica del consenso disimulaba: el declive de la reforma agraria, la limitación del control obrero, un énfasis renovado en la empresa privada y la agricultura comercial, el crecimiento dinámico de las inversiones privadas y extranjeras (y de los beneficios a costa de los salarios), el acuerdo con la Iglesia y la eliminación de la educación socialista.

El acercamiento a Estados Unidos ya estaba en marcha cuando Ávila Camacho subió al poder. Los acontecimientos de 1941-1942, que motivaron la entrada en guerra tanto de Estados Unidos como de México, sirvieron para acelerar esta tendencia. A raíz del ataque contra Pearl Harbor, México rompió sus relaciones con las potencias del Eje, concedió derechos especiales a la marina de guerra estadounidense y a partir de enero de 1942 colaboró en una comisión conjunta de defensa. La principal aportación de México seguía siendo económica: la «batalla por la producción» que el presidente anunció en su mensaje de Año Nuevo de 1942. En mayo del mismo año el hundimiento de barcos mexicanos por submarinos «totalitarios» (alemanes) en el Golfo provocó protestas y —al ver que no se hacía caso de las mismas— una declaración en el sentido de que existía un «estado de guerra» entre México y el Eje. Por medio de este concepto diplomático nuevo (no se hizo ninguna declaración de guerra oficial) el gobierno daba a entender que la guerra era una lucha defensiva, impuesta a un pueblo que no la quería. Durante 1942-1943 la defensa del continente, especialmente de la costa occidental, dominó el pensamiento estratégico mexicano y estadounidense. La cooperación militar empezó pronto, pero chocó con serios obstáculos, monumentos a la relación desigual, históricamente antagónica de los dos países. Para los mexicanos la reorganización y la modernización de las fuerzas armadas tenían mucha prioridad. En 1942 se instituyeron el servicio militar nacional y la defensa civil, se creó el Consejo Supremo de la Defensa, y Cárdenas —que ya mandaba en la importantísima zona del Pacífico— fue nombrado secretario de Guerra (medida que calmó los temores nacionalistas de que la colaboración llegara demasiado lejos y fuese excesivamente rápida, y que reforzó aún más tanto el compromiso de la izquierda con la guerra como su confianza en el futuro). Durante las largas y delicadas conversaciones sobre los derechos militares de los estadounidenses en México (vigilancia con radar, derechos de desembarco, patrullas navales, cadenas de mando) el ex presidente demostró ser un negociador obstinado. Mientras tanto, Estados Unidos proporcionó créditos para la modernización de las fuerzas armadas mexicanas y durante 1940-1943 se registró un breve cambio de dirección en el descenso secular de los gastos militares. El *matériel* nuevo se exhibió en el desfile militar que, como todos los años, se celebró el 16 de septiembre de 1942, con la esperanza de que avivara el entusiasmo de

64. González, *Los días del presidente Cárdenas*, pp. 302-303; *El Universal*, 8 de julio de 1940; *Rees, Ciudad de México*, 12 de julio de 1940, FO 371/24217, A2619 y anexos.

65. *Medina, Ideología y praxis política*, p. 222.

66. *Rees, Ciudad de México*, 9 de febrero de 1940, FO 371/24217, A1654.

67. Davidson, *Ciudad de México*, 9 de enero de 1940, FO 371/24217, A1301; Prewett, *Reportage on Mexico*, pp. 191 y 221.

las masas pacíficas y, con mayor seguridad, de los generales a los que iba destinado, cuyas ansias de participar en la guerra fueron creciendo a medida que se recibía el material nuevo al mismo tiempo que el conflicto empezaba a ser favorable a los aliados. Porque a principios de 1943, una vez ganada la batalla de Stalingrado y (más importante) la de Midway, la postura defensiva de México dejó de tener fundamento. El antiguo temor a un descenso japonés sobre la Baja California y otros puntos del sur fue enterrado definitivamente. Se planteó entonces el asunto de la participación activa, estimulada por generales que querían luchar, por políticos que buscaban un puesto en la conferencia de paz de la posguerra y por Estados Unidos, que consideraban que la participación mexicana sería ventajosa con respecto al resto de América Latina y las futuras relaciones mexicano-norteamericanas. Por consiguiente, se seleccionó una escuadrilla de las fuerzas aéreas —la famosa número 201— y, después de su preparación, se la envió al frente del Pacífico, adonde llegó, lista para combatir, en la primavera de 1945.

Fue un gesto simbólico importante y afortunado desde el punto de vista del gobierno, aunque participaron sólo cuarenta y ocho dotaciones aéreas, todas ellas formadas por profesionales. Más delicada fue la cuestión del servicio militar obligatorio, que reveló el abismo que había entre el compromiso oficial con la guerra y la indiferencia o la hostilidad popular. No se enviaron reclutas al frente, pero ello no venció la antigua antipatía que despertaba el servicio militar, y el problema se complicó cuando ciudadanos mexicanos que residían al norte de la frontera fueron llamados a servir en el ejército de Estados Unidos. (Condonada por un acuerdo gubernamental, esta medida supuso el reclutamiento de unos 15.000 mexicanos, entre los que hubo un 10 por 100 de bajas.) Dentro de México el servicio militar provocó protestas generalizadas, a veces violentas, en las cuales la antigua causa antirrevolucionaria católica se mezcló con un agravio sincero y nuevo (la presencia de Cárdenas en la Secretaría de Guerra fomentó esta amalgama). Se cortaron líneas telegráficas, hubo ataques contra camiones y cuarteles del ejército, todo ello acompañado de gritos de «muerte a Cárdenas y al servicio militar obligatorio», «Viva el sinarquismo» y «Viva la Virgen de Guadalupe». El incidente más grave se produjo cuando trescientos rebeldes lucharon contra el ejército en Puebla. Pero el gobierno dio garantías de que el servicio militar obligatorio no supondría servir fuera de México y ello sirvió para aplacar las protestas; la UNS, que ya estaba debilitada por las divisiones internas y por el deseo de sus líderes moderados de llegar a un acuerdo con el régimen, perdió su última causa, la mejor de todas ellas, y entró en decadencia. En 1944 un decreto del gobierno la disolvió.

Las protestas violentas fueron sólo el ejemplo más extremo de la distancia que separaba las actitudes oficiales y populares ante la contienda. La participación de México había recibido el apoyo de la izquierda (CTM, PCM) y, curiosa y significativamente, de la jerarquía católica, de la mayor parte de la prensa de derechas, del PAN y de otros grupos conservadores. Renació así un poco el nacionalismo bipartidista de 1938. Sin embargo, como revelaron las encuestas, incluso los miembros y cuadros del partido estaban divididos en torno al asunto; el hombre de la calle no compartía el espíritu belicoso del gobierno, a menos que fuera un izquierdista comprometido. *El Tiempo* resumió acertadamente la situación cuando dijo que el «pueblo no organizado» era el menos belicoso y el

más suspicaz.⁶⁸ Al igual que en anteriores causas oficiales —el anticlericalismo, la educación socialista— una minoría organizada impuso la belicosidad a una población escéptica. Ante semejante indiferencia, y temeroso de la posible actividad de una quinta columna (que no se materializó), el gobierno recurrió a controles y exhortaciones. Se suprimieron las garantías constitucionales, se incrementó la vigilancia interna, se concedieron poderes extraordinarios al ejecutivo. En general, estos poderes se usaron con moderación, la suficiente para desviar las críticas. La administración también organizó una campaña sostenida de propaganda cuyo objetivo era ganarse el apoyo popular: así pues, la guerra ofreció un terreno magnífico para construir el consenso nacional con el cual estaba comprometido el régimen y al que ahora también contribuía Estados Unidos, no, como en 1938, en el papel de enemigo externo, sino en el de codemocracia y aliado militar. Destacados políticos engrosaron un coro de unión patriótica que empezó con el solemne entierro de una víctima del torpedeo petrolero *Poirero de Llano* y culminó con el desfile militar del 16 de septiembre de 1943, al que pasaron revista seis ex presidentes, Cárdenas codo a codo con Calles y, por supuesto, Ávila Camacho. La prensa, censurada por la ley pero estimulada decididamente por un generoso suministro de papel de periódico de procedencia estadounidense, colaboró de buen grado; los carteles callejeros y el cine (este último favorecido también por la largueza estadounidense) repetían el mensaje del patriotismo, la unidad del hemisferio y el esfuerzo productivo. La propaganda, tanto mexicana como estadounidense, empapaba a la población, diluyendo el antiamericanismo y estimulando, en primer lugar, la conformidad y, en segundo lugar, la adhesión a la causa aliada.⁶⁹ La penetración del modo de vivir norteamericano —el pochismo que Vasconcelos había denunciado durante años y que había crecido con las carreteras, el turismo y la industrialización del decenio de 1930— se aceleró así durante la guerra, en México igual que en Europa. Coca-Cola, Greta Garbo, Palmolive y el protestantismo parecían ubicuos; y los protestantes (que en mi lo alguno eran los agentes más efectivos del pochismo) empezaron a sufrir una furiosa reacción católica.

La influencia específica de la propaganda bélica es difícil de «valuar y fácil de exagerar. La colaboración económica fue más efectiva en lo que se refiere a cambiar las costumbres mexicanas y vincular los destinos de las dos naciones vecinas. Las tendencias pueden resumirse estadísticamente: en 1937-1938 una tercera parte del comercio de México se hacía con Europa; en 1946 la cifra había descendido hasta quedar en un 5 por 100 (de las importaciones) y un 2 por 100 (de las exportaciones); Estados Unidos absorbió el 90 por 100 de las exportaciones mexicanas en 1940 y suministró el 90 por 100 de las importaciones en 1944. Por otra parte, el comercio exterior de México había aumentado de forma apreciable: las exportaciones, de 6,9 millones de pesos (promedio de 1939-1941 en pesos de 1960) a 9,1 millones (1943-1945), de los cuales 1,1 millones correspondían al dinero que los emigrantes mandaban a casa, las importaciones pasaron de 6,1 millones a 9,1 millones. Durante este proceso México pasó de un superávit del comercio patente en 1942-1943 a un modesto déficit en 1944

68. Torres, *México en la segunda guerra mundial*, pp. 85-86.

69. *Ibid.*, p. 104.

(1,6 millones de pesos) y a déficits todavía mayores en 1945 (2,8 millones) y 1948 (5,4 millones), al relajar Estados Unidos sus controles y producirse una avalancha de importaciones. Al incremento del comercio lo acompañó otro de las inversiones estadounidenses, especialmente en la industria manufacturera. La transición de una economía basada en la exportación de materias primas a otra en la que una importante industria manufacturera satisfacía la demanda interior se aceleró durante la guerra, aunque con la consecuencia de intensificar la participación estadounidense y crear una dependencia sin precedentes del exterior (por una vez el término es totalmente apropiado).

En el campo económico, como en el militar, la nueva intimidad entre México y Estados Unidos no fue fácil de crear. La industrialización era ahora el capítulo clave de la política del gobierno, y Ávila Camacho, Lombardo y otros tenían hincapié en ella por considerarla el medio de ampliar el producto social, liberarse del arazo agrario y mitigar —aunque no evitar— las vicisitudes del ciclo económico. La cooperación con Estados Unidos brindó una vía rápida para alcanzar la industrialización, mas para que confiriese la deseada autonomía económica tenía que ser cooperación en las condiciones apropiadas. Las compañías petroleras intentaron explotar la colaboración bélica y la escasez de fondos de PEMEX para recuperar sus propiedades, pero los mexicanos ofrecieron resistencia, aunque ello conllevara una restricción de los créditos extranjeros. Por razones parecidas, las negociaciones relativas a un tratado comercial bilateral (objetivo a largo plazo de los mexicanos) resultaron arduas, aunque finalmente dieron fruto. México se esforzó en todo momento por proteger la industria nacional mientras negociaba una rebaja de los aranceles estadounidenses, el acceso a créditos de la misma nacionalidad y mayores facilidades para la importación de bienes de capital y de ciertas materias primas (que escaseaban y estuvieron sometidas a controles estadounidenses durante la guerra). Estados Unidos pretendía tener acceso garantizado, a corto plazo, a recursos mexicanos clave (minerales, petróleo y, en no menor medida, mano de obra) y, quizá, la subordinación a largo plazo de la economía mexicana a la suya. El tratado comercial de carácter general que se firmó en diciembre de 1942 fue complementado por una serie de acuerdos específicos que abarcaban productos concretos; entre 1943 y 1945 la Mexican-American Commission for Economic Cooperation encauzó créditos estadounidenses hacia diversos proyectos: acero, papel, presas, energía hidroeléctrica, cemento y productos químicos. De esta manera dieron fruto los anteriores planes de cooperación apoyados por Cárdenas y Roosevelt pero arrinconados en 1938. La oferta de créditos, con todo, fue limitada en su duración y cuantía: en 1946 Estados Unidos ya había desviado sus prioridades hacia Europa, declarando que las instituciones privadas tenían la obligación de satisfacer los requisitos de México.

La segunda guerra mundial, al igual que la primera, provocó un giro espectacular en el movimiento flujo y reflujo de migración mexicana a Estados Unidos (también sufrió un efecto al que se dio menos publicidad y que fue la atracción de emigrantes guatemaltecos en el sur de México, con consecuencias desastrosas para la mano de obra local). Unos diez años después de que las masas de emigrantes se encaminaron hacia el sur, empezaron a volver al norte, a razón de unos 6.000 al mes en el verano de 1942. Llegaban de todas las partes de México y representaban gran variedad de oficios y circunstancias; la mayoría de ellos eran

jóvenes y solteros, a la vez que muchos tenían empleo, una especialización e incluso estudios. Ambos gobiernos procuraron controlar esta corriente espontánea: el estadounidense, con el fin de garantizar mano de obra suficiente para la voraz economía de guerra; el mexicano, para evitar la escasez de mano de obra en su país y los abusos cometidos contra los trabajadores inmigrantes en el extranjero, abusos que los débiles esfuerzos de las autoridades estadounidenses no podían impedir. En 1942 el número de trabajadores y las condiciones de empleo ya se habían fijado por medio de un acuerdo entre los gobiernos. Pero la demanda de puestos de trabajo era tan grande, que cuando la contratación laboral oficial empezó en México las oficinas se vieron sitiadas por los solicitantes; en marzo de 1944 tres mil de ellos se reunieron en el estadio nacional de Ciudad de México para obtener los codiciados permisos de bracero. Un año después el programa oficial amparaba a más de 120.000 trabajadores, cuyas remesas constituían el 13 por 100 del total de ingresos en divisas. Sin embargo, la migración ilegal se producía al mismo ritmo (con las correspondientes deportaciones, que se cifraban en 7.000 al mes cuando la demanda estadounidense empezó a disminuir a partir de 1944). Durante el período 1945-1946 se redujo progresivamente el cupo oficial; los braceros se unieron a los deportados que eran conducidos hacia el sur, donde engrosaban los atascos de la frontera o se alojaban en los barrios de chabolas de San Diego y del Valle Imperial. Para muchos el regreso al sur fue temporal porque un nuevo auge económico pronto atraería inmigrantes —legales e ilegales— hacia los campos y las fábricas del norte.

Así pues, la colaboración económica con Estados Unidos favoreció el proyecto avilacamachista de industrialización, conciliación social y consenso nacional. A su vez, estos objetivos exigían del presidente una actitud ostensiblemente imparcial en lo que se refería a repartir el poder y determinar la política que debía seguirse. Tenía que mostrarse moderado y equidistante en vez de militante y comprometido.⁷⁰ En el primer gabinete existía un buen equilibrio entre la izquierda y la derecha; en el Congreso la Cámara, que era izquierdista, contrarrestaba el conservadurismo del Senado. Pero, del mismo modo que Cárdenas se vio empujado hacia la izquierda, las circunstancias y su propia inclinación empujaron a su sucesor hacia la derecha. En el campo de la educación se produjo un alejamiento del «socialismo», primero en espíritu, luego de nombre. Bajo el nuevo secretario, Vejar Vázquez (1941-1943), la llamada «escuela de amor» (que no tenía nada que ver con la educación sexual que fomentara Bassols) sustituyó oficialmente a las escuelas socialistas; la educación servía ahora para apoyar las anodinas consignas del régimen, y los maestros comunistas se quedaron sin empleo. La nueva situación encantó a los grupos conservadores y católicos, que también acogieron con agrado la mejora de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La derecha oficial, encarnada por Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, también controlaba la Secretaría de Comunicaciones, donde el secretario fomentaba sus propias ambiciones presidenciales, se peleaba con Lombardo y otros radicales supervivientes y (según se decía) abrigaba grandes planes destinados a debilitar a la CTM. También en los estados, las elecciones para gobernador provocaron un desplazamiento hacia la derecha (en 1945 se calculaba que sólo ocho de los

70. Bateman, Ciudad de México, 14 de febrero de 1944, FO 371/38312, AN798.

treinta y un gobernadores eran cardenistas); en el Congreso los debates, las votaciones y los nombramientos revelaban un grado de confianza y agresividad que no se había visto en los conservadores desde los tiempos del maximato. La derecha oficial —en la que destacaban Maximino Ávila Camacho y Abelardo Rodríguez— formuló ahora una retórica nueva, afín a la de la administración en su interés por la unidad, la democracia y la derrota del fascismo, pero también acentuadamente anticomunista, crítica para con la CTM y pintando el cardenismo con los mismos colores rojos. A decir verdad, se hicieron intentos solapados de poner en aprietos al propio Cárdenas y hubo una sucia campaña de prensa contra Lombardo. Los izquierdistas incluso se encontraron con que la mano del ejecutivo actuaba contra ellos, en circunstancias turbias.⁷¹ La izquierda no se veía reducida a la impotencia ante semejantes provocaciones: el presidente tuvo que hacerle concesiones (por ejemplo, arrojar el secretario de Economía a los lobos de la CTM en 1944); y tenía su propio repertorio de jugadas sucias (tales como el artificial consejo de guerra de Macías Valenzuela, ex gobernador de Sinaloa). La Universidad Nacional también fue escenario de un meticuloso acto de equilibrio político. El fuerte abrazo del consenso nacional, al que se había entregado la mayoría de los actores políticos, dificultaba el franco pugilismo ideológico; el resultado eran sucias luchas intestinas en las cuales el ejecutivo, con su control de los tribunales, la maquinaria electoral y organismos paraestatales, tenía una ventaja decisiva frente a organizaciones de masas como la CTM. Tanto el clima como el *modus operandi* de la política estaban cambiando.

A pesar de juiciosas muestras de equilibrio presidencial, la tendencia —que se reveló en las elecciones al Congreso de 1943— era inexorablemente derechista. En parte respondía al deseo del presidente de construir una sólida clientela de centro-derecha en la asamblea legislativa. Para ello disponía de un buen instrumento: la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que hasta entonces había sido un conglomerado difuso y ahora se convirtió en el representante institucional de la clase política en particular y de la clase media en general (clase que era halagada de forma creciente por la retórica oficial). También demostró que era una criatura leal del ejecutivo y un contrapeso tanto de la izquierda oficial (principalmente la CTM) como de la oposición de clase media que había alterado los cálculos del PRM en 1940. Esto se vio con claridad en las elecciones al Congreso que se celebraron en 1943, con una prisa nada decorosa y los habituales chanchullos. La CNOP fue recompensada con 56 de las 144 candidaturas del PRM (la CTM obtuvo 21) y los extremos extraoficiales quedaron excluidos. Ni los comunistas ni la Liga de Acción Política de Bassols ganaron escaños, y el PCM aceptó estoicamente otro revés en nombre del consenso que la guerra requería y protestó menos ruidosamente que Bassols. El PAN, que presentó un puñado de candidatos de clase media en una candidatura democristiana de signo conservador (las imputaciones izquierdistas de fascismo quedaban ya bastante desfasadas), también se llevó una decepción. De hecho, la izquierda radical se encontró con que su atractivo popular disminuía rápidamente a medida que el régimen propiamente dicho «se moderaba» y las provocaciones del cardenismo se desvanecían en el pasado.

71. Medina, *Del cardenismo al avilacamachismo*, pp. 163-172 y 222-224.

También la izquierda oficial estaba cambiando. En 1943 el acérrimo cardenista Graciano Sánchez dejó la jefatura de la CNC a favor de Gabriel Leyva Velázquez, hijo de un mártir revolucionario pero convencido avilacamachista e implacable enemigo de los comunistas. La CTM dirigió sus esfuerzos a limitar las huelgas y sostener la producción económica (cabe decir que de la necesidad hizo virtud: el gobierno tenía poderes para obligarla a colaborar si no lo hacía espontáneamente); y en junio de 1942 se unió a confederaciones rivales en el Pacto Obrero, que abjuró de las huelgas y tomó medidas para que los conflictos se arbitraran con rapidez. A cambio de ello, el gobierno decretó una ley de la seguridad social que entró en vigor —aunque de forma polémica— en 1943. Para entonces Lombardo ya había dejado el liderazgo de la CTM, con típico gesto retórico, y estaba ocupado llevando hacia la causa aliada a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), cuya presidencia desempeñaba desde el nacimiento de esta organización en 1938. Su influencia continuaba pesando, aunque menos de lo que él imaginaba, y se utilizó para reforzar a su sucesor, Velázquez, contra los ataques de los comunistas y de los lombardistas disidentes. Así pues, la izquierda oficial toleró la creciente presencia conservadora en el gobierno, así como los ataques frecuentes de la resurgente derecha. La unidad continuaba siendo la consigna.

Inactiva la izquierda e intensificada su propia autoridad, Ávila Camacho pudo seguir su política de industrialización por medio de la cooperación con Estados Unidos. La industrialización, por supuesto, la habían defendido Lucas Alamán después de la independencia, Porfirio Díaz, Calles y Cárdenas; había prosperado durante el decenio de 1930 a pesar de las reformas de Cárdenas, pero las singulares circunstancias de la guerra parecían especialmente propicias. La tregua social y el Pacto Obrero daban tranquilidad a la industria mientras Estados Unidos, de nuevo complaciente con las necesidades de México, representaba tanto un mercado como, con reservas, una fuente de bienes de capital e inversiones. Se cumplieron las promesas formuladas a la empresa privada en 1940, con una continua retórica reconfortante y con numerosas medidas prácticas: la eliminación del impuesto sobre beneficios extraordinarios, la potenciación de la Nacional Financiera como fuente importante de financiación para la industria, el mantenimiento de un sistema fiscal regresivo, generosas concesiones fiscales y protección arancelaria, y una corte suprema hostil al trabajo. Entre 1940 y 1946 la producción manufacturera creció un 43 por 100 en pesos constantes (59 por 100 si se incluye la construcción: Ciudad de México en especial disfrutó de un prodigioso auge de la construcción). La alimentación, los textiles, los productos químicos y los metales destacaban. La inversión en el sector manufacturero se quintuplicó y las ganancias de los fabricantes fueron abundantes, alcanzando el 18 por 100 sobre el capital invertido en 1941-1942. Así, el ratio de rendimientos del trabajo y el capital pasó de 52:48 en 1939 a 39:61 en 1946. En 1942 el grupo de Monterrey expresó su confianza en que el presidente no seguiría las políticas laborales de su predecesor; confianza que no era infundada (como demostraron los fallos de sucesivos arbitrajes).⁷² Así pues, al asumir el papel de leal oposición demócrata, el PAN no obró totalmente a impulsos de su entusiasmo por la causa aliada.

72. *Ibid.*, p. 300.

Sin embargo, a medida que se acercaba el final del sexenio, el clima económico empeoró. Creció la inflación, generando mayores ganancias (el período 1945-1946 fue de auge para la industria), pero provocando también un nuevo despertar de la agitación obrera, sin que los llamamientos al patriotismo pudieran contenerla con la misma facilidad que antes. La oleada de importaciones de Estados Unidos fue beneficiosa para la oferta de bienes de capital, pero también puso en peligro la balanza de pagos y las industrias nacientes de México. La burguesía industrial, que ahora estaba organizada a un nivel sin precedentes, respondió de dos maneras. Representantes de la naciente industria manufacturera, agrupados en la Confederación Nacional de la Industria de Transformación (CNIT), eran favorables a los acuerdos corporativos con los sindicatos, al arbitraje mínimo de los conflictos laborales, a cierto grado de intervención del Estado en las relaciones industriales, a la protección arancelaria y a una reglamentación rigurosa de las inversiones extranjeras. Basándose en todo esto, la CNIT pudo llegar a un acuerdo con la CTM (marzo de 1945) reafirmando de forma imprecisa la antigua alianza que existiera durante la guerra en bien de la producción. Pero las organizaciones empresariales más veteranas —especialmente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que estaba dominada por el grupo de Monterrey— no veían con buenos ojos la alianza con los trabajadores (nunca habían aceptado el Pacto Obrero), se mostraron partidarias de leyes más duras para impedir las huelgas y se aferraron a los conceptos tradicionales del *laissez-faire* en lo que se refería al papel del gobierno. El sector empresarial salió de la guerra más fuerte que antes, así política como económicamente, pero también dividido y con una fracción importante que abogaba por una política de conservadurismo enérgico y era defensor de la libre empresa.

Los sindicatos mostraban su irritación bajo las restricciones que les habían impuesto —tanto el gobierno como los sindicatos— en un momento de inflación creciente. En 1942 el vínculo con Estados Unidos, a la que se sumaron factores nacionales (crecimiento de la población, déficits públicos y malas cosechas en 1943-1945) comenzó a generar tasas de inflación muy superiores a las que habían causado preocupación a finales de los años treinta. El índice del coste de la vida (1939 = 100) subió hasta 121 en 1942, 198 en 1944 y 265 en 1946, con los alimentos y los bienes de consumo básicos marchando a la cabeza (mientras el índice de precios al por menor se multiplicaba por dos y dos tercios entre 1940 y 1946, el precio del maíz se triplicaba, el de los frijoles y la carne se cuadruplicaba). Además, las contramedidas oficiales resultaron menos efectivas que en 1938-1939. Los intentos de limitar la oferta monetaria, evitar la especulación y el acaparamiento, y reducir las subidas de los precios empezaron en 1941; su fracaso se hizo evidente en el aceleramiento de la inflación y el auge del mercado negro, así como en más controles, medidas y sanciones que proliferaron después de entrar México en la guerra. La empresa privada, que obtenía sustanciales beneficios, puso objeciones a las restricciones, mientras que la CTM pidió que se tomaran medidas más duras para reducir la inflación y subir los salarios. La restricción salarial era muy aguda; entre 1940 y 1946 los precios casi se triplicaron, pero el salario mínimo apenas si se duplicó; en el período 1946-1947 los salarios reales alcanzaron uno de los niveles más bajos de la historia, ya que disminuyeron hasta una cuarta parte en la industria y más en otros sectores. Las penalidades que soportaban las masas populares contrastaban con el consumo

ostentoso de los nuevos ricos creados por la guerra, «las clases privilegiadas que sólo pensaban en enriquecerse antes de que terminara la guerra».73 Tanto el presidente como su heredero forzoso tuvieron que tomar nota de ello. En 1942-1943 las quejas razonadas de la CTM ya eran secundadas por los sinarquistas, por manifestantes callejeros y por el aumento de las huelgas, que a menudo no estaban autorizadas por los sindicatos. Se quemaron autobuses en Monterrey para protestar contra el aumento de las tarifas; en 1944 las colas de necesitados que esperaban recibir comida gratis y las marchas del hambre ya constituían un espectáculo habitual. Hasta el nuevo sistema de seguridad social, que se había introducido para apaciguar a los trabajadores, surtió el efecto contrario, y la deducción de las cotizaciones de los salarios, que ya eran magros de por sí, provocó una serie de disturbios, los más graves de ellos en Ciudad de México en julio de 1944. Las huelgas, oficiales y extraoficiales, fueron en aumento durante el período 1943-1944, y también aumentaron las subidas salariales que la patronal concedía anticipadamente para comprar la benevolencia de los sindicatos poderosos. Por consiguiente, los miembros de los sindicatos importantes estaban mejor protegidos de la inflación que la mayoría de los trabajadores rurales o de cuello blanco, a cuyas penalidades se sumaban las carestías generadas por la contienda (por ejemplo, de petróleo y de caucho) y los recortes de los servicios urbanos (transporte, electricidad). Algunos buscaban compensación en «la mordida», es decir, el soborno, lo cual obraba en detrimento de la ética pública.74

También los trabajadores empezaron a poner en duda el propósito de la «tregua social», que ahora parecía más que nada un medio de incrementar las ganancias a expensas de los salarios. Al hacer frente a la renovada combatividad obrera, el gobierno encontró un aliado en Lombardo, cuyo compromiso con el consenso había dejado de ser una táctica para convertirse en un artículo de fe. Debido a la progresiva desaparición de la amenaza fascista, antes tan esgrimida, Lombardo abogaba ahora por una alianza nacional de trabajadores y burgueses contra el imperialismo extranjero. El acuerdo entre la CTM y la CNIT de marzo de 1945 pareció el preludio de dicha alianza, pero la CNIT no hablaba en nombre de todos los empresarios mexicanos. El grupo de Monterrey no estaba para pactos ni veía con buenos ojos el activismo obrero. Se peleó con la CTM en un importante conflicto que se suscitó en la Cristalería Monterrey (verano de 1946), durante la cual la ciudad quedó paralizada brevemente y se evitó una huelga general por poco. La intervención presidencial calmó los ánimos, pero no pudo resolver un conflicto que seguía vivo cuando Ávila Camacho abandonó la presidencia, dejando a su sucesor un legado de elevada inflación, salarios reales en descenso y reanudación de los conflictos industriales.

En la agricultura, al igual que en la industria, la administración afirmaba que era imparcial y que defendía tanto la propiedad ejidal como la privada. En la práctica, sin embargo, el ejido, elemento central del proyecto cardenista, fue relegado a un segundo plano y se cambió su funcionamiento interno. El cambio fue en parte una reacción contra el cardenismo; en parte una respuesta al sinarquismo y el almanismo; y en parte el reconocimiento de que era necesario in-

73. Cheetham, Ciudad de México, 10 de enero de 1944, FO 371/38312, AN293.

74. *Ibid.*; Lesley Byrd Simpson, *Many Mexicos*, Berkeley, 1971, pp. 342-344 (hay trad. cast.: *Muchos Méxicos*, FCE, México, D.F., 1977).

crementar la producción agrícola, tanto para el consumo como para la exportación (necesidad intensificada por la escasez y la inflación resultantes de la guerra). Se protegieron más propiedades privadas y las nuevas concesiones a agricultores privados incluidas en el Código Agrario de 1942 también figuraban como incentivos en los planes que trazó el gobierno para colonizar las costas: la «marcha hacia el mar». Se ampliaron las garantías contra la expropiación que Cárdenas ofreciera a los pequeños propietarios, y los terratenientes privados se beneficiaron de forma desproporcionada de las importantes inversiones que la administración hizo en regadíos, así como de los créditos públicos y de la inflación. Aunque no cesó, el reparto de tierras disminuyó hasta quedar reducido a una tercera parte del que se llevara a cabo durante la época de Cárdenas. La tierra repartida era ahora de calidad inferior (algunos beneficiarios rehusaron aceptarla) y los retrasos administrativos se prolongaron. Habían terminado los tiempos de las grandes iniciativas presidenciales, de drásticas desmembraciones de antiguos latifundios. Los terratenientes se percataron de que ahora podían contar con la neutralidad, cuando no con el apoyo decidido, del gobierno central, que históricamente había sido el agente que determinaba el ritmo de la reforma. Los litigios volvieron a ser prolongados, costosos y corruptos, ya que reaparecieron las viejas estratagemas del maximato: los «prestanombres», la seudodivisión de las haciendas, los guardias blancos y la violencia. La restauración del «amparo agrario» (arma clave de la defensa jurídica de los terratenientes) se estudió y finalmente se implementó bajo el siguiente gobierno. A medida que la CNC se convertía en un régimen caciquil y de cooptación, cada vez fue más frecuente que los ejidatarios constituyeran las clientelas leales del presidente o el gobernador, mientras los terratenientes privados se organizaban más que nunca.

Los ejidatarios se encontraban ante una creciente inseguridad que intensificaba su dependencia clientelista: escasez de créditos, ataques políticos (los ejidos colectivos eran blancos favoritos), incluso la pérdida pura y simple de la tierra ejidal, especialmente en zonas donde su valor subía a consecuencia del turismo (por ejemplo, en Guerrero) o de la urbanización. El tamaño relativo, aunque no el absoluto, del sector ejidal empezó a descender gradualmente. Las estructuras internas cambiaron porque el gobierno estimuló la parcelación de los ejidos comunales (política que respondía a una demanda general y que contaba con amplio apoyo político desde la UNS hasta el PCM). La modalidad colectiva se conservaba cuando se consideraba económica (esto es, rentable: algunos ejidos colectivos eran muy productivos y hacían su aportación a las exportaciones); pero ahora se veía sujeta a los imperativos del mercado mundial, de una administración muy interesada en promover las exportaciones y de un funcionariado cada vez más corrompido. Las cooperativas azucareras tenían que obedecer reglas que favorecían a los ingenios privados; en Yucatán las exigencias de la producción para la guerra justificaron que los hacendados recuperasen sus máquinas raspadoras (como dijo un terrateniente, robar a los ejidatarios no era ningún delito porque los propios ejidatarios eran ladrones). La estratificación interna se aceleró al hacerse los caciques ejidales con el control y polarizarse los ejidatarios en una elite relativamente rica y una mayoría semiproletaria, que creció numéricamente debido al rápido aumento de la población.

La resistencia de los campesinos a estos cambios se veía frenada por la tregua social concertada durante la guerra, por la recuperación política de los

terratenientes y por la debilidad de la CNC. El bracerismo y la migración interna, además, ofrecían paliativos. Por ende, las ocupaciones de tierras, que fueron notables en el período 1941-1942, disminuyeron en lo sucesivo. Continuaron las protestas en las zonas que tenían una tradición de activismo: La Laguna y Morelos, donde los guerrilleros de Rubén Jaramillo empezaron a actuar desde 1943, exigiendo que se continuara la reforma y se dieran garantías a los ejidos existentes. Pero estas luchas iban a contrapelo de la tendencia política del momento. La importancia que el propio presidente y los nuevos tecnócratas de los años cuarenta concedían a la productividad y a las ganancias, la creencia en que la agricultura privada era superior al ejido —y, para el caso, que la industria era superior a la agricultura—, todo ello indicaba que había ocurrido un profundo cambio ideológico desde el decenio de 1930. Y parecía que se alcanzaban sus objetivos. Durante el sexenio la producción agrícola creció en alrededor de un 3,5 por 100 anual en términos reales (más o menos la misma tasa que la industria), y las ganancias fueron fruto de una mayor productividad en lugar de una expansión de los cultivos; también aumentaron las exportaciones, con mayor rapidez todavía. A este crecimiento contribuyeron tanto los agricultores privados como los ejidales: entre los primeros había capitalistas agrarios «neolatifundistas» y también rancheros que cosechaban los beneficios de la tenencia segura, la creciente demanda y mejores enlaces por carretera. El ejido, eje de la política cardenista, ya había dejado de ser un proyecto social y económico por derecho propio y se estaba convirtiendo en un accesorio productivo de la próspera economía industrial y urbana, a la vez que los ejidatarios pasaban a ser los clientes más dóciles del partido oficial.

La presidencia de Ávila Camacho terminó en medio de la inflación, el declive de los ejidos, el auge industrial y una dependencia sin precedentes de Estados Unidos. La izquierda, y no en menor medida Lombardo Toledano, albergaba esperanzas de que su suerte mejorase sensiblemente. Por su parte, la derecha, incluida la floreciente burguesía industrial, miraba con recelo la creciente combatividad de los trabajadores y procuraba contener a los sindicatos y a la izquierda, para garantizar así que continuase el avance industrial y tener la certeza de que el aviacamachismo no resultaría una pausa entre ataques de radicalismo, sino un puente que uniera el peligroso cardenismo del pasado con el seguro conservadurismo del futuro. A ambos bandos les parecía que se lo estaban jugando todo: y el resultado de su conflicto en 1946-1949 determinaría el futuro de México durante más de una generación.

La sucesión presidencial —que despertó ambiciones ya en 1942— se centró en dos aspirantes: Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz, director de la campaña de Ávila Camacho en 1940 y luego secretario de Gobernación (secretaría que ahora empezó a desempeñar el papel de vivero de presidentes); y Ezequiel Padilla, antiguo callista, embajador de México en Estados Unidos y uno de los principales arquitectos del nuevo acercamiento mexicano-estadounidense. Ambos eran civiles; la profesionalización del ejército durante la guerra había dado el tiro de gracia al caudillismo. Los candidatos de izquierdas —Javier Rojo Gómez, Miguel Henríquez Guzmán— interpretaron papeles breves, poco gloriosos, antes de que quedase claro que Ávila Camacho era favorable a Alemán, que Cárdenas y la mayoría de los gobernadores de estado aceptaban la decisión pre-

sidencial y que lo mejor que podía hacer la izquierda era inclinarse ante lo inevitable, como efectivamente hizo mientras Lombardo aportaba los sofismas apropiados. En el otoño de 1945, la CTM, la CNC, la CNOP e incluso el PCM ya apoyaban a Alemán, y Padilla se vio obligado a desempeñar el papel de candidato independiente, respaldado por un partido improvisado.

Visto retrospectivamente, el apoyo de la izquierda fue un error costoso. Quizá la resistencia fuese fútil porque los líderes de la CTM, escasamente populares, ejercían el poder siguiendo las reglas del juego en vez de oponerse a ellas. Pero las opiniones que en aquel tiempo se tenían de Alemán eran diferentes de las posteriores. Era el candidato del centro; Padilla, el de la derecha; y, al igual que Ávila Camacho, Alemán predicaba un populismo suave; también prometía cierta democratización del partido. A la empresa privada le ofrecía tranquilidad y el fin de los controles impuestos durante la guerra, pero también afirmaba la preocupación del Estado por la clase trabajadora y su responsabilidad de los problemas de escasez e inflación. Aunque sus palabras tranquilizadoras también se referían a las inversiones extranjeras, la gente veía en Alemán el candidato nacionalista que ofrecería resistencia a la hegemonía económica de Estados Unidos (hasta los estadounidenses compartían esta opinión). Pese a ser un concepto erróneo, sonaba como música a los oídos de Lombardo, a quien el presidente saliente persuadió a que aplazara los planes para el lanzamiento de un nuevo partido lombardista de la izquierda hasta después de las elecciones. El supuesto nacionalismo de Alemán dio al principio un tono ideológico a la relación de la izquierda con él, relación que acabaría mal.

Aunque Alemán tenía asegurada la victoria, se juzgó necesario dar al proceso electoral mayor legitimidad democrática y evitar una repetición de 1940. Una nueva ley electoral exigió que los partidos tuvieran una organización nacional más estricta y que la supervisión federal de las elecciones fuese más atenta; con esto se evitó el tipo de caos y conflicto descentralizado que se habían visto en 1940 y se intensificaron tanto el control oficial de la oposición como el papel del presidente como Gran Elector. El partido oficial aceptó el nuevo orden y experimentó su metamorfosis final, pasando de ser el PRM a ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI): cambio más aparente que real, en el cual la promesa de democratización interna supuso principalmente una degradación del poder de la CTM. Las elecciones de 1946 se celebraron al amparo de las nuevas normas y ello significó que apenas hubo incidentes violentos, a pesar de los habituales abusos y las no menos habituales quejas de la oposición. Ni Padilla ni la izquierda independiente, fragmentaria, ni la derecha —el PAN y el partido sucesor de los sinarquistas, Fuerza Popular— pudieron presentar una oposición comparable con la que Alemán presentara seis años antes. Alemán obtuvo el 78 por 100 de los votos y con ello conquistó la presidencia por un amplísimo margen.

Investido de esta autoridad, el nuevo presidente no tuvo tanta necesidad de seguir una política prudente como su predecesor. Su gabinete estaba repleto de hombres jóvenes, la mayoría de ellos, como el propio presidente, demasiado jóvenes para ser veteranos de la Revolución. Había en él cuatro industriales, gracia del poder que la burguesía tenía ahora en el seno del partido, y sólo dos ministros eran militares. Con la continuada eliminación de gobernadores cardenistas (emplazado a veces para ello duras medidas constitucionales) se hizo

evidente que el poder había pasado a una generación nueva y tecnocrática para la cual la Revolución tenía menos de experiencia personal que de mito conveniente. Su ascensión corrió pareja con la ascensión de la CNOP, la cual, al decaer la CTM, asumió la dirección política del partido, proporcionó los políticos del momento (como el ejército hiciera en otros tiempos) e hizo las veces de base firme del poder presidencial. También corrió parejas con el aumento de la corrupción en gran escala. Fue en este período —más que en los años veinte o treinta— cuando el régimen adquirió las características contemporáneas distintivas: supremacía del presidente, monopolio político del partido oficial, diestra manipulación de las organizaciones de masas, dilución de las diferencias de clase e ideología en el disolvente del nacionalismo.

Las ideas y los mecanismos del cardenismo se aplicaron ahora a nuevos fines. La sucesión de Alemán se produjo en un momento en que la influencia de Estados Unidos —influencia económica, política, cultural— llegaba a todas partes y tenía una magnitud sin precedentes, sobre todo debido a la fuerza que había adquirido en ciertos círculos del país. En otros tiempos el México revolucionario había tenido que tratar con liberales de la Casa Blanca que simpatizaban vagamente con la Revolución aunque a veces se entrometieran (Wilson, FDR); o con conservadores pragmáticos (Taft, Coolidge) cuya antipatía se veía suavizada por la prudencia del hombre de negocios. Ahora México se encontraba ante el Estados Unidos de Truman, la Doctrina Truman, la «política de contención» y la resolución 248 del Consejo de Seguridad Nacional; la ideología y la geopolítica servían de base de una política sistemática de intervención, presión y cooperación. En tiempos de Roosevelt, Estados Unidos ya se había mostrado muy interesado en que la estrecha cooperación militar existente durante la guerra continuara al llegar la paz; y en la Conferencia de Chapultepec, celebrada en 1945, insistió en sus obsesivos argumentos en pro de un sistema abierto, libre-cambista, es decir, favorable a la continuación de la hegemonía estadounidense en América Latina. Alemán, a quien veían como un nacionalista quisquilloso, se esforzó al máximo por tranquilizar a Estados Unidos y prometió que la colaboración económica continuaría, a la vez que condescendía con los nuevos prejuicios impuestos por la guerra fría. Con esta actitud sentó la pauta del sexenio, período en que el anticomunismo, integrado en el tradicional discurso nacionalista y presentado bajo la forma de la nueva polarización de la democracia y el comunismo, pasó a ser un elemento básico de la política mexicana, elevado al rango de doctrina oficial.⁷⁵ La tradición revolucionaria descartaba las formas más crudas de «macartismo»; pero también proporcionaba la mejor defensa ideológica contra el comunismo, que, al igual que el fascismo en años anteriores, podía presentarse como una peligrosa importación del extranjero. Así, en México como en Europa, la cruzada democrática contra el fascismo se transmutó de modo imperceptible en cruzada democrática contra el comunismo y, al igual que en los primeros años treinta, la naturaleza ideológica de la política cambió rápidamente, dejando a la izquierda debilitada y a la defensiva mientras que la derecha se ufana de su causa nacionalista nueva y democráticamente justifi-

75. Luis Medina, *Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: Civilismo y modernización del autoritarismo*, México, 1979, p. 110.

cada. Del anticomunismo de Alemán pronto se hicieron eco el presidente del partido, líderes como Fernando Amilpa, el veterano de la CTM y compinche de Fidel Velázquez, y portavoces del mundo empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que denunciaba el papel subversivo que las células comunistas desempeñaban en los grandes sindicatos nacionales. El anticomunismo resultó especialmente efectivo en unos momentos en que Lombardo estaba formando como podía su nuevo partido de izquierda, en que los principales sindicatos mostraban una combatividad renovada y en que, por supuesto, el clima de la política internacional se estaba enfriando rápida y propiciamente. Así pues, el logro más decisivo de la administración Alemán fue de carácter negativo: el aislamiento y debilitamiento de la izquierda y la campaña concertada contra los trabajadores organizados.

Después de aplazar amablemente el lanzamiento de su nuevo partido, Lombardo emprendió ahora la continuación de su viejo proyecto —una alianza amplia, nacionalista y antiimperialista de grupos progresistas— fuera del partido oficial, pero sin oponerse a él. Pero el PRI no apreció esta amistosa rivalidad; y tampoco los comunistas simpatizaban del todo con ella. Finalmente, en junio de 1948 se fundó el Partido Popular (PP), que agrupaba a miembros desafectos de la izquierda oficial (Lombardo, Bassols, Rivera) y a ciertos grupos obreros y campesinos detrás de un programa nacionalista y moderado. Pero, como revelaron las elecciones estatales de 1949, el PRI no quería tener nada que ver con el PP y empezó a presionar a Lombardo (cuya propia candidatura presidencial fracasaría en 1952) como un compañero de viaje o un absoluto instrumento de Stalin, «comprado por el oro de Moscú». La CTM, que al principio había apoyado tíbiamente a Lombardo a cambio de su cooperación contra los sindicatos independientes, ahora se opuso a él y le hizo blanco de calumnias parecidas, lo cual concordaba totalmente con su sistemática postura anticomunista de aquel momento.

Los tiempos habían cambiado desde 1933, año en que Lombardo había lanzado con buena fortuna su disidente CGOCM, y el partido oficial, que maduraba con rapidez, ahora quería y podía sofocar semejantes rivalidades. Un factor que influyó decisivamente en el resultado fue el enfrentamiento entre el régimen y los trabajadores. La prolongada colaboración durante la guerra y la inflación habían dejado una herencia de divisiones, disensiones y exigencias acumuladas y Lombardo esperaba sacar partido de ellas. En particular, los principales sindicatos industriales (con el STFRM en el lugar más destacado) acogían muy mal la continua docilidad de la CTM, y en 1947 ya estaban dispuestos para enfrentar a sus líderes, que a su vez podían contar con el apoyo de multitud de sindicatos y federaciones menos importantes. La antigua división de 1937 volvió así a la superficie, agravada por las tendencias habidas durante la guerra y planteada ahora en términos de «purificación» (es decir, cambio y militancia) contra continuismo. El gobierno, que estaba entregado a la industrialización, no podía dar cabida a la combatividad sindical, y la erosión de la influencia de Lombardo descartó su consabido papel de árbitro y garantizó que la confrontación con el movimiento obrero sería tanto más intensa. Las escaramuzas de 1938-1946, que nada habían decidido, dieron paso al conflicto declarado de 1947-1949.

Los líderes de la CTM pararon el golpe recurriendo a los habituales métodos de manipulación electoral; la CTM optó, pues, por el continuismo, el charrismo y, en general, un apoyo total a un gobierno de la derecha, que justificó en términos de nacionalismo y moderación («no al extremismo; rechazo tanto de la izquierda como del imperialismo»). Los militantes que se quedaron con la CTM (incluidos algunos comunistas que se sacrificaron) perdieron todo poder. Se barrieron los vestigios de sindicalismo y socialismo. Se repudió la táctica de la huelga general y se sustituyó el antiguo lema de la CTM —«por una sociedad sin clases»— por pamplinas nacionalistas: «por la emancipación de México».⁷⁶ Respondiendo a ello, los ferroviarios encabezaron una secesión de la CTM en la que había electricistas, tranviarios y sindicatos de menor importancia (marzo de 1947). Su nueva organización, la Confederación Única de Trabajadores (CUT), contó pronto con el respaldo de otros disidentes importantes, los petroleros y los mineros, con quienes se firmó un pacto de solidaridad, formándose así una triple alianza mexicana que desafiaba francamente a la CTM y su «harpía bandera de anticomunismo». Prosiguió la fragmentación de la CTM y hubo disensiones internas, expulsiones y, en 1948, la creación de una central rival, la Alianza Obrera Campesina Mexicana (AOCM), en la cual elementos campesinos, especialmente ejidatarios de La Laguna, ocupaban un lugar destacado. Ante la oposición de estos rivales, que probablemente eran superiores en número, la CTM tuvo que hacer frente a la mayor prueba desde 1937; y esta vez ni Lombardo ni Moscú, ni tan sólo el régimen (que quería victorias en lugar de componendas), llamarían a la conciliación.

La clave del conflicto la tenían los principales sindicatos independientes, los petroleros y los ferroviarios. Los primeros se habían declarado en huelga durante el primer mes del sexenio (fue la culminación de los conflictos esporádicos que sufrió la industria durante la guerra). El gobierno declaró que la huelga era ilegal, desplegó tropas e impuso una resolución arbitrada. El sindicato, cuya respuesta no fue unánime, aceptó el nuevo acuerdo, al amparo del cual la PEMEX pudo estabilizar la nómina e incrementar el control gerencial (el gobierno sancionó plenamente ambos objetivos, pues estaba muy interesado en incrementar la producción y asegurarse créditos estadounidenses). En la batalla por el poder que luego se libró en el seno del sindicato, el gobierno dirigió sus esfuerzos a garantizar la victoria de la colaboración y el charrismo. También tenía puestas sus miras en una racionalización parecida de los ferrocarriles, que habían sido objeto de una importante investigación en 1948. De nuevo se produjo una escisión en el sindicato y el gobierno intervino a favor de la facción de Jesús Díaz de León (el Charro), que era fervientemente anticomunista. Su aval principal fue a la cárcel bajo acusaciones de corrupción, las cuales eran verosímiles; se embargaron delegaciones sindicales independientes; hubo una expulsión sistemática de comunistas. Rota la independencia del sindicato y con el Charro instalado en el poder, el gobierno pudo proceder a reorganizar los ferrocarriles, bajo la amenaza de despidos en masa y recortes salariales. Pero los nuevos líderes del sindicato se encontraron ante el clásico dilema de la burocracia obrera oficial (dilema que Fidel Velázquez soportaría durante más de una generación): aunque su campaña de

«moralización» le granjeó cierto apoyo auténtico, Díaz de León era esencialmente una creación del gobierno; pero tanto él como el gobierno tenían que mantener una apariencia de representación y cooperación de los trabajadores. La coacción sola no podía hacer que los ferrocarriles funcionaran. Por consiguiente, al «charrazo» le siguieron la negociación y un nuevo convenio colectivo (1949), en el cual la reducción de costes se combinaba con medidas juiciosas de protección de los puestos de trabajo. De esta manera incluso el charismo cumplía visiblemente algunas de sus promesas, y muchos consideraron que era preferible a un activismo peligroso, quijotesco. En 1947 un líder obrero decía que era mejor un mal convenio colectivo (malo en el sentido de que frenaba los derechos de los obreros) pero que al menos se respetase, que uno bueno que se quedase en letra muerta.⁷⁷ En esto radicaba el secreto del éxito que la CTM se apuntaba en decenios venideros. Por decirlo de otro modo, la contrarrevolución de Alemania — la derrota de los elementos radicales, sindicalistas y cardenistas que se resistieron al proyecto alemanista — tuvo que ser mucho más sutil y moderada que las que posteriormente se llevaron a cabo en otras regiones de América Latina y que siguieron principios comparables pero requirieron una franca represión militar.

Una vez rota la independencia del STFRM, se marchitó la causa de los demás sindicatos industriales: los mineros, los petroleros, los electricistas. Habían recibido el «charrazo» con protestas pero sin ninguna huelga. Sólo los mineros y los divididos petroleros se afiliaron a la nueva federación central lombardista, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); y ésta, al igual que el PR, su primo político, pronto demostró que era un blanco vulnerable de la hostilidad del gobierno. Se le negó el reconocimiento, las huelgas que secundaba eran declaradas ilegales; sus sindicatos afiliados sufrían intervenciones y golpes internos; sus militantes campesinos se veían sometidos a los diversos métodos de persuasión de la CNC y la burocracia ejidal. Después de quedar en poder de la facción charra, sin posibilidad de escapar, el sindicato de petroleros volvió al redil de la CTM (1951), sentando con ello un precedente que seguían otros sindicatos afiliados. El control de la CTM se reafirmó así, pagando un precio. Destruída la fuerza de la izquierda independiente, y con la derecha radical en vías de desaparición o transmutándose rápidamente en una legal oposición democristiana, la paz del PRI reinó. El régimen pudo proceder de acuerdo con el modelo que había escogido para el desarrollo industrial y la acumulación de capital sin temer a una importante movilización social. A escala nacional, 1949 reveló un panorama totalmente distinto al de 1946; también a escala local las posturas del decenio de 1940 presenciaron la cristalización de una estructura política y un patrón de comportamiento político que ha continuado hasta ahora.⁷⁸ Si la Revolución experimentó un término decisivo, fue entonces. El experimento cardenista, cada vez más controlado a partir de 1938, se interrumpió ahora definitivamente, por obra de unos hombres cuyo ingenio encontró nuevas formas de utilizar el viejo material de laboratorio. O, cambiando la

metáfora, los civiles y técnicos del sexenio de Alemán, imbuidos de una modernizadora ideología de la guerra fría, y de una ética basada en el enriquecimiento rápido, recogieron los cascotes del cardenismo y utilizaron el material — el partido corporativo, las instituciones de masas, el ejecutivo poderoso, el ejército domesticado y el campesinado subordinado — para construir un México nuevo. El material era cardenista, pero el plan fundamental lo trazaron ellos. Lo construyeron para que durase.

77. Hernández Abrego, del sindicato de petroleros, citado en Rosalía Pérez Linares, «El charrazo sindical en la década de los sesenta. El sindicato petrolero», en *Historia y crónicas de los charrazos en México*, México, D.F., 1981, p. 172.

78. *Ibid.*, p. 94; Benjamin, «Passages to Leviathan», p. 268.